



Bogotá, D.C., 11 de febrero de 2026

Honorables magistrados

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA** (Reparto)

E. S. D.

<b>ASUNTO</b>	Acción de Tutela con medida cautelar
<b>REFERENCIA</b>	Procedimiento de revocatoria de inscripción de candidatura, radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029934
<b>ACCIONANTE</b>	Luis Evelis Andrade Casamá- Presidente/Rpte Legal Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS
<b>ACCIONADOS</b>	Consejo Nacional Electoral (R/te Legal. Cristián Ricardo Quiroz Romero) – Registraduría General de la Nación (R/te Legal. Hernán Penagos Giraldo)

Respetados magistrados.

**Luis Evelis Andrade Casamá**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía de No. 12.000.773, en mi calidad de presidente y representante legal del Movimiento Indígena y Social “MAIS”, haciendo uso del artículo 86 de la Constitución Política, comedidamente acudo ante ustedes con el fin de interponer **ACCIÓN DE TUTELA**, en contra del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la vulneración de nuestros derechos fundamentales a la participación política, en la dimensión de ser elegido (Art. 40-1 de la Constitución Política), el debido proceso administrativo (Art. 29 de la Constitución Política) y el derecho a la igualdad (Art. 13 de la Constitución Política), tras la revocatoria de la inscripción del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, postulado e inscrito como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Meta el 7 de diciembre de 2025, a nombre de la Coalición Pacto Histórico- Frente Amplio, conformada por el Movimiento Político Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS. Lo anterior con fundamento en los siguientes hechos:

## **I. HECHOS**

- 1.1. El 7 de diciembre de 2025 inscribimos como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Meta al ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN**, a nombre de la Coalición Pacto Histórico- Frente Amplio, conformada por el Movimiento Político Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”. (anexo formulario E6 – CT)

**www.mais.com.co**

Bogotá - Calle 37 #28-11

Teléfonos: (+57)7214470 - Celular:(+57)3142159712

movimientomais@mais.com.co



- 1.2. Tras solicitud de revocatoria de inscripción presentada por varios ciudadanos y, previo reparto interno de negocios realizado en el CNE el 16 de diciembre de 2025 le correspondió al Despacho del Magistrado ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO, conocer del trámite de los radicados Nos. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935 (Anexos) y a ALTUS ALEJANDRO BAQUERO RUEDA, con radicado CNE-E-DG-2026-001210.
- 1.3. Mediante escrito radicado el 16 de enero de 2025, a través de apoderado especial presentamos contestación en ejercicio del derecho de defensa y contradicción. (anexo documento)
- 1.4. El día 5 de febrero de 2026, en audiencia pública de Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, dentro de los expedientes radicados Nos. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935, se leyó, adoptó y notificó en estrados la **Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026 (05 de febrero)**<sup>1</sup>, mediante la cual se decidió revocar la inscripción del candidato JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, notificando como resolutive del caso, lo siguiente.

**RESUELVE:**

**“ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR** la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, en el marco de la coalición denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

**PARÁGRAFO PRIMERO: ADVERTIR** a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones producto de la presente decisión deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integran la coalición, de manera que como consecuencia de la revocatoria de listas inscritas de dicha modalidad, estas puedan proceder a la inscripción individual de sus listas en los términos y dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011”. (se resalta)

---

<sup>1</sup> Por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN** como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935**. (anexo)



- 1.5. Durante dicha audiencia, la secretaria técnica de Sala dio lectura íntegra al parágrafo primero del artículo primero del acto administrativo<sup>2</sup>, cuyo contenido fue claro, expreso y garantista, al advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, como consecuencia de la revocatoria, debía garantizarse el derecho a la participación política de los candidatos y colectividades que integraban la coalición, permitiéndoles proceder a la inscripción individual de sus listas, dentro del término previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.
- 1.6. Esa decisión fue pública, formal y válida, y generó una expectativa legítima en cabeza del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS y de nuestro candidato, en el sentido de que podríamos ejercer nuestro derecho a recomponer o reinscribir de manera independiente dentro del periodo de modificaciones.
- 1.7. Manifestación la anterior, igualmente ratificada por los magistrados Benjamín Ortiz<sup>3</sup> y Alba Lucía Velasquez<sup>4</sup>, quienes confirmaron a la audiencia presente el sentido y/o alcance de las decisiones que se estaban adoptando en sala plena en ese momento<sup>5</sup>.
- 1.8. No obstante, el 6 de febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral expidió la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026 (06 de febrero)<sup>6</sup>, con el propósito de “corregir la irregularidad en la notificación” de la Resolución 0844, alterando sustancialmente el contenido de los párrafos leídos y notificados en audiencia pública, restringiendo de manera grave y sobreviniente el alcance de los derechos previamente reconocidos, así:

***“(…) PARÁGRAFO PRIMERO: La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.***

***PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso en que la referida agrupación política relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer la inscripción revocada, de***

<sup>2</sup> Lectura de la parte resolutive de la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, realizada por la secretaria general en sala plena del CNE 1:37:34 a 1:41:01 visible en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=6mHI7Pcq0Fk>

<sup>3</sup> Pronunciamento del magistrado Ortiz, visible a partir del minuto 47:37 al 49:18 en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/live/pkqyGdsDTzA?si=vDw00fyHz7w3luY>

<sup>4</sup> Pronunciamento de la magistrada Alba Lucía Velasquez, visible a partir de 1:47:30 a 1:48:15 en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=6mHI7Pcq0Fk>

<sup>6</sup> Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025 029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**. (Anexo)





*acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025. (...)”*

- 1.9. Recurrida la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026 (06 de febrero) mediante recurso de reposición y presentadas otras solicitudes de nulidad, no solo por parte del movimiento y candidato, sino también por los agentes del Ministerio Público (Procuradores delegados)<sup>7</sup> quienes solicitaron se repusiera la decisión, el CNE a través de **Resolución de Sala Plena 0918 de 7 de febrero de 2026**<sup>8</sup>, resolvió negar la reposición y rechazar de plano las nulidades propuestas, confirmando en todas sus partes las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026.
- 1.10. Ante la anterior situación y teniendo en cuenta que en otros casos con similares supuestos fácticos y jurídicos se había dispuesto la posibilidad de recomposición, el domingo ocho (8) de febrero (fecha límite para realizar modificaciones de inscripciones) en representación del suscrito, el Dr. Humberto Rafael Méndez Rojas se dirigió a la Delegación Departamental Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en compañía de los ciudadanos José Manuel Sandoval Garzón, Juan David Martínez Bolaño y Elizabeth Neira Benavides, con el propósito de inscribir lista de candidatos única y en nombre propio del MAIS, conforme a los términos dispuestos en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 (De pleno derecho), por la revocatoria de la inscripción de nuestro candidato Sandoval, dentro de la coalición PACTO HISTÓRICO-FRENTE AMPLIO. Inscripción que nos fue denegada por los funcionarios, OLMER ALIER MUÑOZ ROCERO (Registrador delegado) y ALFONSO LINARES RUIZ (Coordinador electoral), bajo el amparo de la Resolución de Sala Plena 0918 de 7 de febrero de 2026 expedida por el CNE<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Anexo memorial.

<sup>8</sup> Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNEE-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935**. (anexo)

<sup>9</sup> Anexo constancia de presentación en las instalaciones de la Delegación Departamental Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, radicada bajo el número 000562 a las 16:47:43 del 2026/02/08.





## **II. FUNDAMENTOS CONVENCIONALES, CONSTITUCIONALES Y JURISPRUDENCIALES**

La presente acción de tutela encuentra sustento directo en la Constitución Política, en el bloque de constitucionalidad y en una línea jurisprudencial reiterada de la Corte Constitucional que reconoce la especial protección de la participación política, particularmente cuando esta involucra a organizaciones políticas indígenas y a comunidades históricamente marginadas.

El artículo 7 de la Constitución Política reconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana como uno de los pilares del Estado Social de Derecho. Este reconocimiento no tiene un carácter meramente simbólico o programático, sino que impone a todas las autoridades un deber positivo de protección, promoción y garantía efectiva de las formas propias de organización política de los pueblos indígenas. En consecuencia, cualquier actuación administrativa que pueda incidir en la participación política de una organización indígena debe ser examinada bajo un estándar reforzado de constitucionalidad.

De manera concordante, el artículo 40 superior consagra el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, el cual incluye expresamente el derecho a ser elegido. La Corte Constitucional ha precisado que, tratándose de pueblos indígenas y minorías étnicas, este derecho adquiere una dimensión colectiva y reforzada, en atención a su histórica exclusión y subrepresentación en los escenarios de decisión política.

Este entendimiento se ve corroborado por el artículo 171 de la Constitución Política, que establece una circunscripción especial indígena para el Senado de la República, como manifestación inequívoca de la voluntad del Constituyente de asegurar una representación política efectiva de los pueblos indígenas. Este mandato irradia la interpretación y aplicación de todas las normas electorales, incluso aquellas relativas a la revocatoria de inscripciones y modificación de listas, cuando se encuentran comprometidas organizaciones políticas indígenas.

Adicionalmente, el bloque de constitucionalidad refuerza esta protección. En particular, el Convenio 169 de la OIT, incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 21 de 1991, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar libremente en la vida política del Estado y obliga a las autoridades a adoptar medidas especiales para garantizar que dicha participación sea real y efectiva. La Corte Constitucional ha reiterado que este instrumento tiene jerarquía constitucional y aplicación



directa, imponiendo a las autoridades administrativas un deber de facilitación, y no de obstaculización, de la participación política indígena.

Desde la jurisprudencia constitucional, decisiones como las sentencias **SU-510 de 1998**, **T-129 de 2011** y **C-030 de 2008** han sostenido que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional y que cualquier actuación estatal que pueda afectar sus derechos colectivos debe superar un juicio estricto de proporcionalidad, razonabilidad y no regresividad. En materia electoral, este estándar se traduce en la obligación de las autoridades de garantizar que las reglas del proceso no se apliquen de manera formalista o restrictiva en detrimento de la representación política de las minorías étnicas.

### **III. FRENTE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS**

#### **3.1. Vulneración del derecho fundamental a la participación política (artículo 40.1 C.P.)**

Las actuaciones desplegadas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil han vulnerado de manera directa y grave el derecho fundamental a la participación política, en su dimensión de ser elegido, del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN y, de manera colectiva, del Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”.

Esta vulneración no se deriva de la existencia de una inhabilidad constitucional o legal, sino de una cadena de irregularidades administrativas, inconsistencias decisorias y modificaciones extemporáneas del contenido de los actos administrativos, que han generado un escenario de incertidumbre jurídica que impide materialmente la inscripción o recomposición de la lista del MAIS dentro de los términos legales.

Los derechos políticos del accionante están protegidos por tratados internacionales ratificados por Colombia, que forman parte del bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución Política).

3.1.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), aprobado por Ley 74 de 1968:

**Artículo 25:** Toda persona tiene derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; a votar y ser elegida en elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.



La revocatoria y negación de recomposición o re-inscripción, la cual fue otorgada a otras colectividades revocadas, violan este derecho, ya que no se basan en restricciones razonables y proporcionales, sino en una interpretación extensiva de normas internas que no configuran una inhabilidad. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que las restricciones a derechos políticos deben ser excepcionales y justificadas por razones de orden público o protección de derechos ajenos (Comunicación No. 500/1992, Colombia).

3.1.2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada por Ley 16 de 1972:

**Artículo 23:** Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Las restricciones solo proceden por ley, para regular el goce de estos derechos con base en edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal. No se aplica aquí, ya que no hay condena ni inhabilidad constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que las limitaciones deben ser estrictamente necesarias y proporcionales (Caso Castañeda Gutman vs. México, 2008; Caso López Mendoza vs. Venezuela, 2011).

Debe resaltarse que el derecho a postular candidatos corresponde a los partidos y movimientos políticos, y que la exclusión de facto del MAIS del proceso electoral implica privar a una organización política indígena de su posibilidad real de concurrir al certamen democrático, afectando no solo a un candidato a nivel individual, sino lo que es más grave, a las comunidades indígenas que dicha organización representa.

En el departamento del Meta habitan treinta y dos pueblos indígenas reconocidos, entre ellos los pueblos Huitoto, Sikuani (Guahibo), Piapoco, Achagua y Jiw, cuyas comunidades verían seriamente comprometido su derecho a contar con una representación política efectiva en la Cámara de Representantes, si se consolida la vulneración de derechos por parte del CNE.

3.2. **Vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo (artículo 29 C.P.)**





El debido proceso administrativo ha sido vulnerado como consecuencia de la expedición de actos administrativos contradictorios, de la modificación sustancial del contenido de decisiones ya notificadas en audiencia pública y de la utilización indebida de figuras como la “corrección” de actuaciones, por fuera de los presupuestos legales establecidos en los artículos 41 y 45 del CPACA.

La Corte Constitucional ha sido clara en señalar que el debido proceso administrativo exige coherencia decisional, respeto por las etapas del procedimiento y garantía de estabilidad mínima de las decisiones adoptadas, especialmente cuando estas generan expectativas legítimas en los administrados. En el presente caso, la modificación posterior del contenido de la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, inicialmente notificada en audiencia pública, defraudó la confianza legítima del MAIS y de su candidato, quienes ajustaron su conducta a una decisión administrativa válida y eficaz.

### **3.3. Vulneración del derecho fundamental a la igualdad (artículo 13 C.P.)**

La actuación de las autoridades electorales vulnera igualmente el derecho a la igualdad, al aplicar un trato más gravoso y restrictivo al Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, en comparación con otras organizaciones políticas que, en situaciones fácticas y jurídicas análogas, no les fue revocada la inscripción tal como ocurrió en el radicado No. CNE-E-DG-2026-001220, en la circunscripción electoral de Sucre, resuelto en forma diametralmente opuesta, mediante Resolución Sala Plena No. 0789 de 2026 (04 de febrero), pese a tratarse de supuestos fácticos y jurídicos idénticos. Incluso, ocurrió el caso de otras circunscripciones en la que se revocó, pero se le garantizó el derecho a la participación política, brindando la posibilidad de poder modificar o recomponer las listas revocadas.

Este trato desigual resulta aún más problemático cuando recae sobre una organización política indígena, respecto de la cual la Constitución impone un deber reforzado de protección y de adopción de medidas afirmativas que garanticen su participación efectiva en la vida política.

El derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, impone a todas las autoridades el deber de otorgar un trato igual a quienes se encuentren en situaciones fácticas y jurídicas equivalentes, así como de justificar de manera estricta cualquier diferencia de trato que se introduzca entre sujetos comparables. En el ámbito electoral, este mandato adquiere una intensidad reforzada, en la medida en que se encuentra directamente vinculado con el ejercicio



del derecho fundamental a la participación política y con la garantía de condiciones equitativas en la contienda democrática.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que la igualdad no implica uniformidad absoluta, pero sí exige que toda diferencia de trato supere un test de razonabilidad y proporcionalidad, especialmente cuando la medida adoptada incide en el núcleo esencial de derechos fundamentales. En este sentido, cuando la autoridad administrativa se aparta de su propio precedente decisonal frente a casos sustancialmente análogos, sin ofrecer una justificación suficiente, objetiva y coherente, se configura una vulneración directa del derecho a la igualdad.

En el presente caso, dicha vulneración se evidencia con claridad al comparar el tratamiento otorgado por el Consejo Nacional Electoral en una actuación administrativa prácticamente idéntica desde el punto de vista fáctico y normativo, pero resueltas de manera diametralmente opuesta, como se puede apreciar en la lectura de las dos resoluciones. (Anexos) Esto, solo por mencionar un caso, pues se trata de varios.

En efecto, mediante la **Resolución Sala Plena No. 0789 de 2026<sup>10</sup>**, el Consejo Nacional Electoral resolvió negar la solicitud de revocatoria de inscripción de una lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, a pesar de que el solicitante alegaba, al igual que en el caso del Meta, un presunto desconocimiento de los resultados de una consulta interna. En dicha decisión, la autoridad electoral concluyó, entre otras cosas, que, *“el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 no resulta vulnerado, puesto que la obligación de acatar los resultados de la consulta se predica respecto de los candidatos seleccionados en ella, mas no impide que, en desarrollo de acuerdos de coalición válidamente celebrados y previamente previstos, se integre una candidatura avalada por otro partido (...)”*.

Por el contrario, en la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, frente a la lista inscrita por la Coalición PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO en el departamento del Meta, integrada, entre otros, por el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, el Consejo Nacional Electoral decidió revocar la inscripción del candidato José Manuel Sandoval Garzón, bajo supuestos completamente iguales a los analizados en el caso de Sucre (Coalición PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS), pero arribando a una conclusión opuesta, sin que se advierta una diferenciación fáctica o jurídica relevante que justifique ese cambio de criterio.

---

<sup>10</sup> Anexo.



A partir de esta constatación, procede aplicar el test de igualdad desarrollado por la jurisprudencia constitucional, el cual comprende tres etapas: (i) la identificación de sujetos o situaciones comparables, (ii) la verificación de la existencia de un trato diferenciado y (iii) el examen de la razonabilidad y proporcionalidad de dicho trato.

En primer lugar, las situaciones sometidas a comparación son claramente **homogéneas y equiparables**. En ambos casos se trata de solicitudes de revocatoria de inscripción de listas a la Cámara de Representantes, fundadas en supuestas irregularidades relacionadas con procesos de consulta interna, resueltas por la misma autoridad —el Consejo Nacional Electoral—, dentro del mismo ciclo electoral (Congreso 2026–2030), bajo el mismo marco normativo constitucional y legal, y con incidencia directa sobre el derecho fundamental a ser elegido. No existe, por tanto, una diferencia estructural que impida la comparación entre los dos casos.

En segundo lugar, se verifica un trato claramente diferenciado. Mientras en el caso de Sucre el CNE negó la revocatoria y preservó la inscripción, en el caso del Meta adoptó la decisión más gravosa posible, esto es, la revocatoria de la inscripción, con efectos directos y excluyentes sobre la participación política del candidato y del movimiento que lo avala.

En tercer lugar, dicho trato diferenciado no supera el juicio de razonabilidad ni de proporcionalidad. La Resolución 0844 de 2026 (**05 de febrero**), **siendo posterior**, no ofrece una justificación reforzada que explique por qué, frente a hechos y normas sustancialmente análogas, se adopta una decisión opuesta a la contenida en la **Resolución 0789 de 2026 (04 de febrero)**. La autoridad electoral no identifica un criterio objetivo de diferenciación, no explica por qué en el caso del Meta sí se configura la causal de revocatoria y en el de Sucre no, ni demuestra que la medida adoptada sea necesaria, idónea y estrictamente proporcional frente al sacrificio del derecho fundamental a la participación política.

Por el contrario, la decisión adoptada en el caso del Meta desconoce el principio de confianza legítima, rompe la coherencia decisional del órgano electoral y termina imponiendo una carga desproporcionada y desigual al Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” y a su candidato, quienes reciben un trato más gravoso que otros sujetos en idéntica situación jurídica, sin una razón constitucionalmente admisible.

**La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento injustificado del precedente administrativo constituye una forma de discriminación indirecta y vulnera el derecho a la igualdad,**





**en tanto introduce arbitrariedad en la actuación estatal y erosiona la seguridad jurídica.** Este estándar es aún más exigente cuando se trata de decisiones que restringen derechos políticos, pues cualquier limitación debe interpretarse de manera restrictiva y resolverse, en caso de duda, a favor del ejercicio del derecho.

En consecuencia, la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026 configura una vulneración directa del derecho fundamental a la igualdad del del Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” y de su candidato, José Manuel Sandoval Garzón, al imponernos un trato discriminatorio frente a otros actores políticos en situaciones equivalentes, v. gr., Coalición PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS<sup>11</sup>, sin una justificación objetiva, razonable y proporcional, afectando de manera grave nuestro derecho a participar en condiciones de igualdad en el proceso electoral.

#### **IV. PERJUICIO IRREMEDIABLE Y URGENCIA ELECTORAL**

El perjuicio que se cierne sobre el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” y su candidato postulado, José Manuel Sandoval Garzón es actual, concreto, inminente y de imposible reparación posterior, lo cual habilita plenamente la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras se acude al contencioso administrativo

Este riesgo no es meramente hipotético. Por el contrario, es una afectación verificable que, de materializarse, tendría como consecuencia que el MAIS, como su candidato avalado en la coalición, quede excluido de facto del proceso electoral; no por una decisión jurídicamente consolidada y adoptada con pleno respeto del debido proceso, sino por las deficiencias e inconsistencias en el trámite administrativo de la revocatoria y en la posterior negativa de inscripción por parte de la Registraduría.

El calendario electoral impone una urgencia insoslayable. La imposibilidad de reinscribir o recomponer la lista dentro del término previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 produciría un daño irreversible, pues ninguna decisión judicial posterior podría restituir de manera efectiva la participación del MAIS y de sus comunidades en las elecciones del 8 de marzo de 2026.

**La Corte Constitucional ha señalado que, en materia electoral, la pérdida de una oportunidad de participación política configura un perjuicio irremediable, en tanto afecta el núcleo esencial del**

---

<sup>11</sup> Conformada por el MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA, MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”. PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA PTC y el MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO.



**derecho fundamental y no admite reparación integral ex post.** Esta afectación se agrava cuando recae sobre pueblos indígenas, cuya representación política no puede diferirse ni sustituirse sin afectar el pluralismo y la democracia participativa.

## **V. PRETENSIONES**

Con fundamento en los hechos y consideraciones jurídicas expuestas, se solicita al juez constitucional que ampare de manera inmediata los derechos fundamentales a la participación política, al debido proceso administrativo y a la igualdad del Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” y de su candidato inscrito dentro de la Coalición Pacto Histórico-Frente Amplio, ciudadano, JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN.

### **5.1. Solicitud de medida cautelar urgente (Suspensión provisional de actos administrativos)**

Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito de manera **URGENTE** al despacho **DECRETAR MEDIDA CAUTELAR**, consistente en la **SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS JURÍDICOS** de la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, de la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026 y de la Resolución No. 0918 de 2026, expedidas por el Consejo Nacional Electoral dentro de los expedientes CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935, en cuanto impiden la participación política de nuestro candidato José Manuel Sandoval Garzón, dentro de la coalición Pacto Histórico-Frente Amplio, en el certamen electoral del próximo 8 de marzo. Y además, restringen la posibilidad de modificación, reinscripción y/o recomposición de la lista del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS. Esto, hasta tanto se adopte decisión de fondo en la presente acción de tutela.

Asimismo, solicito que, como medida cautelar positiva, se ordene al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil abstenerse de consolidar o ejecutar cualquier actuación que cierre definitivamente la posibilidad de participación del candidato postulado e inscrito por el MAIS en la coalición Pacto Histórico-Frente Amplio, garantizando provisionalmente el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la participación política, en la dimensión de ser elegido, de nuestro candidato y de la organización política indígena accionante.

**La medida solicitada resulta indispensable para evitar un perjuicio irremediable, pues el proceso electoral se encuentra en una fase preclusiva, de modo que la no adopción inmediata de la suspensión conduciría a la exclusión material y definitiva del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS del certamen electoral, no por una decisión administrativa firme y respetuosa del debido proceso, sino como consecuencia directa de las irregularidades, inconsistencias y modificaciones sustanciales introducidas por la propia autoridad electoral en el trámite de revocatoria de la inscripción.**



Debe resaltarse que el acto administrativo contenido en la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026 ya había nacido a la vida jurídica al ser notificado en audiencia pública el 5 de febrero de 2026, generando una expectativa legítima y protegida constitucionalmente en cabeza del MAIS y de su candidato, relativa a la posibilidad de inscribirse de manera independiente durante el período de modificaciones previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011. La posterior expedición de actos administrativos que pretendieron “corregir” dicha decisión no solo desconoce los límites del CPACA, sino que compromete gravemente los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la participación política.

La urgencia de la medida se ve **reforzada por el enfoque étnico y diferencial**, dado que el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS es una organización política indígena, sujeta de especial protección constitucional. La consolidación de los actos administrativos cuestionados dejaría sin representación política efectiva a comunidades indígenas del departamento del Meta —entre ellas los pueblos Huitoto, Sikuni (Guahibo), Piapoco, Achagua y Jiw— produciendo un daño grave, actual e irreversible que haría **inocua cualquier decisión favorable de fondo**.

En consecuencia, la suspensión provisional solicitada es necesaria, proporcional y urgente, pues constituye el único mecanismo eficaz para preservar la materia del litigio constitucional y evitar la consumación de una vulneración definitiva de derechos fundamentales en el marco de un proceso electoral en curso.

## 5.2. Decisiones de fondo

Como decisiones de fondo solicito lo siguiente:

**PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS** las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, por medio de las resoluciones Sala Plena No. 0918 de 7 de febrero de 2026, 0893 de 2025 (06 de febrero) y 0844 de 2026 (05 de febrero), a través de las cuales se revocó la inscripción de mi candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta, avalado por el MOVIMIENTO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”, dentro de la coalición denominada PACTO HISTÓRICO- FRENTE AMPLIO, suscrita con el MOVIMIENTO PACTO HISTÓRICO.

**SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS** cualquier modificación que se haya realizado sobre la lista a Cámara de Representantes por el Departamento del Meta, inscrita por la coalición PACTO HISTÓRICO-FRENTE AMPLIO, por parte de la Delegación Departamental Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con ocasión de las decisiones irregulares adoptadas por el Consejo Nacional Electoral.

**TERCERO: DEJAR EN FIRME** la inscripción de la candidatura del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta, avalado por el MOVIMIENTO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”, dentro de la coalición denominada PACTO HISTÓRICO- FRENTE AMPLIO, suscrita con el MOVIMIENTO PACTO HISTÓRICO, llevada a cabo el 7 de diciembre de 2025, con el número 103 en el





orden de lista.

Subsidiariamente y de ser necesario, **ORDENAR** a las autoridades electorales adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación, reinscripción o recomposición efectiva de la lista del MAIS, evitando que las irregularidades administrativas advertidas se traduzcan en la exclusión material de una organización política indígena y de las comunidades que representa.

## **VI. JURAMENTO**

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí invocados.

## **VII. PRUEBAS**

Solicito tener como pruebas las que se aportan con la presente acción, en especial las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral, los recursos interpuestos (propios y por parte de la Procuraduría General de la Nación), las solicitudes elevadas y las constancias de notificación, así como los demás documentos que obran en el expediente administrativo.

Específicamente apporto las siguientes:

- Reconocimiento personería jurídica del MAIS y representación legal del suscrito.
- Formulario E6 – CT. (COALICIONES SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATOS PRESENTADOS POR COALICIONES DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS CON PERSONERIA JURIDICA CAMARA TERRITORIAL)
- Aval expedido por el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”.
- Acuerdo de coalición celebrado con el Movimiento Político Pacto Histórico.
- Certificación de registro del MAIS ante el CNE.
- Solicitudes de revocatoria de inscripción de radicados Nos. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.
- Escrito de contestación a solicitud de revocatoria de inscripción.
- Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026 (05 de febrero)
- Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026 (06 de febrero)
- Resolución Sala Plena No. 0918 de 2026 (07 de febrero)
- Resolución Sala Plena No. 0789 de 2026 (04 de febrero) (Caso circunscripción Sucre)
- Escrito recurso de reposición presentado por el MAIS, contra la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026 (06 de febrero)



- Escrito recurso de reposición presentado por el candidato, contra la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026 (06 de febrero)
- Escrito recurso de reposición presentado por la Procuraduría General de la Nación contra la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026 (06 de febrero)
- Solicitud de nulidad contra la Resolución Sala Plena 0893 de 2026 (6 de febrero) presentado por el candidato, mediante apoderado.
- Constancia comparecencia apoderado del partido y candidatos a la Delegación Departamental Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el propósito de recomponer la inscripción.

#### VIII. NOTIFICACIONES

- El accionante: vía electrónica a los correos: [juridica@mais.com.co](mailto:juridica@mais.com.co)
- El candidato: vía electrónica al correo [jmanuelsandoval@hotmail.es](mailto:jmanuelsandoval@hotmail.es) . Celular: 3112356657.
- El accionado: a los correos electrónicos [cnenotificaciones@cne.gov.co](mailto:cnenotificaciones@cne.gov.co) o [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) Físicamente en la carrera 7 # 32 - 42 San Martin Centro Comercial, Piso 1.
- La Registraduría Nacional del Estado Civil en el correo [notificacionjudicial@registraduria.gov.co](mailto:notificacionjudicial@registraduria.gov.co) o en la dirección Av. Calle 26 n.º 51-50, CAN, Bogotá

De los honorables magistrados.

Comedidamente,

**LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA**  
Presidente

**MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS" y el MOVIMIENTO  
POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**  
C.C.: 12.000.773

Correo electrónico: [juridica@mais.com.co](mailto:juridica@mais.com.co)



**RESOLUCIÓN No. 00993 DE 2025**  
(04 de marzo)

Por medio de la cual se **ORDENA INSCRIBIR** en el **REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS**, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado **CNE-E-DG-2024-023832**.

**EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 265 de la Constitución Política, 7 de la Ley 130 de 1994, 3 y 9 de la Ley 1475 de 2011, y con fundamento en los siguientes:

**1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS**

**1.1.** Mediante Radicado N° **CNE-E-DG-2024-023832** de fecha 17 de diciembre de 2024, la Presidenta Nacional y Representante Legal del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, presentó ante esta Corporación la siguiente solicitud con el adjunto de la siguiente documentación:

(...)

**2. PETICIONES**

- 2.1. Que se registre e inscriba el Acta de la Cuarta Convención Nacional del MAIS celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 en el Hotel Grand Park, ciudad de Bogotá.*
- 2.2. Que se registre e inscriba con nombres y cédulas a los directivos del Comité Ejecutivo Nacional, a los integrantes de los Órganos de Control tales como: Auditoría Interna, Veeduría Garante y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria; así como los Órganos Consultivos de Representante Nacional de Juventudes y de Mujeres del MAIS.*
- 2.3. Que se registre e inscriba el Acuerdo de Escisión aprobado por la Convención Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 en el Hotel Grand Park, ciudad de Bogotá. (...)*



Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

**1.2.** Por reparto interno efectuado el 26 de diciembre de 2024, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo Nacional Electoral y según consta en el Acta de Reparto N° 075, se asignó a la Honorable Magistrada **FABIOLA MÁRQUEZ GRISALES** el conocimiento y sustanciación del expediente identificado con el Radicado **No. CNE-E-DG-2024-023832**.

**1.3.** Mediante correo interno de fecha 27 de diciembre de 2024, se solicitó a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control Electoral los estatutos vigentes del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)** y la certificación de los miembros directivos registrados de dicha organización política.

**1.4.** Mediante comunicado de fecha 8 de enero de 2025, incorporado al expediente, la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control Electoral, en ejercicio de sus competencias legales, dio alcance a la solicitud elevada en los siguientes términos:

(...)

*Con relación al requerimiento radicado CNE-E-DI-2024-001237, presentado por Diana Valentina Sepúlveda Peña y Tatiana Gasca, funcionarias adscritas a su Despacho, me permito dar respuesta en los siguientes términos:*

*“1. Los estatutos vigentes del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). (...)*

*Frente a lo peticionado en los numerales 1 y 2 de su requerimiento, adjunto envío los estatutos vigentes de las agrupaciones políticas requeridas con sus respectivas modificaciones.*

*“3. Certificación de los miembros directivos registrados del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)”. Respecto a lo solicitado en el numeral 3 de su escrito, me permito certificar que los siguientes son los registros de directivos que reposan en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas – RUPYM, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)*

(...)

**1.5** Mediante memorial radicado el 7 de febrero de 2025, la representante legal del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), señora Martha Isabel Peralta Epieyu, manifestó ante este Despacho lo siguiente:

*(...) SEGUNDO: El pasado 17 de diciembre de 2024 a través del correo electrónico [juridicamaisnacional@gmail.com](mailto:juridicamaisnacional@gmail.com) se envía “solicitud de registro e inscripción del acta de la Cuarta Convención Nacional del MAIS celebrada los días 14,15 y 16 de noviembre de 2024 y de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos y de Control” al correo [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co)*

*TERCERO: Dando Radicado número: CNE-E-DG-2024-023832.*

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

*CUARTO: No obstante, tras una revisión, se encontraron tres (3) errores de digitación, el primero en el cargo de la señora Mariel Melissa Arias Olivero, ya que se consignó como "Reemplazo" cuando el cargo correcto es "Suplente" (...)*

*(...) El segundo en el nombre de la Secretaria General, ya que se consignó como "Arelis Maria Uriana Guairiyu" cuando el nombre correcto es "Arelis Maria Uriana Guariyu". (...)*

*(...) Y el tercero en el nombre del Representante de Jóvenes ya que se consignó como "Juan Kenedy Adrada Quinayas " cuando el cargo correcto es "Juan Kennedy Adrada Quinayas" (...)*

**1.6** Una vez revisado el contenido del acta de la Cuarta Convención Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024, así como las cédulas de ciudadanía de los nuevos integrantes de los órganos de control, este Despacho constata que las correcciones solicitadas corresponden a errores de digitación en la solicitud de registro del acta.

En virtud de lo anterior, se accede a las correcciones requeridas, con el fin de garantizar la adecuada inscripción de los ciudadanos referidos, conforme a los datos consignados en el acta y en sus respectivos documentos de identidad, asegurando así la fidelidad y exactitud de la información registrada.

**2. ACERVO PROBATORIO**

**2.1.** Acta de la Cuarta Convención Nacional del Mais celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 en el Hotel Grand Park, ciudad de Bogotá.

**2.2.** Documento toma de juramento de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de los Órganos Consultivos y Órganos de Control del MAIS.

**2.3.** Cartas de aceptación de los Directivos del Comité Ejecutivo Nacional, integrantes de los Órganos de Control tales como: Auditoría Interna, Veeduría Garante y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria; así como los Órganos Consultivos de Representante Nacional de Juventudes y de Mujeres del MAIS.

**2.4.** Documentos de identidad de los Directivos del Comité Ejecutivo Nacional, integrantes de los Órganos de Control tales como: Auditoría Interna, Veeduría Garante y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria; así como los Órganos Consultivos de Representante Nacional de Juventudes y de Mujeres del MAIS.

*Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.*

**2.5.** Certificación del Consejo Superior de la Judicatura donde consta que la señora PAOLA ANDREA PINCHAO CUASTUMAL es abogada para efectos de integrar el Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria.

**2.6.** Certificación de la Asociación Indígena de La Guajira WAYA WAYUIJ y del Cabildo Indígena Muisca de Bosa donde consta que los señores Miguel Epieyu Urian y Javier Eduardo Garibello Frade cuentan con amplia trayectoria de Liderazgo en el sector social y conocimiento ancestral.

**2.7** Solicitud de escisión presentada el 14 de noviembre de 2024 ante la Convención Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), suscrita por los ciudadanos María José Pizarro Rodríguez, David Racero Mayorca y Heráclito Landinez Suárez, quienes ostentan representación en el Congreso de la República.

**2.8.** Acuerdo de Escisión aprobado por la Convención Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Socia (MAIS).

**2.9.** Estatutos vigentes del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

**2.10.** Certificación de los miembros directivos registrados del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)

**3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

**3.1. COMPETENCIA**

**3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA**

(...)

*ARTICULO 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:*

*1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. (...)*

*(...) 6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías...”*



Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

(...).

3.2. NORMATIVA SOBRE LA MATERIA OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO.

3.2.1. LEY 130 DE 1994

(...) “ARTICULO 7º—Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas.

Los partidos y movimientos inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral los nombres de las personas que, de acuerdo con sus estatutos, hayan sido designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno y administración, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la respectiva designación. El Consejo Nacional Electoral podrá, de oficio o a solicitud de cualquier persona, exigir que se verifique la respectiva inscripción y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier ciudadano podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a la misma, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas ante él. (...)

3.2.2. LEY 1475 DE 2011

(...)

**ARTICULO 1º. Principios de organización y funcionamiento.** Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en sus estatutos.

En desarrollo de estos principios, los partidos y movimientos políticos deberán garantizarlos en sus estatutos. Para tales efectos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones de contenidos mínimos:

- 1. **Participación.** Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones Fundamentales del partido o movimiento, en el máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y control, así como los derechos de elegir y ser elegido en todo proceso de designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, de acuerdo con sus estatutos.
- 2. **Igualdad.** Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del partido o movimiento.
- 3. **Pluralismo.** El pluralismo implica para las organizaciones políticas el deber de garantizar la expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de las

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

minorías, sin perjuicio de la aplicación del principio de mayoría, razón por la que los estatutos incluirán normas sobre quórum y mayorías especiales para la toma de decisiones fundamentales en materia de organización, funcionamiento y de participación de sus afiliados en la vida del partido o movimiento.

**4. Equidad e igualdad de género.** En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política.

**5. Transparencia.** Es el deber de los partidos y movimientos políticos de mantener permanentemente informados a sus afiliados sobre sus actividades políticas, administrativas y financieras. Para su cumplimiento, deberán realizar cada año rendición de cuentas.

**6. Moralidad.** Los miembros de los partidos y movimientos políticos desarrollarán su actividad de conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en los correspondientes códigos de ética. (...)

(...)

**“ARTÍCULO 3o. REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS.** El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos. (...)

(...)

**ARTÍCULO 4º.** Contenido de los estatutos. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben contener cómo mínimo, los siguientes asuntos:

(...)

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación.

(...)

**ARTÍCULO 9. DIRECTIVOS.** Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos políticos aquellas personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido inscritas ante el Consejo Nacional Electoral como designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. El Consejo Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la respectiva inscripción si ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o designación, y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al congreso o

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación grave de los estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas en él. Los partidos y movimientos políticos ajustarán a sus estatutos las disposiciones de esta ley dentro de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mientras tanto, las directivas democráticamente constituidas podrán tomar todas las decisiones que las organizaciones políticas competen en desarrollo de la misma

(...).

3.2.3. RESOLUCIÓN 2934 DE 2023 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

“(…)

**ARTÍCULO PRIMERO. NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS, MOVIMIENTOS Y AGRUPACIONES POLÍTICOS.** Los actos y documentos de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas sujetos a inscripción se entenderán notificados el día que se efectúe la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO SEGUNDO. EFECTOS DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS, MOVIMIENTOS Y AGRUPACIONES POLÍTICOS.** Los actos administrativos de registro producirán efectos a partir del momento en que se efectúe la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas y publicación en la página web de la entidad.

**ARTICULO TERCERO. IMPUGNACIÓN.** Los actos de inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, podrán ser impugnados en los términos de los artículos 7° de la Ley 130 de 1994 y 9° de la Ley 1475 de 2011. La impugnación no suspende los efectos del registro

**ARTICULO CUARTO.** Todo acto de inscripción deberá ser COMUNICADO a la Asesoría de Inspección y Vigilancia, a efectos de realizar la correspondiente anotación en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas y la publicación en la página web de la entidad.

(...).

3.2.4. RESOLUCIÓN 0266 DE 20195 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

“(…)

**ARTÍCULO QUINTO: SOBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DE DIRECTIVOS.** En este capítulo, se registrarán las autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración de las organizaciones políticas y sus respectivas modificaciones, conforme lo consagrado en el artículo 9, de la Ley 1475 de 2011.

(...).



Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

**3.3. ESTATUTOS DEL MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS).**

(...)

**ARTICULO 9°. INTEGRANTES.** El MAIS tiene como integrantes los afiliados y los simpatizantes:

**Afiliados:** Son aquellos ciudadanos inscritos voluntariamente en el MAIS que acatan cabalmente sus estatutos, el código de ética y régimen disciplinario, la plataforma ideológica y demás disposiciones internas; demuestran fidelidad y lealtad permanente al movimiento, participan regularmente en las actividades programadas y promueven su unidad y permanencia.  
Son militantes del MAIS todos sus afiliados.

**Simpatizantes:** Son todas aquellas personas que, aunque no se han afiliado al MAIS se identifican con su ideario, con todos o algunos de sus principios, propuestas, plataforma ideológica y acompañan las candidaturas a cargos y Corporaciones de elección popular.

(...)

**ARTÍCULO 12. - REQUISITOS DE AFILIACIÓN.** Para obtener la calidad de afiliado del MAIS se debe:

- Ser ciudadano de nacionalidad colombiana.
- No pertenecer a otro movimiento o partido político con personería jurídica.
- Diligenciar el formato de afiliación y radicarlo ante el Comité Ejecutivo del MAIS donde resida el solicitante, o mediante vía electrónica que disponga el Comité Ejecutivo Nacional.

Parágrafo 1. La afiliación de colombianos en el exterior se presentará ante el Comité Ejecutivo Nacional.

Parágrafo 2. Todos los participantes a la primera Convención Fundacional son afiliados.

(...)

**ARTÍCULO 13.- ESQUEMA ORGANIZATIVO.** El MAIS tiene la siguiente estructura:

**ORGANISMOS DE DIRECCIÓN NACIONAL**

- 1 Convención Nacional.
- 2 Dirección Nacional.
- 3 Comité Ejecutivo Nacional.
- 4 Consejo de Autoridades Indígenas.

**ORGANISMOS DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL:**

- 1 Convención Departamental.
- 2 Dirección Departamental.
- 3 Comité Ejecutivo Departamental.

**ORGANISMOS DE DIRECCIÓN MUNICIPAL O TERRITORIOS COLECTIVOS**

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

Convención Municipal y/o Distrital.  
Comité Ejecutivo Municipal y/o de Territorios Colectivos.

**ORGANISMOS DE TERRITORIOS INDÍGENAS**

Dirección de Territorios Indígenas.  
Comité Ejecutivo de Territorios Indígenas.  
**UNIDAD ORGANIZATIVA BÁSICA:**  
Comité de base o mazorca

**ÓRGANOS DE CONTROL:**

Auditoría Interna.  
Revisoría Fiscal.  
Veeduría Garante.  
Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria.

**ÓRGANO DE SALVAGUARDA:**

Consejo de Fundadores.

Parágrafo 1°. En cada organismo se garantiza la participación de mujeres, jóvenes, miembros de los grupos étnicos y representantes de todas las regiones del país en igualdad de condiciones.

Parágrafo 2°. Los principios rectores de la estructura orgánica del MAIS son: esquema organizativo espiral; empoderamiento de las bases locales; inexistencia de jerarquías, hegemonías y caudillismos; rotación en los cargos y coordinación permanente entre los órganos de dirección, de abajo - arriba y arriba - abajo.

Parágrafo 3°. La unidad organizativa básica de MAIS son los comités de base o mazorcas. Estos estarán integrados mínimo por cinco (5) afiliados y máximo por diez (10). Estas formas organizativas podrán ser étnicas, temáticas, de género, generacionales y/o territoriales.

(...)

**ARTÍCULO 16.- FUNCIONES.** La Convención Nacional cumplirá las siguientes funciones:

- Elegir los órganos de dirección, de salvaguarda y de control del movimiento MAIS. Aprobar y reformar la agenda programática del MAIS, así como sus estatutos, plataforma ideológica y código ético y régimen disciplinario.
- Fijar el valor de las contribuciones voluntarias, con supervisión de la Revisoría Fiscal y la Veeduría Garante
- Evaluar y aprobar los informes de gestión de la Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.
- Pronunciarse respecto de la coyuntura política y social del país.
- Decidir sobre la disolución o anexión del MAIS a otros movimientos políticos.
- Orientar las acciones, principios y rutas a seguir por el MAIS
- Aprobar el Plan de acción de la Dirección Nacional.
- Delegar funciones a la Dirección Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional.
- Aprobar el sistema de auditoría interna del MAIS.

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

- Definir el plan de trabajo regional.
- Elegir a los candidatos del orden nacional o definir los mecanismos para su elección. Las demás que tengan origen en estos estatutos y en los documentos que hacen parte integral de los mismos. (...)

(...) **CAPÍTULO IV**  
**COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL**

**ARTÍCULO 21.- NATURALEZA.** El Comité Ejecutivo Nacional es el órgano designado por la Convención Nacional por un término de dos (2) años para ejercer la administración del MAIS, velando por la ejecución de su misión y la implementación nacional, regional, departamental y local de las estrategias y actividades del MAIS, en lo político, administrativo, organizativo, jurídico, económico y financiero. Acatará las disposiciones de la Convención y la Dirección Nacional, entre ellas, otorgamiento de avales, definición de sedes departamentales y/o municipales.

Parágrafo 1°. El Comité Ejecutivo Nacional tendrá voz, más no voto en las decisiones de la Dirección Nacional.

Parágrafo 2°. Es función del Comité Ejecutivo Nacional reconocer mediante resolución, la condición de Comité Ejecutivos regionales cuándo cumplan los requisitos.

**ARTÍCULO 22.- INTEGRANTES.** Estará integrado por cinco (5) miembros elegidos por consenso o voto en la Convención Nacional, así:

- Un presidente de Relaciones Públicas.
- Un Copresidente de relaciones regionales.
- Un secretario (a) General
- Un Secretario de comunicaciones.
- Un Secretario de Administración y finanzas.

(...)

(...) **ARTÍCULO 37. - AUDITORÍA INTERNA.** MAIS tendrá una Auditoría Interna, elegida por la Convención Nacional, y tiene las siguientes funciones:

Ser solidariamente responsable del manejo que se haga de los recursos públicos, e informar al Consejo Nacional Electoral sobre las irregularidades cometidas por MAIS.

Vigilar las fuentes de financiación del movimiento y sus campañas electorales, limitándose a cumplir el fuero que le corresponde en ejercicio de la profesión.

Examinar y evaluar con criterio los resultados de la gestión administrativa, financiera, presupuestal y patrimonial del MAIS e informar y dictaminar acerca de ellas.

**ARTÍCULO 38.- REVISORÍA FISCAL.** El Revisor Fiscal, elegido por la Convención Nacional tiene las siguientes funciones:

Revisar que la contabilidad esté actualizada y las operaciones sean las efectuadas por el MAIS y se ajusten a las prescripciones de Ley, los estatutos y las directrices proferidas por la Convención Nacional y la Dirección Nacional.



Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

Revisar el proyecto anual de presupuesto del movimiento y conceptuar sobre este, antes de ser entregado a la Dirección Nacional.

(...)

(...) **ARTÍCULO 39.- VEEDURÍA GARANTE:** La Veeduría, elegida por la Convención Nacional, tiene las siguientes funciones:

Propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los candidatos elegidos a cargos de elección popular en representación del MAIS.

Recibir quejas y reclamos sobre el funcionamiento del MAIS y el acatamiento de los derechos e intereses de los militantes y direccionarlos a quien corresponda. (...)

(...)

CAPÍTULO II  
DISOLUCIÓN

**ARTÍCULO 79.- DISOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO.** La decisión de disolver el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS compete exclusivamente a la Convención Nacional.

(...)

(...) **ARTÍCULO 81.- DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO.** En caso de disolución definitiva del MAIS, sea bajo las figuras de liquidación, fusión o escisión, el patrimonio resultante de su existencia, una vez satisfechas las obligaciones financieras pendientes, será destinado a: centros de pensamientos, universidades y organizaciones no gubernamentales de evidenciado trabajo social y ambiental afines, salvo que la disolución sea para fusionarse en otro proyecto político nacional

(...)

3.4. RESOLUCIÓN No. 1525 DE 2021<sup>1</sup>

(...)

**"ARTÍCULO 13- ESQUEMA ORGANIZATIVO.** El MAIS tiene la siguiente estructura:

(...)

ÓRGANOS CONSULTIVOS.

Los órganos consultivos del MAIS son:

Sistema Nacional de Juventudes Maisistas  
Sistema Nacional de Mujeres Maisistas

(...)

<sup>1</sup> Por medio de la cual se REGISTRA la reforma estatutaria de los artículos 13, 15 (1), 24 y 47 de los estatutos del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

4. CONSIDERACIONES.

La Constitución Política, en su artículo 265, confiere al Consejo Nacional Electoral (CNE) la competencia para regular, inspeccionar, vigilar y controlar todas las actividades electorales de los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos, así como de sus representantes legales, directivos y candidatos. En particular, el numeral 6 del mismo artículo establece como atribución especial del CNE velar por el cumplimiento de las normas que rigen a los partidos y movimientos políticos, garantizando el respeto a los principios y deberes constitucionales y legales que les corresponden.

En desarrollo de esta función, las Leyes 130 de 1994 y 1475 de 2011 regulan la organización interna y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos conforme a lo establecido en sus estatutos. El artículo 3 de la Ley 1475 de 2011 dispone la creación y administración del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos a cargo del CNE, instruyendo a los representantes legales para que registren ante la Corporación los siguientes documentos: (I) las actas de fundación, (II) los estatutos y sus reformas, (III) los documentos relacionados con la plataforma ideológica y programática, (IV) la designación y remoción de directivos, y (V) el registro de sus afiliados.

Por su parte, el artículo 9 de la Ley 1475 de 2011 define como directivos de los partidos y movimientos políticos a aquellos ciudadanos designados conforme a los estatutos internos de la organización para integrar sus órganos de gobierno, administración y control. Dichas designaciones deben registrarse ante el CNE, previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento establecidos en la Constitución, la ley y los estatutos.

De acuerdo con los artículos 7 de la Ley 130 de 1994 y 3 de la Ley 1475 de 2011, esta Corporación es competente para llevar el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas, asegurando que este registro incluya información relativa a las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, las plataformas ideológicas, la designación y remoción de directivos, y los afiliados.

Además, según la Sentencia C-490 de 2011<sup>2</sup> de la Corte Constitucional, el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos constituye un "instrumento técnico" que contiene la

<sup>2</sup> Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 190 de 2010 Senado – 092 de 2010 Cámara, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.

*Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.*

información esencial para que el CNE ejerza las competencias asignadas constitucionalmente, garantizando principios fundamentales como la transparencia y la publicidad de los actos.

El Consejo Nacional Electoral, en virtud de estas disposiciones, está facultado para autorizar el registro de los documentos y directivos de manera oficiosa o a solicitud de los representantes legales, previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas consagrados en la Constitución, la ley y los estatutos.

### 5. CASO EN CONCRETO

**5.1.** En relación con el caso bajo estudio, mediante Radicado **N.º CNE-E-DG-2024-023832** de fecha 17 de diciembre de 2024, la Presidenta Nacional y Representante Legal del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, solicitó a esta Corporación el registro e inscripción del Acta de la Cuarta Convención Nacional del MAIS, celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 en el Hotel Grand Park de la ciudad de Bogotá. Asimismo, solicitó el registro e inscripción de los Directivos del Comité Ejecutivo Nacional, de los integrantes de los Órganos de Control, tales como la Auditoría Interna, Veeduría Garante y el Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria, así como de los Órganos Consultivos de Representante Nacional de Juventudes y Mujeres del MAIS. Adicionalmente, requirió el registro e inscripción del Acuerdo de Escisión aprobado en dicha Convención Nacional.

**5.2.** Mediante comunicación interna del 27 de diciembre de 2024, se solicitó a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control Electoral los estatutos vigentes de la mencionada organización política, así como la certificación de sus miembros directivos registrados. En respuesta, mediante comunicado fechado el 8 de enero de 2025, incorporado al expediente, la citada Dirección remitió los estatutos vigentes y la certificación de los Directivos registrados, con el propósito de realizar las verificaciones pertinentes y determinar la procedencia de las solicitudes elevadas.

**5.3** Para determinar la procedencia de las inscripciones solicitadas, es necesario verificar el cumplimiento de los estatutos internos, en atención al principio de autonomía de las organizaciones políticas consagrado en la Ley 130 de 1994, así como las disposiciones relacionadas con los registros que deben efectuarse en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, de la siguiente manera:



Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

(...)

**ARTÍCULO 6 DE LA LEY 130 DE 1994 Principios de organización y funcionamiento.** Los partidos y movimientos políticos podrán organizarse libremente. Sin embargo, en el desarrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de la Constitución Política.

En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y autonomía para su organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan nacionalmente.

(...)"

**ARTÍCULO 3º. LEY ESTATUTARIA 1475 DE 2011 REGISTRO Único de Partidos y Movimientos Políticos.** El Consejo Nacional Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.

(...)

El Consejo Nacional Electoral, en virtud del artículo 3º de la Ley 1475 de 2011, y la Resolución No. 1002 de 2019<sup>3</sup> tiene la facultad de llevar el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas; inclusive de aquellas que hayan perdido su personería jurídica, y es ante esta entidad que los respectivos representantes legales registrarán las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. De igual manera, le corresponde autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los correspondientes estatutos.

De lo anterior se concluye que los estatutos vigentes del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)** establecen el procedimiento para la elección de los órganos sujetos a registro y el órgano competente para decidir sobre las coyunturas políticas internas y externas. Asimismo, contemplan disposiciones relativas a la disolución y anexión de la organización política, lo cual abarca la escisión, al entenderse esta como la separación de una parte del partido. Al respecto, los estatutos disponen lo siguiente:

(...)

<sup>3</sup> Por medio de la cual se modifica el Artículo Decimo Primero de la Resolución N° 0266 de 2019 "Por medio del cual se establece el Registro único de Partidos, Movimientos y Agrupaciones políticas", del Consejo nacional Electoral.

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

**ARTÍCULO 16.- FUNCIONES.** La Convención Nacional cumplirá las siguientes funciones:

- **Elegir los órganos de dirección, de salvaguarda y de control del movimiento MAIS.**
- *Aprobar y reformar la agenda programática del MAIS, así como sus estatutos, plataforma ideológica y código ético y régimen disciplinario.*
- *Fijar el valor de las contribuciones voluntarias, con supervisión de la Revisoría Fiscal v la Veeduría Garante*
- *Evaluar y aprobar los informes de gestión de la Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional.*
- **Pronunciarse respecto de la coyuntura política y social del país.**
- **Decidir sobre la disolución o anexión del MAIS a otros movimientos políticos.**

(...)

De lo enunciado anteriormente, y de los documentos obrantes en el expediente, esta Corporación observa, que:

**I)** Conforme a lo consignado en el Acta de la Cuarta Convención Nacional del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, se constató la existencia del quórum requerido de acuerdo con lo establecido en los estatutos, según lo consignado en la respectiva acta, la cual dispone:

*(...) Realizados los saludos y siendo las 10:22 am se realiza la presentación de los delegados oficiales y la verificación del quórum por parte de la Veedora Nacional, Tania Narváez y de la integrante del Comité de Ética y Disciplina Partidaria, Rosmira Sandoval, como integrantes de los órganos de control, de conformidad con el artículo 15-1 de los Estatutos.*

*Se informa por parte de la Presidenta del movimiento, que de acuerdo con los Estatutos, debe haber 342 delegados oficiales de los cuales se encuentran presentes al momento de la verificación, un total de 293 convencionistas distribuidos de la siguiente manera: 290 de manera presencial y 3 de manera virtual, cumpliéndose con el quórum establecido en el artículo 15 y también con los porcentajes del 60% indígena y 30% entre jóvenes y mujeres según el artículo 15 -I parágrafos 2 y 3 de los Estatutos del MAIS. (...)*

**II)** La solicitud de registro e inscripción del Acta de la Cuarta Convención Nacional del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 en el Hotel Grand Park de Bogotá, no resulta procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011. Dicho artículo establece que son susceptibles de inscripción y registro únicamente las decisiones adoptadas por los partidos y movimientos políticos que impliquen modificaciones a su organización interna, estatutos, plataformas ideológicas, programas, representación legal y órganos directivos, entre otros aspectos específicos. Por lo tanto, lo que corresponde registrar no es el acta en sí misma, sino

*Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.*

las decisiones que se hayan adoptado en el marco de la referida convención y que sean objeto de inscripción según la normativa.

III) La solicitud de registro e inscripción de los nombres y cédulas de los directivos del Comité Ejecutivo Nacional, así como de los integrantes de los Órganos de Control, Auditoría Interna, Veeduría Garante y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria, y de los Órganos Consultivos de Representante Nacional de Juventudes y de Mujeres del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, fue presentada por la Representante Legal, señora **MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU**, ante esta Corporación.

Como soporte de la solicitud, se allegaron el Acta de la Cuarta Convención Nacional del MAIS, celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 en el Hotel Grand Park de Bogotá, donde consta el nombramiento unánime de los integrantes de los órganos mencionados; el documento de toma de juramento de estos; las cartas de aceptación de los designados **Sres. LUIS EVELIS ANDRADE CASAMÁ, YIMY ARMANDO SÁNCHEZ AGUABLANCA, ARELIS MARÍA URIANA GUARIYU, JOHN FREDY MARÍN PARRA, LORENZO DAVID SANMARTIN MONTIEL JUAN KENNEDY ADRADA QUINAYAS, MARIELY MELISSA ARIAS OLIVERO, DORIS ELENA JACANAMIJOY JACANAMIJOY, TULIA MARLENE REINA PLARPUSAN, FIXONDER HIUPA NACAVERA, PAOLA ANDREA PINCHAO CUASTUMAL, LUIS OMAR TRIANA HERNANDEZ, MIGUEL EPIEYU URIANA, ISABEL CRISTINA ROMERO y JAVIER EDUARDO GARIBELLO FRADE**; los documentos de identidad correspondientes; la certificación del Consejo Superior de la Judicatura que acredita a la señora **PAOLA ANDREA PINCHAO CUASTUMAL** como abogada para integrar el Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria; y las certificaciones de la Asociación Indígena de La Guajira **WAYA WAYUIJ DYLAN FABIAN FRAGUA LAVERDE** y del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, que avalan la trayectoria y conocimiento ancestral de los señores **MIGUEL EPIEYU URIANA y JAVIER EDUARDO GARIBELLO FRADE**.

De conformidad con el artículo 16 de los Estatutos vigentes, la Convención Nacional tiene como función principal la elección de los órganos de dirección, salvaguarda y control del movimiento político. Además, el periodo de vigencia de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, los Órganos Consultivos y los Órganos de Control del MAIS es de dos (2) años, periodo que ya ha concluido según lo dispuesto en los estatutos. Por lo tanto, el nombramiento realizado por la Convención Nacional es procedente conforme a la normativa interna.

En virtud de lo anteriormente señalado, esta Sala concluye que la solicitud de registro de los 16 ciudadanos que se enlistan a continuación, para integrar el Comité Ejecutivo Nacional, los



Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

Órganos Consultivos y los Órganos de Control del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, cumple con las disposiciones constitucionales, legales y estatutarias que rigen la materia. En virtud de lo anterior, se dispondrá su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, en los siguientes términos:

a) **COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA	12.000.773	Presidente de Relaciones Publicas
YIMY ARMANDO SÁNCHEZ AGUABLANCA	11.232.783	Copresidente de Relaciones Regionales
ARELIS MARÍA URIANA GUARIYU	22.640.951	Secretaría General
JOHN FREDY MARÍN PARRA	16.138.714	Secretario de Comunicaciones
LORENZO DAVID SANMARTIN MONTIEL	78.298.229	Secretario administrative y de finanzas

b) **ÓRGANOS CONSULTIVOS**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
JUAN KENNEDY ADRADA QUINAYAS	1.006.359.765	Representante Nacional de Juventudes
MARIELY MELISSA ARIAS OLIVERO	1.032.489.113	Suplente de Representante Nacional de Juventudes
DORIS ELENA JACANAMIJOY JACANAMIJOY	1.032.413.346	Representante Nacional de Mujeres

c) **AUDITOR NACIONAL**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
DYLAN FABIAN FRAGUA LAVERDE	1.010.241.405	Auditor Interno

d) **REVISOR FISCAL**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
TULIA MARLENE REINA PLARPUSAN	27.105.370	Revisora Fiscal

e) **VEEDURÍA GARANTE**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
FIXONDER HIUPA NACAVERA	1.093.536.986	Veedor Garante

f) **TRIBUNAL DE CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINA PARTIDARIA**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
PAOLA ANDREA PINCHAO CUASTUMAL	1.085.910.540	Integrante del Tribunal
LUIS OMAR TRIANA HERNANDEZ	91.265.961	Integrante del Tribunal
MIGUEL EPIEYU URIANA	84.107.950	Integrante del Tribunal
ISABEL CRISTINA ROMERO	31.481.444	Integrante del Tribunal
JAVIER EDUARDO GARIBELLO FRADE	79.540.616	Integrante del Tribunal

**IV)** En relación con la solicitud presentada por la representante legal del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), mediante la cual solicita el registro e inscripción del Acuerdo de Escisión aprobado por la Convención Nacional de dicha organización política, celebrada los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2024 en el Hotel Grand Park de Bogotá, es preciso realizar las siguientes consideraciones.

A la solicitud se adjuntó como prueba la solicitud de escisión presentada el 14 de noviembre de 2024 ante la Convención Nacional, suscrita por los ciudadanos **MARÍA JOSÉ PIZARRO**

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

**RODRÍGUEZ, DAVID RACERO MAYORCA** y **HERÁCLITO LANDINEZ SUÁREZ**, quienes ostentan representación en el Congreso de la República. Asimismo, se allegó el Acuerdo de Escisión, aprobado en la misma fecha y suscrito en constancia por **JAVIER JULIO BEJARANO**, en calidad de presidente de mesa, y **MARTHA ELIANA ÁVILA SAAVEDRA**, en calidad de secretaria de mesa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011, la escisión, en sí misma, no constituye un acto objeto de registro ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este sentido, lo que procede inscribir no es el acto de escisión como tal, sino las decisiones conexas derivadas de este.

En consecuencia, el Acuerdo de Escisión será analizado dentro del expediente **CNE-E-DG-2025-001067**, en el cual se tramita la Solicitud de Reconocimiento de Personería Jurídica del partido político "**PROGRESISTA**", resultante de la escisión del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Registrar en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos a los dieciséis (16) ciudadanos que se detallan a continuación, quienes integrarán el Comité Ejecutivo Nacional, los Órganos Consultivos y los Órganos de Control del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en los siguientes términos:

**a) COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
LUIS EVELIS ANDRADE CASAMÁ	12.000.773	Presidente de Relaciones Publicas
YIMY ARMANDO SÁNCHEZ AGUABLANCA	11.232.783	Copresidente de Relaciones Regionales
ARELIS MARIA URIANA GUARIYU	22.640.951	Secretaria General
JOHN FREDY MARIN PARRA	16.138.714	Secretario de Comunicaciones
LORENZO DAVID SANMARTIN MONTIEL	78.298.229	Secretario administrative y de finanzas

**b) ÓRGANOS CONSULTIVOS**

NOMBRE	CEDULA	CARGO
JUAN KENNEDY ADRADA QUINAYAS	1.006.359.765	Representante Nacional de Juventudes
MARIELY MELISSA ARIAS OLIVERO	1.032.489.113	Suplente de Representante Nacional de Juventudes
DORIS ELENA JACANAMIJOY JACANAMIJOY	1.032.413.346	Representante Nacional de Mujeres

**c) AUDITOR NACIONAL**

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
DYLAN FABIAN FRAGUA LAVERDE	1.010.241.405	Auditor Interno

d) REVISOR FISCAL

NOMBRE	CEDULA	CARGO
TULIA MARLENE REINA PLARPUSAN	27.105.370	Revisora Fiscal

e) VEEDURÍA GARANTE

NOMBRE	CEDULA	CARGO
FIXONDER HIUPA NACAVERA	1.093.536.986	Veedor Garante

f) TRIBUNAL DE CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINA PARTIDARIA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
PAOLA ANDREA PINCHAO CUASTUMAL	1.085.910.540	Integrante del Tribunal
LUIS OMAR TRIANA HERNANDEZ	91.265.961	Integrante del Tribunal
MIGUEL EPIEYU URIANA	84.107.950	Integrante del Tribunal
ISABEL CRISTINA ROMERO	31.481.444	Integrante del Tribunal
JAVIER EDUARDO GARIBELLO FRADE	79.540.616	Integrante del Tribunal

El registro tendrá efectos jurídicos desde el momento en que se efectúe la respectiva anotación en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos y se realice su publicación en la página web del Consejo Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución No. 2599 de 2019, adoptada por este organismo electoral.

**ARTÍCULO SEGUNDO: ABSTENERSE** de proceder con el trámite de registro del Acuerdo de Escisión, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. Dicho acuerdo será objeto de análisis dentro del expediente CNE-E-DG-2025-001067, el cual cursa en el Despacho del Honorable Magistrado **Alfonso Campo Martínez**, donde se adelanta la solicitud de Reconocimiento de Personería Jurídica del partido político "PROGRESISTA", resultante de la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), conforme a lo establecido en la Ley 1475 de 2011.

**ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR** el contenido de la presente resolución a la señora **MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU**, en su calidad de representante legal del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS)**, así como al mencionado movimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante los correos electrónicos [maisejecutivonacional@gmail.com](mailto:maisejecutivonacional@gmail.com) y [juridicamaisionacional@gmail.com](mailto:juridicamaisionacional@gmail.com).

**ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución a la Asesoría de Inspección y Vigilancia del Consejo Nacional Electoral, remitiendo copia íntegra

Por medio de la cual se ORDENA INSCRIBIR en el REGISTRO ÚNICO DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Órganos Consultivos, Auditor Nacional, Veeduría Garante, y Tribunal de Control Ético y Disciplina Partidaria del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL (MAIS), elegidos en la IV Convención Nacional de dicho movimiento, y se adoptan otras disposiciones, dentro del expediente con Radicado CNE-E-DG-2024-023832.


del acto administrativo identificado con el radicado No. **CNE-E-DG-2024-023832**, para que proceda conforme a sus competencias.

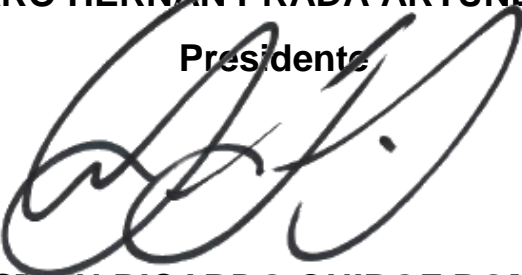
**ARTÍCULO QUINTO:** Por la Asesoría de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de esta Corporación, librar las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia.


**ARTÍCULO SEXTO:** Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a su respectiva notificación de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de marzo del dos mil veinticinco (2025).

  
**ÁLVARO HERNÁN PRADA ARTUNDUAGA**  
Presidente

  
**CRISTIAN RICARDO QUIROZ ROMERO**  
Vicepresidente

  
**FABIOLA MÁRQUEZ GRISALES**  
Magistrada Ponente

Aprobada en Sala del cuatro (04) de marzo del 2025.  
Vo. Bo. Adriana Milena Charari Olmos, secretaria técnica de Sala  
Revisó: Reynel David De la Rosa Saurith- Auxiliar Administrativo  
Aprobó: Pedro Elías Ribero Tobar  
Revisó: Alejandra Gutierrez  
Proyectó: Lorena Tatiana Gasca Cárdenas  
Rad.: CNE-E-DG-2024-023832.





ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

NOMBRES	CEDULA	PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO.
LUIS EVELIS ANDRADE	12.000.773	MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS
GABRIEL BECERRA YAÑEZ	88.218.050	MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO
CARLOS ALBERTO BENAVIDES	93.378.183	
JAIME CAICEDO TURRIAGO	17.141.874	
MARIA JOSÉ PIZARRO RODRIGUEZ.	52.425.419	

Entre los suscritos, arriba registrados e identificados como aparece al pie de nuestras firmas, actuando en calidad de *Representantes Legales y/o Apoderados de los partidos y movimientos políticos*, hemos acordado celebrar el presente acuerdo de **COALICIÓN PROGRAMÁTICA Y POLÍTICA** denominada **"PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO"** con el propósito de inscribir la lista a la **CÁMARA DE REPRESENTANTES POR CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE META**, para el período constitucional 2026 – 2030 en las elecciones a celebrarse el 8 de marzo de 2026.

Lo anterior se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, así como con lo ordenado en el Fallo de Acción de Tutela No. 2500023420020017-05487-00 del 23 de noviembre de 2017 y con las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, entre ellas la del 13 de diciembre de 2018 en el radicado 11001-03-28-000-2018-00019-00, y la del 2 de mayo de 2019 dentro de los radicados 11001-03-28-000-2018-00129-00 (principal) y 11001-03-28-000-2018-00132-00. Igualmente, se acoge lo establecido en la Resolución 2151 del 1 de junio de 2019 del Consejo Nacional Electoral, así como en las Resoluciones 8262 del 17 de noviembre de 2021 y 8586 del 25 de noviembre de 2021, las cuales contemplan la posibilidad de que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica inscriban candidatos a corporaciones públicas mediante coaliciones, siempre que el conjunto de sus votaciones no supere el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción.

En armonía con ello, debe recordarse que el artículo 262 de la Constitución Política, modificado por el artículo 20 del Acto Legislativo 2 de 2015, dispone que



ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

los partidos y movimientos políticos que decidan participar en procesos de elección popular inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer; que en la conformación de dichas listas deben observarse de manera progresiva principios como la paridad, la alternancia y la universalidad, de conformidad con la ley; y que cada partido o movimiento podrá optar por el mecanismo de voto preferente.

Asimismo, la Resolución 2151 del 5 de junio de 2019 del Consejo Nacional Electoral, “por medio de la cual se dictan medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas”, establece que los partidos y movimientos políticos que decidan presentar listas en coalición deberán registrar, al momento de la inscripción, el acuerdo correspondiente, el cual debe contener como mínimo la descripción clara de las reglas para la presentación de los informes de ingresos y gastos de campaña, el carácter vinculante del acuerdo y la cuota de género, entre otros elementos obligatorios.

De igual forma el artículo 262 de la Constitución Política establece la posibilidad de coaligarse a las organizaciones políticas con personería jurídica para postular candidatos a cuerpos colegiados, siempre y cuando la misma no supere el 15% de la votación válida en las elecciones anteriores a la misma circunscripción. La presente coalición política no supera sumados sus porcentajes de participación los topes establecidos por el enunciado constitucional.

La presente coalición respeta el Acuerdo de Consulta interpartidista del Pacto Histórico y el Movimiento Político Colombia Humana desarrollada el 26 de octubre del 2025, y activa la cláusula Décimo Sexta, del mismo el cual establece “El presente acuerdo habilita la conformación de coaliciones con otros partidos o movimientos, siempre que se respete el umbral previsto en el artículo 262 de la Constitución. La decisión de coaligarse corresponderá a los Representantes Legales de los Partidos, o a la Coordinación Nacional Provisional del Movimiento Político Pacto Histórico en caso de concretarse la fusión, quienes definirán la modalidad de la lista. En todo caso, deberá respetarse el orden resultante de la presente consulta para la conformación de la lista efectos de los renglones donde se introduzcan candidaturas de los presentes partidos,” (o del movimiento fusionado).

Que los demás partidos aquí coaligados, desarrollaron los mecanismos internos estatutarios necesarios para la postulación de los candidatos que son avalados para la presente coalición.

En atención a todo lo anterior, para la debida inscripción de la lista a la **CÁMARA DE REPRESENTANTES POR CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE META**



ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

se procede a establecer las siguientes cláusulas que regularan el acuerdo de coalición:

**CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO:** El objeto del presente acuerdo consiste en la conformación de una coalición entre los partidos y movimientos políticos firmantes para la inscripción de una de carácter **PREFERENTE** de candidaturas a la **Cámara de Representantes por circunscripción territorial de Meta**, para el periodo constitucional **2026–2030**. Denominada **"PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO"**.

**Parágrafo:** Para la modificación de la lista, se expedirán los avales modificatorios, los cuales serán suscritos integralmente por los partidos avalistas de los candidatos sobre los cuales se solicite dicho acto jurídico, mismas que serán radicadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por el secretario General de cualquiera de los partidos signatarios del aval modificatorio.

**CLÁUSULA SEGUNDA – ORIENTACIÓN PROGRAMÁTICA:** La coalición adopta como marco programático los lineamientos contenidos en la *Plataforma de Unidad – Ideario de Unidad del Pacto Histórico* y la *plataforma programática del Movimiento Alternativo Indígena y social MAIS*. En virtud de ello, los partidos y movimientos firmantes orientarán su acción política y legislativa conforme a los siguientes ejes generales: el impulso de economías productivas para la vida y el bien común; el fortalecimiento de la democracia participativa; la construcción de paz y reconciliación; la reforma agraria, la defensa de una sociedad de derechos y de la vida digna; la garantía de participación plena de las mujeres y de una vida libre de violencias; la protección de todas las formas de vida sobre los intereses del capital, la integridad ecológica y la justicia climática; la defensa de la soberanía nacional y las relaciones internacionales basadas en la autodeterminación de los pueblos; y la consolidación de un horizonte estratégico de transformaciones que promueva la construcción de un proyecto revolucionario en búsqueda de la justicia social y el bienestar colectivo. Las colectividades firmantes se comprometen a asumir y promover estos ejes como fundamento de su actuación conjunta dentro de la coalición.

**CLÁUSULA TERCERA – INSCRIPCIÓN Y AVAL DE CANDIDATURAS:** Conforme a lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución No. 2151 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, y en cumplimiento del resultado de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025 para la conformación de la lista, se **INSCRIBEN y AVALAN** las candidaturas presentadas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que suscriben, para integrar la **LISTA CON VOTO PREFERENTE** del coalición denominada **"PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO"** a la **CAMARA DE REPRESENTANTES POR CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE META**, para el periodo 2026 – 2030.



ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

Los partidos aquí coaligados que no participaron en la consulta popular del 26 de octubre de 2025, avalaran a sus candidatos según sus definiciones estatutarias.

Candidaturas quedaran en el siguiente orden:

No. Lista.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	PARTIDO QUE AVALA.
1	MARIA DEL CARMEN MAYUSA CRUZ	21.200.855	PACTO HISTORICO
2	CESAR AUGUSTO DÍAZ MEDINA	79378706	PACTO HISTORICO
3	JOSE MANUEL SANDOVAL GARZÓN	7.819.447	MAIS

**CLÁUSULA CUARTA – CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO:** Los partidos coaligados se encargarán de garantizar el cumplimiento del acuerdo político y programático desde sus propios estatutos y en el marco de la Ley.

**PARAGRAFO:** En caso de incumplimiento por parte de un candidato o electo de los acuerdos programáticos y políticos aquí suscritos, las organizaciones electorales coaligadas podrán a través de su representante legal solicitar al partido del cual tenga filiación política el incumplimiento, iniciar el proceso disciplinario establecido en los respectivos códigos de ética o disciplina partidaria, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan.

**CLÁUSULA QUINTA – ACTUACIÓN DE BANCADAS:** Los integrantes de las bancadas de esta coalición se coordinarán para sus actuaciones como un cuerpo colectivo que toma decisiones democráticamente en el marco de los lineamientos de sus respectivos partidos y del presente acuerdo, en concordancia con lo establecido en la Ley de bancadas 974 de 2005 y los estatutos de cada partido o movimiento coaligado.

**CLÁUSULA SEXTA – FUENTES DE FINANCIACIÓN DE CAMPAÑA:** La financiación de la campaña podrá tener las siguientes fuentes:

1. Los recursos propios de origen privado que los partidos coaligados destinarán para el efecto.





ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

2. Los créditos o aportes provenientes del patrimonio de los candidatos y de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
3. Las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que realicen los particulares, de acuerdo al límite a la financiación privada estipulado en el artículo 23 de la ley 1475 de 2011.
4. Los créditos que realicen los particulares, a favor y bajo la dominación de los candidatos.
5. Los créditos obtenidos en las entidades financieras legalmente autorizadas en el país.
6. Los ingresos originados en actos públicos.
7. Publicación y o cualquier actividad lucrativa que realice la campaña.
8. La financiación estatal contemplada en el artículo 22 de la ley 1475 de 2011.

**CLÁUSULA SÉPTIMA – DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN DE GASTOS POR VOTOS VÁLIDOS:** Los recursos que, por concepto de reposición de gastos o de votos válidos obtenidos, serán girados al 100% al **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL - MAIS**, quien los distribuirá de la siguiente manera a los partidos firmantes del documento base suscrito por los partidos coaligados firmantes de la siguiente orden:

1. Cada partido o movimiento político recibirá la proporción correspondiente al total de votos alcanzados por sus candidatos avalados dentro de la lista, y estos a su vez los repartirán conforme lo establecen sus Estatutos.
2. En relación con los votos depositados por el logo símbolo de la coalición, el valor que salga a reponerse se distribuirá por partes iguales entre los Partidos y movimientos políticos con personería jurídica firmantes del presente acuerdo.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Los pagos descritos en la presente cláusula, serán cancelados por el partido receptor de los recursos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contados a partir de su disponibilidad efectiva en la respectiva cuenta.

**CLÁUSULA OCTAVA – REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA Y MECANISMO DE AUDITORÍA INTERNA.** Con fundamento en la responsabilidad que atañe a cada Partido Político integrante de la Coalición, de acuerdo a las disposiciones que emita el Consejo Nacional Electoral, las partes acuerdan que la presentación del informe consolidado de ingresos y gastos de campaña estará a cargo del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS. La designación del Gerente y Contador serán designados por cada uno de los candidatos acá coavalados, quedando a su



ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

cargo de manera especial y específica, la apertura de la cuenta única de campaña para la administración de los recursos de su proceso electoral, así como de la apertura de las subcuentas que sean necesarias para la descentralización de la campaña, lo cual deberá ser registrado y soportado debidamente en el Informe de Ingresos y Gastos conforme a las directrices que al respecto emita el Consejo Nacional Electoral y las capacitaciones ofrecidas por los Partidos coaligados o quienes estos designen.

El gerente y candidatos entregarán a cada Partido que los avala, los respectivos informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas dentro del plazo que fije cada partido sin que exceda el término establecido en el artículo 25 de la ley 1475 de 2011. Por su parte, el Movimiento MAIS presentará los informes consolidados de ingresos y gastos de la campaña electoral de los candidatos que avalaron las organizaciones políticas aquí coaligadas ante el Consejo Nacional Electoral, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de la votación.

El Movimiento MAIS, para la prestación del dictamen consolidado tendrá como sustento el dictamen que emita los auditores de los otros partidos acá coaligados, los cuales harán parte integral.

Los candidatos, los gerentes y contadores de la campaña deberán atender de manera inmediata las solicitudes efectuadas por la auditoría interna de la organización política que avala los candidatos, para responder los requerimientos formulados por el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, y por cualquier otra autoridad u organismo de control.

#### **CLÁUSULA NOVENA – PLAN DE MEDIOS Y PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA.**

Los partidos coaligados y candidatos participantes definirán de conformidad con el presupuesto, el plan de medios y publicidad que será implementado en la campaña, la cual deberá sujetarse de forma estricta a las regulaciones que sobre el particular expida el Consejo Nacional Electoral y demás autoridades competentes sobre la materia, la cual estará dirigida y coordinada por la gerencia de la campaña de la lista por voto preferente.

Los candidatos se abstendrán de incorporar en las piezas publicitarias los símbolos patrios: el Himno Nacional, la Bandera o el Escudo Nacional, cuya inobservancia será sancionada por el Consejo Nacional Electoral.

Los candidatos avalados, se obligan a respetar el número máximo de vallas, cuñas, avisos de prensa y cuñas de televisión, establecidos según la



ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

normatividad vigente. De igual manera, los candidatos deberán acatar las disposiciones que frente a esta materia expidan las autoridades.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DURACIÓN.** La coalición tiene una duración que inicia desde el momento de suscripción del presente acuerdo hasta la fecha de terminación del período constitucional del ejercicio de los respectivos cargos públicos, en caso de que los candidatos resulten electos en el marco de la coalición del pacto histórico.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – CALIDADES, REQUISITOS E INHABILIDADES** Los partidos y movimientos políticos serán responsables individualmente de verificar los requisitos y calidades de los candidatos de su filiación política o postulados por estos, que no se encuentren inmersos en causales objetivas de inhabilidad e incompatibilidad, o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos por delitos cometidos relacionados con vinculación a grupos armados ilegales, actividades de narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o delitos de lesa humanidad.

**PARÁGRAFO:** En los eventos en que se infrinja la normatividad electoral por parte de algún candidato o partido o movimiento coaligado, la responsabilidad será individual de este, no habrá solidaridad entre los coaligados firmantes del presente acuerdo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR OBLIGACIONES DE LA COALICIÓN:** Las obligaciones financieras y administrativas que asuma la coalición "**PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO**" serán exigibles solidariamente a los partidos coaligados a partir de la firma de este documento, siempre y cuando dichos contratos sean suscritos de manera posterior a este acuerdo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – DENOMINACIÓN Y SÍMBOLOS:** Los partidos y movimientos que suscriben el presente acuerdo manifiestan que la coalición se identificará con la expresión "**PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO**", y el logotipo que usará la coalición para las campañas y el tarjetón electoral será el siguiente:



ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

---



Los partidos, movimientos políticos, organizaciones y agrupaciones que suscriben este acuerdo, sus militantes, directivos, candidatos y equipos de campaña únicamente podrán emplear el logosímbolo y la imagen unificada de la **"PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO"**, y queda completamente prohibido utilizar, incorporar o reproducir en forma individual o conjunta los logos, emblemas, colores institucionales o cualquier otro signo distintivo propio de cada partido o movimiento político. Las partes se comprometen a garantizar, cumplir y promover acciones encaminadas a que no se utilice el Logo del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS de forma individual o conjunta en ninguna de las piezas publicitarias ni tampoco en la propaganda electoral relacionadas con la campaña, incluyendo, pero sin limitarse a volantes, afiches, redes sociales, vallas, pancartas, y cualquier otro medio publicitario.

La relación legal de los candidatos se hará efectiva directamente a través del partido que haya avalado su respectiva candidatura, en el marco del ordenamiento jurídico nacional e interno de sus correspondientes estatutos.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, BASADAS EN GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN:** Las candidaturas reconocen, aceptan y se someten con su aceptación en el E6, los protocolos para la Prevención y Atención de Violencias Contra las Mujeres, Basadas en Género y Discriminación anexo al presente acuerdo y publicado en el siguiente link: <https://pactohistorico.co/elecciones-2026/>. De igual modo el candidato del Movimiento Alternativo indígena y Social MAIS se acoge a la ruta de prevención de violencias de genero de su partido.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Se autoriza de manera expresa que el Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS podrá inscribir lista propia al Cámara de Representantes por la circunscripción especial indígena, en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución y la ley para la representación de los pueblos indígenas. Esta inscripción no se entenderá como incumplimiento





ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

del presente acuerdo de coalición ni dará lugar a acciones disciplinarias, administrativas o judiciales por parte de las organizaciones que lo integran o terceros, por cuanto dicha participación corresponde a una circunscripción distinta e independiente de la ordinaria que acá se acuerda. En este sentido los Militantes, directivos, electos y representantes del Movimiento MAIS podrán, sin ningún tipo de prohibición o impedimento, realizar apoyo a la lista por la circunscripción especial indígena.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los 5 días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Firman los representantes legales de los partidos y movimientos,

**LUIS EVELIS ANDRADE**  
Representante Legal.  
**MOVIMIENTO ALTERNATIVO  
INDIGENA Y SOCIAL.**

**GABRIEL BECERRA YAÑEZ.**  
Representante Legal.  
**MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO  
HISTÓRICO**

**CARLOS ALBERTO BENAVIDES.**  
Representante Legal.  
**MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO  
HISTÓRICO**

**JAIME CAICEDO TURRIAGO.**  
Representante Legal.  
**MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO  
HISTÓRICO**



ACUERDO DE COALICIÓN ENTRE LOS PARTIDOS **MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO** y **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS** PARA INSCRIBIR LISTA DE CANDIDATURAS A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES POR LA **CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL META** PARA LAS ELECCIONES DEL 8 DE MARZO DE 2026 PERIODO CONSTITUCIONAL 2026 – 2030.

---

---

**MARÍA JOSE PIZARRO RODRIGUEZ.**

*Representante Legal.*

**MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**



**EL SUSCRITO PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL MOVIMIENTO  
ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS, EN EJERCICIO DE SUS  
FACULTADES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y ESTATUTARIAS**

**CONCEDE AVAL**

A la siguiente persona para conformar la lista de voto PREFERENTE, a la Cámara de Representantes por el Meta en Coalición con el partido Pacto Historico a las elecciones del 8 de marzo de 2026 para el periodo constitucional 2026 – 2030:

NO.	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NO. DE DOCUMENTO
103	JOSÉ	MANUEL	SANDOVAL	GARZON	7.819.447

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los Cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025.

Sin otro particular,

  
**LUIS EVELIS ANDRADE CASAMÁ**  
Presidente Nacional y Representante Legal



## CONSTANCIA DE COMPARECENCIA Y NEGATIVA DE INSCRIPCIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS

Villavicencio – Meta, ocho (8) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

Ante la Delegación Departamental del Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, comparecimos los suscritos **HUMBERTO RAFAEL MÉNDEZ ROJAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.267.514, actuando en calidad de **apoderado del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS**, en virtud de poder conferido por el señor **LUIS EVELIS ANDRADE CASAMÁ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.000.773, quien ostenta la calidad de **Presidente y Representante Legal** del citado movimiento político.

La comparecencia tuvo como finalidad adelantar la inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento del Meta, integrada por los ciudadanos **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.819.447; **JUAN DAVID MARTÍNEZ BOLAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.900.066; y **ELIZABETH NEIRA BENAVIDES**, identificada con cédula de ciudadanía No. 65.743.184, dentro del término legal de modificación de inscripciones previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.

La solicitud de inscripción se sustentó en la expedición de los siguientes actos administrativos proferidos por el Consejo Nacional Electoral, dentro del trámite de revocatoria de inscripción correspondiente a los expedientes radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935, adelantados contra la lista inscrita por la Coalición Pacto Histórico – Frente Amplio, conformada por el Movimiento Político Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, a saber: la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, adoptada y notificada en audiencia pública del cinco (5) de febrero de 2026; la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026; y la Resolución Sala Plena No. 0918 de 2026.

Durante la actuación administrativa adelantada en esta fecha, se expusieron de manera expresa ante el Registrador Delegado Departamental del Meta, señor **OLMER ALIER MUÑOZ ROCERO**, y ante el Coordinador Electoral de dicha Delegación, señor **ALFONSO LINARES RUIZ**, las razones jurídicas y fácticas que fundamentaban la procedencia de la inscripción de la lista del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, en el marco del periodo de modificaciones habilitado por la revocatoria de la inscripción inicialmente efectuada en coalición.




No obstante lo anterior, la inscripción solicitada no fue recibida ni tramitada, toda vez que los funcionarios de la Registraduría manifestaron que no procedía adelantar la inscripción por no existir, a su juicio, una orden expresa y clara del Consejo Nacional Electoral que así lo autorizara, contenida en la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, notificada en audiencia pública, ni en los actos administrativos posteriores de corrección y decisión de los recursos interpuestos.

En ese contexto, se solicitó de manera expresa que la negativa a recibir y tramitar la inscripción fuera debidamente motivada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, el cual exige que el rechazo de una inscripción se realice mediante acto administrativo motivado. Frente a dicha solicitud, los funcionarios de la Registraduría informaron que la motivación de la decisión no se realizaría de manera inmediata, indicando que, para tal efecto, debía radicarse una solicitud escrita ante la entidad.

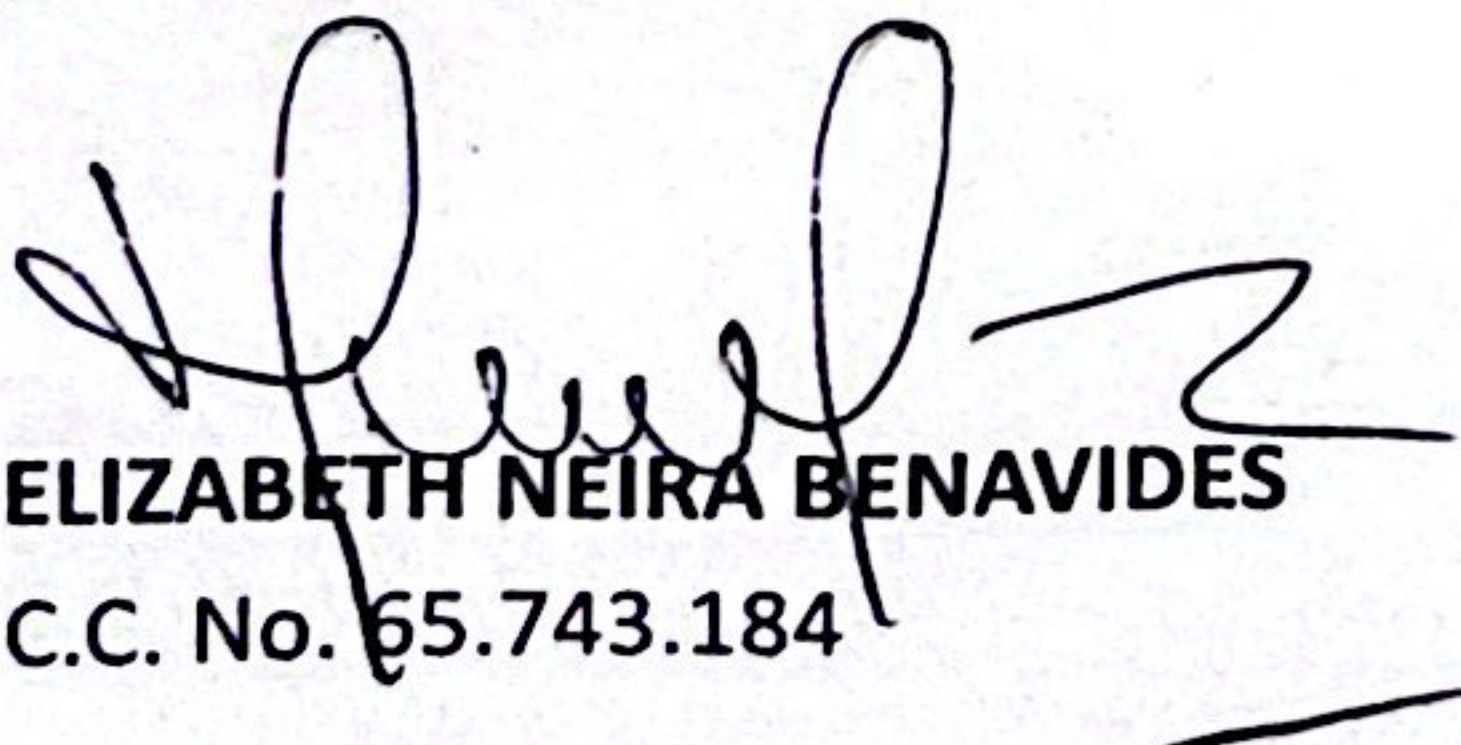
En consecuencia, se dejó constancia de la negativa de la Delegación Departamental del Meta de la Registraduría Nacional del Estado Civil a recibir y tramitar la inscripción de la lista de candidatos presentada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, así como de la imposibilidad de obtener en sede administrativa inmediata una decisión formal y motivada sobre dicha negativa, en la fecha y bajo las circunstancias aquí descritas.

Para constancia, se firma por los ciudadanos comparecientes y radica ante esta Delegación Departamental, a fin de que se emita pronunciamiento formal y expreso sobre el particular. a los ocho (8) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

  
**HUMBERTO RAFAEL MÉNDEZ ROJAS**  
C.C. 72.267.514

  
**JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN**  
C.C. No. 7.819.447

  
**JUAN DAVID MARTÍNEZ BOLAÑO**  
C.C. No. 1.007.900.066

  
**ELIZABETH NEIRA BENAVIDES**  
C.C. No. 65.743.184



Bogotá, D.C., 26 de diciembre de 2025

Señores  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
M.P. ÁLVARO ECHEVERRYLONDOÑO  
[atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co)  
[maria.guerrero@cne.gov.co](mailto:maria.guerrero@cne.gov.co)

ASUNTO:	Procedimiento de revocatoria de inscripción de candidatura- Auto 656 de 22 de diciembre de 2025
RADICADO:	CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029934
QUEJOSOS:	HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO - SAÚL VILLAR JIMÉNEZ
CANDIDATO:	JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN

Respetados magistrados.

**HUMBERTO RAFAEL MÉNDEZ ROJAS**, identificado como aparece al pie de mi firma, domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, según T.P. No. 146.811 del C. S. de la J., obrando en mi condición de apoderado especial del señor JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN en la presente actuación, de acuerdo con el poder adjunto; me dirijo a ustedes con el propósito de pronunciarme respecto a solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura promovida por los señores Hugo Velásquez Jaramillo y Saúl Villar Jiménez, identificadas con radicados No. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029934, en los términos requeridos en el artículo cuarto del Auto No. 656 de 22 de diciembre de 2025 (notificado vía electrónica el 23 de diciembre de 2025<sup>1</sup>), lo cual me permito realizar en los siguientes términos:

1. HECHOS Y ANTECEDENTES

- 1.1. Mi apoderado especial, señor JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Meta el día 7 de diciembre de 2025, tras postulación realizada por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", en coalición realizada con el MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO. Coalición que se denominó “**Pacto Histórico- Frente Amplio**”.
- 1.2. El 12 de diciembre del cursante año, el ciudadano HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO presentó solicitud de revocatoria de la candidatura de mi prohijado, radicada bajo el No. CNE E-DG-2025-029934. Escrito en el cual planteó como hechos relevantes, los siguientes:

<sup>1</sup> Comunicación CNE-DGC-DCAE- 056835/ÁEL/ CNE-E-DG-2025-029934/CNE-E-DG-2025-029935.

“(…) **SEGUNDO:** La condición de militante llevó a la señora MARTHA CECILIA GARZON CORTES, a participar en las elecciones para la Cámara de Representantes por el departamento del Meta, por su partido PACTO HISTORICO, el cual había decidido en aras de la democracia interna, realizar consultas populares en todo el territorio nacional, que fueron solicitadas y dispuestas por la Organización electoral, con miras a conformar sus listas, y para tal fin la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizó la consulta que se realizó el día 26 de Octubre del presente año.

**TERCERO:** Los resultados de la consulta en el departamento del Meta, una vez se efectuó el escrutinio, fueron los siguientes:

PARTIDO - VOTOS POR LISTAS		
00051	ORGANIZACIÓN POLITICA	
003	MARIA DEL CARMEN MAYUSA CRUZ	13.885
002	CESAR AUGUSTO DIAZ MEDINA	5.328
009	MARTHA CECILIA GARZON CORTES	4.051
004	CRISTIAN ANDRES ROMERO GONZALEZ	3.449
001	CRHISTIAN ANDRES ZAMORA MACHUCA	2.917
011	CARLOS ARIEL LADINO FAJARDO	2.834
010	JAZMIN CECILIA MARTINEZ SILVA	2.644
005	JUAN MANUEL OROZCO PINEDA	2.026
006	TULIA ROSA PERILLA SANCHEZ	1.608
013	JULIO MARTINEZ TAUTIVA	1.282
	TOTAL DEL PARTIDO	40.024
TOTAL VOTOS POR PARTIDOS Y CANDIDATOS		40.024

**CUARTO:** Como se observa MARHA (sic) CECILIA GARZÓN CORTES, ocupo (sic) el tercer lugar en la votación de esa consulta, lo que le da el derecho a ser inscrita y eventualmente elegida por la colectividad que la inscribió para la consulta.

**QUINTO:** La señora MARHA (sic) CECILIA GARZÓN CORTES. Estaba presta a inscribirse y jurar como candidata, cuando se encontró con la sorpresa de que en su lugar el partido había inscrito el nombre de JOSE MANUEL SANDOVAL GARZÓN, mediante una coalición entre su partido y el Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais” suscrito el día 5 de diciembre del 2025, es decir luego de efectuada la consulta.

**SEXTO:** JOSE MANUEL SANDOVAL GARZÓN nunca se inscribió ni participó en la consulta que el Pacto Histórico y la Registraduría Nacional llevaron a cabo el día 26 de octubre del 2025, por lo cual **su inscripción es ilegal, constituye un posible delito de fraude procesal** porque hizo incurrir en error a la organización electoral y hay un ostensible **delito de falsedad** al otorgar un aval a quien no participó en esa consulta.

**SEPTIMO:** La coalición Pacto Histórico, Mais, no podía desconocer los derechos legales de la señora MARTHA CECILIA GARZON CORTES, e incluso en el texto del acuerdo, se estableció **“la presente coalición respeta el acuerdo de consulta interpartidista del Pacto histórico y el Movimiento Político Colombia Humana desarrollado el 26 de Octubre** denotando así el conocimiento de los derechos de la candidata excluida, por una acuerdo que incurre en la absurda tesis de que dos particulares podrían derogar la ley 1475. (…)

1.3. Previo al anterior relato fáctico solicitó se hicieran las siguientes declaraciones:

“(…) **PRIMERO:** La señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTES, tiene pleno y absoluto derecho a integrar la lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento del Meta periodo 2026 - 2030, en el 3 renglón de los candidatos inscritos por PACTO HISTÓRICO –

*FRENTE AMPLIO, por haber ocupado ese renglón según la votación obtenida en la consulta popular del 26 de octubre del 2025.*

**SEGUNDO:** *El señor JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON, no puede formar parte de la lista de candidatos inscritos para las elecciones del 2026 por el partido PACTO HISTORICO - FRENTE AMPLIO, por cuanto no participó en el proceso electoral de dicha organización y porque desde luego no obtuvo ni podía obtener votos.*

**TERCERO:** *Se ordene la exclusión del señor JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON de la lista de candidatos inscritos por EL PACTO HISTORICO - FRENTE AMPLIO, a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta.*

**CUARTO:** *Se ordene en consecuencia la inscripción de la señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTES, como candidata del PACTO HISTÓRICO-FRENTE AMPLIO, en el renglón 3 de la lista por cuanto obtuvo un total de 4.051 votos en esa elección, adquiriendo así pleno derecho constitucional y legal a participar en las elecciones para la Cámara de Representantes. (...)*

- 1.4. En similar sentido, y en la misma fecha<sup>2</sup>, el ciudadano SAÚL VILLAR JIMÉNEZ radicó solicitud de revocatoria de inscripción contra el señor Sandoval Garzón, identificada bajo el No. CNE-E-DG 2025-029935. Memorial en el que acudiendo a fundamentos fácticos similares a los del radicado No. CNE E-DG-2025-029934, propuso como pretensiones las siguientes:

### **PRETENSIONES**

**“PRIMERO. SE REVOQUE PARCIAMENTE LA INSCRIPCION**, de la Lista del **PACTO HISTORICO – FRENTE AMPLIO**, para la Cámara de Representantes por la Circunscripción Territorial del Meta, correspondiente a las elecciones del próximo 8 de marzo de 2026, en lo relacionado con el Candidato **JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON** No 103 de la lista.

**SEGUNDO.** Que, como consecuencia de lo anterior, se **ORDENE** a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Organización Electoral, **EXCLUIR** de dicha lista y del tarjetón al Candidato **JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON** No 103 en dicha lista.

**TERCERO.** Que, como consecuencia de lo anterior, se **ORDENE** a la Registraduría Nacional del Estado Civil, Organización Electoral, **INCLUIR** en dicha lista y en el tarjetón a la Candidata **MARTHA CECILIA GARZON CORTES** en el No 103 de dicha lista, ciudadana, que realmente **ADQUIRIO** los Derechos para hacer parte de la misma”.

Adicionalmente, el quejoso Saúl Villar propuso un cuestionamiento en el siguiente sentido:

“(…)

### **OTRAS IRREGULARIDADES**

<sup>2</sup> 12 de diciembre de 2025.

*El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 09673 de diecisiete (17) de septiembre de 2025, reconoció personería Jurídica al Partido **PACTO HISTORICO**, resolución que se encuentra debidamente **NOTIFICADA y EJECUTORIADA**.*

*De otro lado para que los Partidos y Movimientos Políticos Inscriban **CANDIDATOS DE COALICION**, no deben superar el 15% de la votación de las elecciones anteriores para la Circunscripción Electoral en la que se pretende hacer la correspondiente Inscripción, sin embargo, el Partido Político **PACTO HISTORICO** en las elecciones para Congreso de la República de 2022, en cuanto a la Cámara de Representantes de la Circunscripción Electoral del Meta, **OBTUVO** una votación superior al 25% lo que hace **IMPOSIBLE E ILEGAL** la Inscripción de la Lista de **COALICION** en el entendido que la norma dice que los Partidos y Movimientos Políticos que inscriban éstos candidatos no deben dicho rango de votación. (...)"*

- 1.5. Por reparto interno de negocios realizado en el CNE el 16 de diciembre de 2025, le correspondió al Despacho del Magistrado ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO conocer del trámite de los radicados Nos. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.
- 1.6. Mediante Auto No. 656<sup>3</sup> Radicados No. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935 (22 de diciembre de 2025)<sup>4</sup> se decide avocar conocimiento del asunto, ordenando, entre otras cosas, lo siguiente:

**“ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO** respecto de las solicitudes de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.819.447, candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, inscrita por la Coalición denominada **“PACTO HISTÓRICO - FRENTE AMPLIO”** conformada por el **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”** y el **MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**, con ocasión de las elecciones al Congreso de la República a celebrarse el ocho (08) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente de radicados Nos. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.

(...)

**ARTÍCULO TERCERO: INCORPORAR** como prueba, los formularios de inscripción de candidatos (E-6 y E-8) y el acuerdo de coalición de la lista presentada por la Coalición denominada **“PACTO HISTÓRICO - FRENTE AMPLIO”** conformada por el **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”** y el **MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**, para la Cámara de Representantes por la Circunscripción del departamento del Meta.

**ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR** el presente proveído, junto con la copia del expediente de radicados No. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-

<sup>3</sup> Notificado vía electrónica mediante correo del 23 de diciembre y comunicación CNE-DGC-DCAE-056835/ÁEL/ CNE-E-DG-2025-029934/CNE-E-DG-2025-029935.

<sup>4</sup> “Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO respecto de las solicitudes de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.819.447, candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, inscrita por la Coalición denominada “PACTO HISTÓRICO - FRENTE AMPLIO” conformada por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS” y el MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, con ocasión de las elecciones al Congreso de la República a celebrarse el ocho (08) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente de Radicados Nos. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935”.



029935, al ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN**, en su calidad de candidato, quien puede ser ubicado en el correo electrónico: *jmanuelsandoval@hotmail.es*, para que en el término de tres (3) días contados a partir de la recepción de la comunicación del presente Auto, allegue escrito donde deponga sobre los hechos objeto de controversia y remita los soportes probatorios que pretenda hacer valer, en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, dentro de la presente actuación administrativa. (...)”

- 1.7. A través de correo electrónico y comunicación CNE-DGC-DCAE-056835/ÁEL/CNE-E-DG-2025-029934/CNE-E-DG-2025-029935, remitida el 23 de diciembre de 2025 se notificó a mi apoderado del inicio de la actuación administrativa.

## **2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DEFENSA**

### **2.1. Consideraciones preliminares sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral**

De acuerdo con el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral está habilitado para decidir la revocatoria de la inscripción de candidaturas únicamente cuando exista **plena prueba** de que el candidato se encuentra incurso en una causal de inhabilidad prevista de manera expresa en la Constitución o en la ley. Esta atribución tiene un alcance excepcional y restrictivo, pues fue concebida por el constituyente como un mecanismo preventivo para impedir la participación electoral de personas que, de forma **objetiva y verificable**, carecen de aptitud jurídica para aspirar a cargos de elección popular. Por lo tanto, dicha competencia no puede extenderse a la resolución de controversias interpretativas, debates jurídicos complejos o vacíos normativos que exijan un ejercicio de valoración probatoria o de construcción normativa, pues tales asuntos corresponden al juez natural de lo electoral<sup>5</sup>, esto es, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En el presente caso, la solicitud de revocatoria no se fundamenta en la existencia de una inhabilidad constitucional o legal plenamente probada, sino en una discrepancia respecto de la forma como las organizaciones políticas estructuraron su participación en una consulta popular interpartidista y, posteriormente, conformaron una nueva coalición electoral. En consecuencia, desde esta perspectiva inicial, la solicitud desborda el ámbito material de competencia del CNE.

### **2.2. Régimen jurídico de las coaliciones políticas y su aplicación al caso concreto**

El análisis de la solicitud de revocatoria formulada contra la inscripción del señor **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN** exige abordar, de manera sistemática, el

---

<sup>5</sup> Ibidem.



régimen jurídico de las coaliciones políticas, en tanto el cuestionamiento planteado no se dirige contra una inhabilidad personal del candidato, sino contra el ejercicio legítimo de esta figura por parte de las organizaciones políticas que concurrieron a su postulación. Desde esta perspectiva, la controversia no puede resolverse al margen de los fundamentos normativos, jurisprudenciales y constitucionales que gobiernan las coaliciones en el ordenamiento electoral colombiano.

Desde el fundamento normativo y jurisprudencial, la coalición política es una figura reconocida de forma constante y progresiva en el derecho colombiano, aun antes de su expresa constitucionalización. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que, aunque el ordenamiento no contiene una definición legal cerrada de coalición, su existencia ha sido admitida desde la Ley 130 de 1994 y ha sido entendida como una alianza propia del proceso democrático, no prohibida por las normas electorales y derivada de la voluntad libre de las agrupaciones políticas. En la sentencia de reemplazo proferida dentro del expediente 11001-03-28-000-2020-00018-00 (caso Nemesio Roys), la Sala Electoral sostuvo que el derecho a coaligarse “emana de la voluntad libre de las agrupaciones políticas”, y que su ejercicio no se encuentra supeditado a la existencia de un desarrollo legislativo exhaustivo, pues se trata de un derecho reconocido de manera autónoma por la Constitución, particularmente a partir del inciso quinto del artículo 262 Superior.

Esta línea fue reforzada de manera categórica por la Corte Constitucional en la sentencia SU-175 de 2025, al señalar que las coaliciones cumplen una función esencial en el fortalecimiento del pluralismo político, la democracia participativa y el derecho fundamental a la participación política. En dicha providencia, la Corte advirtió que una interpretación restrictiva del artículo 262 de la Constitución, que limite injustificadamente la conformación de coaliciones, desvirtúa su sentido democrático y vulnera los artículos 1 y 40 de la Carta Política.

En cuanto a la legitimación, tanto la jurisprudencia constitucional como la electoral han sido consistentes en afirmar que el derecho a conformar coaliciones radica exclusivamente en cabeza de las organizaciones políticas, y no de los candidatos individualmente considerados. Son los partidos, movimientos políticos y, en los términos fijados por la Constitución y la ley, otras agrupaciones políticas, quienes se encuentran habilitados para decidir si concurren de manera individual o en coalición a un proceso electoral, así como para definir las reglas internas que rigen dicha concurrencia. La sentencia SU-175 de 2025 enfatizó que incluso las agrupaciones sin personería jurídica pueden integrar coaliciones, en la medida en que no existe prohibición constitucional o legal que lo impida, y que negar esta posibilidad implica restringir de manera desproporcionada el acceso al proceso democrático. Esta consideración resulta plenamente aplicable al caso bajo examen, en el que la

decisión de coaligarse y de definir la modalidad de lista fue adoptada por los representantes legítimos de las organizaciones políticas involucradas.

Desde la perspectiva de la finalidad, las coaliciones políticas responden a un objetivo claramente constitucional: permitir la agregación de fuerzas políticas, ampliar los márgenes de representación, favorecer el pluralismo y facilitar la gobernabilidad democrática. Tanto la Sección Quinta como la Corte Constitucional han destacado que la coalición no es una anomalía del sistema electoral, sino una manifestación del principio democrático en su dimensión participativa y representativa. En la sentencia SU-175 de 2025 se indicó que las coaliciones “permiten la unión de diversas fuerzas para fortalecer el pluralismo y la democracia”, asegurando que distintos sectores sociales encuentren canales efectivos de representación política.

Bajo esta lógica, cualquier interpretación administrativa que desincentive o deslegitime el uso de las coaliciones debe ser considerada contraria a la finalidad constitucional de esta figura.

En lo que respecta a la vinculatoriedad, la jurisprudencia electoral ha sido inequívoca en señalar que los acuerdos de coalición válidamente celebrados tienen carácter obligatorio para quienes los suscriben. La Sección Quinta, en la sentencia de reemplazo del caso Nemesio Roys, explicó que la Ley 1475 de 2011, particularmente en su artículo 29, consagró de manera expresa el carácter vinculante del acuerdo de coalición, de tal forma que los partidos y movimientos políticos que lo integran no pueden inscribir ni apoyar candidatos distintos al designado por la coalición, so pena de incurrir en consecuencias jurídicas como la nulidad o la revocatoria de inscripciones. Esta vinculatoriedad no solo opera al momento de la suscripción del acuerdo, sino que se proyecta durante todo el proceso electoral, como garantía de coherencia, lealtad y respeto por el voto programático.

En el caso concreto, lejos de desconocerse esta regla, las organizaciones políticas actuaron conforme a lo pactado en el acuerdo de voluntades que reguló la consulta y las eventuales coaliciones posteriores.

Finalmente, en relación con la solemnidad, la Sección Quinta ha precisado que la ley estatutaria estableció requisitos mínimos de forma y contenido para la inscripción de candidaturas en coalición, tales como la identificación de los partidos que la integran y la filiación política del candidato. Estos requisitos tienen por finalidad garantizar la transparencia del proceso electoral y la claridad frente al elector, mas no imponer cargas adicionales que desnaturalicen la figura o restrinjan su ejercicio. En el caso Nemesio Roys, la Sala Electoral fue enfática en señalar que la

solemnidad no puede convertirse en un obstáculo desproporcionado que vacíe de contenido el derecho a coaligarse, especialmente en contextos donde el propio legislador no ha desarrollado de manera integral el régimen de las coaliciones para corporaciones públicas.

Por otra parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado<sup>6</sup> ha reconocido que, una vez conformada una coalición, esta se erige como el sujeto político colectivo titular del derecho de postulación, con capacidad para definir la conformación de las listas, su orden y las reglas internas que gobiernan la selección de candidaturas, conforme a lo estipulado en el acuerdo de coalición. En consecuencia, la actuación individual de los partidos que la integran se ve subsumida en la voluntad colectiva expresada a través del pacto político de coalición.

Así mismo, la jurisprudencia electoral ha sido enfática en señalar que las controversias relacionadas con la interpretación de estatutos partidarios, acuerdos de voluntades o pactos de coalición no constituyen asuntos de simple verificación administrativa, sino debates jurídicos complejos que, por su naturaleza, deben ser resueltos por el juez natural de lo electoral. En tal sentido, dichas controversias no pueden ser válidamente zanjadas mediante el ejercicio de la potestad excepcional de revocatoria administrativa de inscripciones, reservada por la Constitución a supuestos de inhabilidades manifiestas y plenamente probadas.

Aplicados estos criterios al caso concreto, resulta evidente que la coalición Pacto Histórico – Frente Amplio se ajustó al marco constitucional y jurisprudencial vigente, fue conformada por sujetos legitimados, persiguió una finalidad democrática legítima, se estructuró sobre un acuerdo de voluntades vinculante y observó las solemnidades exigidas por el ordenamiento. En consecuencia, no existe fundamento jurídico para cuestionar la inscripción del candidato a partir de una lectura restrictiva o fragmentaria del régimen de coaliciones. Por el contrario, cualquier intento de invalidar ahora una decisión adoptada en ejercicio de la autonomía partidaria desconocería la jurisprudencia reiterada sobre la materia, afectaría la seguridad jurídica del proceso electoral y excedería los límites constitucionales de la competencia atribuida al Consejo Nacional Electoral.

### **2.3. Legalidad y fuerza vinculante de la cláusula décima sexta del acuerdo de voluntades**

La consulta popular interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025 por el Movimiento Político Colombia Humana, el Partido Político Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano, el Partido Político Unión Patriótica

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de reemplazo, Rad. 11001-03-28-000-2020-00018-00.

“UP” y Progresistas se rigió por un acuerdo de voluntades libremente suscrito por dichas organizaciones, el cual fue puesto en conocimiento de la autoridad electoral competente. Previendo la posible fusión de esos mismos partidos, la cual se encontraba en trámite en el CNE, dentro de ese acuerdo se incluyó la **cláusula décima sexta**, mediante la cual se habilitó expresamente la posibilidad de conformar coaliciones posteriores con otros partidos o movimientos políticos, definiendo, además, que la decisión de coaligarse y la modalidad de lista correspondería a los representantes legales de las organizaciones firmantes.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, la autonomía de los partidos y movimientos políticos constituye una manifestación directa del pluralismo político consagrado en el artículo 1º de la Constitución Política. Por ejemplo, en la Sentencia C-490 de 2011, al revisar la constitucionalidad de la Ley 1475 de 2011, la Corte precisó que los partidos gozan de un amplio margen de configuración interna para definir sus mecanismos de selección y postulación de candidatos, siempre que se respeten los mínimos estatutarios fijados por el legislador. En la Sentencia C-089 de 1994 se sostuvo que la autonomía partidista comprende la facultad de adoptar decisiones estratégicas y organizativas relacionadas con su participación en los procesos electorales.

Esta Corporación ha reiterado que dicha autonomía no se agota en la definición de estatutos internos, sino que se extiende a la posibilidad de celebrar acuerdos políticos y coaliciones electorales, como expresión legítima de la libertad de asociación política. Así lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-141 de 2010, al señalar que la conformación de coaliciones es un instrumento válido para la realización del pluralismo y la eficacia del sistema democrático.

Desde la perspectiva contencioso-administrativa, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que la potestad de conformar listas y decidir la forma de participación en los procesos electorales hace parte del núcleo esencial del derecho de asociación política y no puede ser sustituida por la autoridad electoral mediante actos administrativos. En tal sentido, ha sostenido que los acuerdos interpartidistas válidamente celebrados constituyen fuente obligatoria de regulación de la conducta de los partidos, en tanto no contraríen normas constitucionales o legales de carácter imperativo.

Esta comprensión encuentra sólido respaldo en la doctrina constitucional y politológica contemporánea. Norberto Bobbio ha explicado que el pluralismo político se realiza institucionalmente a través de los partidos, los cuales no son simples intermediarios electorales, sino organizaciones autónomas llamadas a estructurar la voluntad política y a canalizar la representación democrática, razón por la cual su

autonomía decisonal constituye un presupuesto del Estado constitucional democrático. En un sentido convergente, Giovanni Sartori ha destacado que los partidos políticos son actores estructurales del sistema democrático y que su capacidad de definir estrategias electorales, alianzas y coaliciones forma parte esencial de su función representativa, de modo que una intervención administrativa excesiva en tales decisiones termina por erosionar la lógica competitiva del pluralismo. Desde el derecho constitucional, Manuel Aragón Reyes ha sostenido que la autonomía de los partidos políticos no es una concesión graciosa del legislador o de la autoridad administrativa, sino una exigencia derivada del principio democrático, lo cual impone límites estrictos al control estatal, particularmente cuando dicho control pretende sustituir decisiones políticas legítimas por valoraciones administrativas. En el ámbito comparado y de la gobernanza electoral, Daniel Zovatto, desde la experiencia de IDEA Internacional, ha subrayado que las coaliciones electorales constituyen mecanismos legítimos de adaptación de los partidos a contextos políticos cambiantes y que su regulación debe orientarse a garantizar la equidad y la transparencia, mas no a restringir injustificadamente la libertad de configuración política de las organizaciones partidistas.

Ahora bien, esta interpretación no resulta meramente teórica, sino que encuentra un claro parangón en lo acontecido dentro del mismo proceso de consulta popular interpartidista celebrado el 26 de octubre de 2025, particularmente en lo relativo a la conformación de la lista al Senado de la República. En efecto, si bien el resultado electoral individual de dicha consulta otorgó la mayor votación al precandidato Pedro Flórez, posteriormente las organizaciones políticas suscriptoras del acuerdo de voluntades decidieron, en ejercicio de su autonomía, que la doctora Carolina Corcho —quien había participado en la consulta partidista para la selección de candidato presidencial celebrada el mismo día— encabezara la lista al Senado, pese a no haber participado como precandidata en la consulta específica a dicha corporación. Esta decisión se adoptó con fundamento en una cláusula expresa del acuerdo de voluntades, concretamente el parágrafo de la **cláusula segunda**, que habilitó a los representantes legales de los partidos y a la Coordinación Nacional Provisional del Movimiento Político Pacto Histórico para definir políticamente la cabeza de lista al Senado.

Lo anterior evidencia que los acuerdos de voluntades no solo regulan de manera válida la realización de las consultas, sino que además establecen reglas de vinculatoriedad obligatoria para las organizaciones políticas, las cuales han sido aplicadas de manera coherente y consistente por las mismas colectividades en distintos escenarios electorales. Pretender desconocer ahora la eficacia jurídica de una cláusula de similar entidad y naturaleza, únicamente cuando sus efectos no resultan políticamente favorables para uno de los participantes, implicaría un trato



desigual injustificado y una vulneración directa del principio de seguridad jurídica y de la autonomía partidista que el orden constitucional protege.

Por lo tanto, la solicitud de revocatoria de la inscripción del señor JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN no solo carece de sustento constitucional y legal, al desconocer el alcance de la autonomía partidaria y la fuerza vinculante de los acuerdos de voluntades válidamente celebrados, sino que además resulta abiertamente contradictoria con la práctica electoral previamente admitida y aplicada por las mismas organizaciones políticas en el marco del proceso de consulta del 26 de octubre de 2025. Una interpretación selectiva que pretenda invalidar ahora cláusulas de idéntica naturaleza implicaría, adicionalmente, una vulneración del principio de igualdad y no discriminación entre candidaturas, al aplicar un estándar distinto frente a situaciones fáctica y jurídicamente análogas.

Adicionalmente, dicha pretensión desconoce el **principio de confianza legítima**, en la medida en que el ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, actuando de buena fe y confiando razonablemente en las decisiones adoptadas por las organizaciones políticas dentro del marco de su autonomía constitucional, aceptó una postulación realizada conforme a acuerdos válidos, públicos y previamente definidos. No resulta jurídicamente admisible que, con posterioridad, terceros pretendan desvirtuar tales decisiones mediante interpretaciones sobrevinientes que alteren las reglas de juego ya aplicadas, afectando de manera directa la seguridad jurídica del candidato y el ejercicio efectivo de su derecho a participar en la contienda electoral.

Debe reiterarse, además, que la potestad de inscribir listas y candidatos únicos es un atributo propio y exclusivo de los partidos y movimientos políticos, como expresión de su derecho fundamental de asociación política, y no de las personas individualmente consideradas. En consecuencia, cualquier eventual desarrollo doctrinal o jurisprudencial que pretenda precisar el alcance de dicha autonomía o de los mecanismos de consulta y coalición debe respetar la garantía de la confianza legítima y operar, en todo caso, con efectos hacia el futuro, de manera anunciada y prospectiva, sin proyectarse retroactivamente sobre situaciones consolidadas bajo un marco normativo, fáctico e histórico que fue legítimamente aplicado. Solo así se preservan los principios de coherencia institucional, seguridad jurídica y respeto por el pluralismo político que informan el orden constitucional vigente.

En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado que el principio de confianza legítima opera como una garantía frente a cambios inesperados o interpretaciones sobrevinientes de la actuación estatal que afecten situaciones consolidadas. Así, en la Sentencia C-478 de 1998 sostuvo que **la confianza legítima protege a los ciudadanos que han ajustado su conducta a una actuación estatal válida y**

**razonable, de modo que el Estado no puede defraudar esas expectativas sin adoptar medidas de transición adecuadas.** De igual forma, en la Sentencia C-131 de 2004, la Corte reiteró que las autoridades deben respetar las expectativas legítimas generadas por su propia actuación, particularmente cuando se trata de decisiones que inciden en el ejercicio de derechos fundamentales. Finalmente, en la Sentencia T-295 de 1999 se enfatizó que la confianza legítima impide que la administración altere abruptamente las reglas de juego en perjuicio de quienes actuaron de buena fe, criterio que resulta plenamente aplicable al ámbito electoral y a la situación del candidato cuya inscripción se pretende revocar.

La Sección Quinta del Consejo de Estado<sup>7</sup> ha sostenido que las decisiones adoptadas por las organizaciones políticas en ejercicio de su autonomía gozan de presunción de legalidad y son aptas para generar confianza legítima en los candidatos que ajustan su conducta a ellas. En consecuencia, dicha confianza no puede ser defraudada mediante reinterpretaciones posteriores o cambios abruptos de criterio con efectos retroactivos que perjudiquen situaciones jurídicas consolidadas en el marco del proceso electoral.

De igual forma, la jurisprudencia ha precisado que no toda eventual irregularidad interna, discusión estatutaria o discrepancia política tiene la entidad suficiente para afectar la validez de una inscripción o de una candidatura, si no se traduce en la configuración de una inhabilidad constitucional o legal expresa. Esta precisión resulta determinante para el caso concreto, en el que no se alega ni se demuestra la existencia de inhabilidad alguna, sino que se pretende trasladar al escenario de la revocatoria administrativa una controversia interpretativa ajena a los supuestos excepcionales que habilitan dicha potestad.

La consulta popular interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025 por el Movimiento Político Colombia Humana, el Partido Político Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano, el Partido Político Unión Patriótica “UP” y Progresistas se rigió por un acuerdo de voluntades libremente suscrito por dichas organizaciones, el cual fue puesto en conocimiento de la autoridad electoral competente. Dentro de ese acuerdo, nacional y general por demás (aplicable a todas las circunscripciones departamentales del país), se incluyó la **cláusula décima sexta**, mediante la cual se habilitó expresamente la posibilidad de conformar coaliciones posteriores con otros partidos o movimientos políticos, definiendo, además, que la decisión de coaligarse y la modalidad de lista correspondería a los representantes legales de las organizaciones firmantes. Esto estipuló textualmente la cláusula:

<sup>7</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de agosto de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2019-000XX-00.

**“DÉCIMA SEXTA. POSIBILIDAD DE CONFORMACIÓN DE COALICIONES.** *El presente acuerdo habilita la conformación de coaliciones con otros partidos o movimientos, siempre que se respete el umbral previsto en el artículo 262 de la Constitución. La decisión de coaligarse corresponderá a los Representantes Legales de los Partidos, o a la Coordinación Nacional Provisional del Movimiento Político Pacto Histórico en caso de concretarse la fusión, quienes definirán la modalidad de lista. En todo caso, deberá respetarse el orden resultante de la presente consulta para la conformación de la lista a efectos de los renglones donde se introduzcan candidaturas de los presentes partidos”.* (se destaca en lo pertinente)

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, los partidos y movimientos políticos gozan de un amplio margen de autonomía para definir sus estrategias electorales, adoptar decisiones internas y regular los mecanismos de selección y postulación de candidatos, siempre que respeten la Constitución y la ley. Esta autonomía, que constituye una manifestación directa del pluralismo político, ha sido reconocida también por el Consejo de Estado, al señalar que la potestad de conformar listas y decidir la forma de participación en los procesos electorales hace parte del núcleo esencial del derecho de asociación política.

En ese sentido, la **cláusula décima sexta** no solo es jurídicamente válida, sino que constituye una expresión legítima de la autonomía partidista, adoptada de manera previa, transparente y vinculante para todos los participantes de la consulta.

#### 2.4. Aplicación del principio “*Pacta Sunt Servanda*”

De conformidad con el principio general del derecho *pacta sunt servanda*, toda convención válidamente celebrada obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe. Este principio, que tiene plena vigencia en el ámbito del derecho público y del derecho electoral, impone el deber de respetar los acuerdos políticos que regulan la actuación conjunta de las organizaciones partidarias.

En el caso bajo examen, el acuerdo de voluntades que reguló la consulta interpartidista estableció de manera expresa las reglas aplicables en caso de conformarse nuevas coaliciones. Por lo tanto, la decisión posterior de constituir la **coalición Pacto Histórico – Frente Amplio**, con la inclusión del **Movimiento Político MAIS** y la postulación del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, no constituye una actuación irregular, sino el ejercicio legítimo de una facultad previamente acordada y aceptada por todos los partidos que participaron en la consulta.

## **2.5. Alcance jurídico de los resultados de la consulta popular interpartidista**

La consulta popular interpartidista no genera, por sí sola, un derecho subjetivo individual en cabeza de los precandidatos para exigir su inscripción como candidatos. De acuerdo con la Ley 1475 de 2011 y la jurisprudencia constitucional, el derecho a postular candidatos es un derecho propio de los partidos y movimientos políticos, quienes pueden disponer de él conforme a sus estatutos, acuerdos y decisiones políticas.

Al respecto, la Sección Quinta del Consejo de Estado<sup>8</sup> ha precisado que los resultados de las consultas internas no generan por sí solos un derecho subjetivo absoluto, adquirido o inmodificable al aval ni a un renglón específico dentro de la lista, en tanto dichas consultas constituyen una fase del proceso de selección de candidaturas cuyo alcance vinculante debe ser interpretado conforme a los estatutos y a los acuerdos políticos que las regulan. En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que la consulta obliga en los términos pactados por las organizaciones políticas que la convocan, pero no suprime ni anula la autonomía decisoria que la Constitución reconoce a los partidos y movimientos políticos para definir sus estrategias de participación electoral.

Esta interpretación resulta plenamente aplicable al caso concreto, pues cualquier expectativa individual derivada del resultado de la consulta debía armonizarse necesariamente con lo previsto en el acuerdo de voluntades y con las decisiones orgánicas posteriores adoptadas por las organizaciones políticas, en ejercicio legítimo de su autonomía constitucional.

En consecuencia, los resultados de la consulta obligan en los términos definidos en el acuerdo que la regula, el cual refleja la voluntad política de las organizaciones suscriptoras. Pretender que la votación obtenida en la consulta impone una obligación automática e inmodificable de inscripción desconoce la autonomía de los partidos y el carácter colectivo del derecho de postulación.

## **2.6. Incidencia jurídica de la fusión partidista como hecho sobreviniente y modificación sustancial del contexto de la consulta**

Un elemento fáctico y jurídico de especial relevancia, que no puede ser soslayado en el análisis del presente caso, es el relacionado con el proceso de fusión partidista que se encontraba en trámite ante el Consejo Nacional Electoral desde el 13 de junio de 2025, y que involucraba precisamente a las organizaciones políticas que

---

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de noviembre de 2024, Rad. 76001-23-33-000-2024-00045-02.

posteriormente participaron en la consulta popular interpartidista del 26 de octubre de 2025, a saber: el Partido Polo Democrático Alternativo, el Partido Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano.

Dicho proceso de fusión no solo era público, notorio y conocido por la autoridad electoral, sino que incluso fue objeto de decisiones formales del propio Consejo Nacional Electoral. En efecto, mediante **Resolución No. 09673 de 17 de septiembre de 2025**, el CNE aceptó de manera condicionada la fusión, en cumplimiento de una orden judicial de tutela, y posteriormente, **el 3 de diciembre de 2025**, formalizó de manera definitiva la fusión entre las mencionadas organizaciones políticas, estableciendo que el Movimiento Político Pacto Histórico asumiría la personería jurídica, así como los derechos y obligaciones de los partidos que entraban en proceso de disolución y liquidación.

Este hecho tiene consecuencias jurídicas ineludibles para la valoración de los efectos de la consulta celebrada el 26 de octubre de 2025. En primer lugar, resulta claro que al momento de la inscripción de las candidaturas, ocurrida el 7 de diciembre de 2025, las organizaciones políticas que habían concurrido individualmente a la consulta interpartidista ya no existían como sujetos políticos autónomos, sino que habían sido absorbidas en una nueva persona jurídica producto de la fusión. Se estaba, por tanto, ante un escenario político, jurídico e institucional radicalmente distinto al existente al momento de la consulta.

Esta circunstancia sobreviniente modifica sustancialmente el contexto en el cual deben analizarse los efectos y el alcance vinculante de la consulta interpartidista.

La consulta es un mecanismo de decisión interna que presupone la existencia y permanencia de las organizaciones políticas que la convocan y ejecutan. Cuando dichas organizaciones desaparecen como sujetos jurídicos autónomos, por efecto de una fusión aceptada por la autoridad electoral, no resulta razonable ni jurídicamente exigible predicar una fuerza vinculante inalterada de los resultados de la consulta, como si el contexto organizativo y jurídico hubiese permanecido incólume.

En este nuevo escenario, la voluntad política determinante ya no es la de los partidos individualmente considerados, sino la del nuevo sujeto político resultante de la fusión, el cual, en ejercicio de su autonomía constitucional, se encuentra habilitado para redefinir sus estrategias electorales, incluyendo la forma de concurrencia a las elecciones, la estructuración de coaliciones y la conformación de listas. Pretender imponer al nuevo movimiento político una obligación rígida derivada de una consulta realizada por organizaciones que jurídicamente han dejado de existir implicaría desconocer los efectos propios de la fusión, vaciar de



contenido la autonomía del nuevo sujeto político y desconocer la realidad institucional creada por una decisión del propio Consejo Nacional Electoral.

Adicionalmente, **este hecho refuerza la improcedencia de la revocatoria solicitada, en tanto pone de manifiesto que no existe una infracción clara, objetiva y manifiesta de una norma constitucional o legal, sino una situación compleja, inédita y jurídicamente discutible, derivada de la concurrencia de una consulta interpartidista y un proceso de fusión partidista en curso y posteriormente culminado.** Tal complejidad excluye, por definición, la posibilidad de acudir a la revocatoria administrativa de la inscripción, cuya procedencia constitucional está reservada —como lo ha sostenido la doctrina y jurisprudencia— a supuestos de inhabilidades evidentes y plenamente probadas.

Finalmente, este contexto sobreviniente robustece la protección del **principio de confianza legítima**, pues el candidato cuya inscripción se controvierte aceptó su postulación en un escenario en el que la autoridad electoral había reconocido y avalado un proceso de fusión que transformó la identidad y estructura de las organizaciones políticas involucradas. No resulta jurídicamente admisible que, con posterioridad, se pretenda desconocer las consecuencias de esa fusión para exigir el cumplimiento rígido de reglas pensadas para un escenario político que ya no existe, afectando de manera desproporcionada los derechos del candidato, de la colectividad política naciente y la estabilidad del proceso electoral.

## **2.7. Improcedencia de la revocatoria por ausencia de plena prueba de inhabilidad**

La solicitud de revocatoria de la inscripción del señor JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN no identifica ni acredita la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal. Por el contrario, se fundamenta en una interpretación controvertida sobre la aplicación del artículo 6 de la Ley 1475 de 2011 y sobre la forma de estructurar coaliciones para corporaciones públicas, materia que no ha sido desarrollada de manera exhaustiva por el legislador y que, además, fue producto de una reforma constitucional posterior mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, que hoy se encuentra pendiente de desarrollo legislativo profuso.

Este entendimiento se ve reforzado por los antecedentes legislativos de dicha reforma constitucional. En el informe de ponencia para segundo debate en segunda vuelta en plenaria de Cámara del proyecto<sup>9</sup> que culminó en el Acto Legislativo 02 de 2015, al abordar expresamente el tema de la inscripción de candidatos, el legislador fue claro en delimitar el alcance de la facultad atribuida al Consejo

<sup>9</sup> PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NUMEROS 12 DE 2008 SENADO, 106 DE 2008 CAMARA, ACUMULUDOS 051 DE 2008 CAMARA, 101 DE 2008 CAMARA, 109 DE 2008 CAMARA, 128 DE 2008 CAMARA, 129 DE 2008 CAMARA, 140 DE 2008 CAMARA.

Nacional Electoral para revocar inscripciones. Allí se indicó que dicha atribución se concibió como un mecanismo estrictamente preventivo, destinado a impedir la inscripción de candidatos **cuya inhabilidad apareciera manifiesta**, ya sea por confrontación directa o mediante la verificación de documentos públicos que evidenciaran de manera objetiva y evidente la configuración de la causal.

De manera particularmente relevante, el propio informe de ponencia precisó que cuando para demostrar la existencia de una inhabilidad sea necesario acudir a un acervo probatorio complejo o realizar interpretaciones jurídicas, debe esperarse a que operen los mecanismos judiciales correspondientes. Esto pone de presente que el constituyente derivado excluyó deliberadamente del ámbito de competencia del Consejo Nacional Electoral aquellos casos en los que la controversia **exige valoración probatoria, análisis interpretativo o definición jurídica no evidente, reservando tales discusiones al juez natural de lo electoral**.

En consecuencia, la atribución prevista hoy en el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política no habilita al Consejo Nacional Electoral para resolver controversias jurídicas complejas ni para suplir vacíos normativos mediante decisiones administrativas con efectos excluyentes del derecho fundamental a elegir y ser elegido. Su ejercicio legítimo se restringe a supuestos de inhabilidades objetivas, claras y plenamente acreditadas, lo cual no ocurre en el presente caso, razón por la cual la solicitud de revocatoria resulta improcedente y debe denegarse.

Escenario alternativo de solución con fundamento en la buena fe, la confianza legítima y el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011.

#### **2.8. Del cumplimiento de los presupuestos del artículo 262 de la Constitución Política a la hora de celebrar la coalición.**

En relación con el argumento según el cual el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica al partido *Pacto Histórico* mediante la Resolución 09674 del 17 de septiembre de 2025, y que, en consecuencia, dicha organización, al haber obtenido una votación superior al 15% del total de los votos válidos depositados para la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, no podía coaligarse con ninguna otra organización política en dicha circunscripción electoral, resulta necesario efectuar las siguientes precisiones:

En primer término, debe señalarse que en las elecciones al Congreso de la República del año 2022 el *Pacto Histórico* no ostentaba la calidad de partido político, tal como lo reconoce el propio peticionario al advertir que solo hasta el año 2025 dicha organización adquirió personería jurídica como partido. En efecto, para el año 2022 el *Pacto Histórico* se configuraba como una coalición integrada por seis partidos con personerías jurídicas independientes, a saber: **Colombia Humana**,

**Polo Democrático Alternativo, MAIS, Alianza Democrática Ampla (ADA), Unión Patriótica y Partido Comunista.**

De esta manera, no es jurídicamente acertado afirmar que el **Pacto Histórico** superó el límite del 15% que restringe la posibilidad de conformar coaliciones para corporaciones públicas de elección popular, pues en ese momento no se trataba de un partido político, sino de una coalición conformada por organizaciones minoritarias que cumplieran con las condiciones previstas en el artículo 262 de la Constitución Política para acceder a dicho mecanismo.

En segundo lugar, corresponde precisar que, en el marco del proceso de fusión de las organizaciones políticas, los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica (UP), Polo Democrático Alternativo (PDA), Partido Comunista Colombiano (PCC), Progresistas y la Minga Indígena manifestaron su intención de integrarse en una sola colectividad bajo la denominación *Pacto Histórico*. El objetivo de dicha fusión consistía en consolidar una única personería jurídica, estatutos comunes, órganos de dirección unificados y un programa político compartido, con el propósito de concurrir de manera cohesionada al certamen electoral.

No obstante, el Consejo Nacional Electoral condicionó la fusión de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Comunista a la culminación de los procesos sancionatorios que dicha autoridad adelantaba en su contra, lo cual impedía la materialización inmediata de la integración.

En lo que respecta al partido Colombia Humana, la solicitud de fusión fue denegada por el CNE al verificarse que el procedimiento no cumplía con los requisitos estatutarios exigidos para este tipo de actuaciones, lo que imposibilitó su incorporación formal al proceso de unificación.

Finalmente, resulta relevante destacar que ni el partido Alianza Democrática Ampla (ADA) ni el partido MAIS promovieron solicitud alguna de fusión bajo la personería del *Pacto Histórico*, circunstancia que delimita el alcance subjetivo de la iniciativa de integración y evidencia que la misma no comprendía a la totalidad de las organizaciones que en su momento conformaron la coalición en el año 2022.

Hechas las anteriores precisiones es menester indicar que **la fusión de agrupaciones políticas constituye un fenómeno jurídico de integración que produce como consecuencia inmediata la creación de un nuevo partido político, distinto de las colectividades que le dieron origen**. Este nuevo sujeto de derecho adquiere una única personería jurídica y, en consecuencia, se ve sometido a un régimen diferenciado respecto de las prerrogativas que antes correspondían individualmente a cada organización.

En primer lugar, la fusión implica la extinción de las personerías jurídicas independientes de las agrupaciones que se integran, lo cual conlleva la pérdida de la financiación estatal por concepto de funcionamiento del que trata el numeral 7 del artículo 16 de la Ley 1475 de 2011, que cada una recibía de manera autónoma. El nuevo partido deja de percibir recursos multiplicados por varias personerías y pasa a recibir únicamente los que corresponden a su nueva condición jurídica unitaria.

En segundo término, la fusión también afecta el acceso a los espacios gratuitos en los medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético de los que trata el artículo 36 de la Ley 1475 de 2011. Dichos espacios, que antes se asignaban a cada partido con personería propia, se concentran ahora en una sola organización, reduciendo la pluralidad de voces y subsumiendo la representación mediática bajo una única identidad política.

En tercer lugar, las colectividades que se fusionan pierden el derecho de postulación individual de candidatos, pues esta prerrogativa se transfiere al nuevo partido. La facultad de otorgar avales y participar en la inscripción de listas queda centralizada en la nueva organización, eliminando la capacidad de acción autónoma de las agrupaciones originarias.

Finalmente, la fusión supone la desaparición de los elementos de posicionamiento político acumulados por cada colectividad en el escenario electoral. Al quedar subsumidas bajo una sola personería jurídica, las organizaciones pierden su trayectoria individual y se convierten en una nueva fuerza política que, jurídicamente, nunca ha participado en contiendas electorales previas. **Esto significa que el nuevo partido debe construir su identidad y legitimidad desde cero, sin poder alegar la experiencia electoral acumulada por las agrupaciones que le dieron origen.**

En efecto la identidad política de un partido no se reduce únicamente a su personería jurídica, sino que se proyecta también a través de elementos simbólicos como los logo-símbolos, los colores distintivos y la denominación oficial. Estos componentes cumplen una función esencial en el posicionamiento frente al electorado, pues permiten que las colectividades construyan reconocimiento, credibilidad y arraigo social a lo largo de sucesivas contiendas electorales.

En el caso de las organizaciones políticas que deciden fusionarse, dichos elementos de identidad se ven necesariamente sustituidos por una nueva denominación, un nuevo logo- símbolo y una nueva paleta de colores que representan al partido resultante. Ello implica que las colectividades originarias pierden el espacio ya ganado frente al electorado, construido a partir de campañas previas, símbolos reconocibles y marcas políticas consolidadas.

La consecuencia jurídica y política de esta transformación es que el nuevo partido surge como una fuerza inédita, sin trayectoria electoral propia y sin el posicionamiento simbólico acumulado por las agrupaciones que le dieron origen. En otras palabras, la fusión no permite trasladar automáticamente el capital político derivado de los logo-símbolos y colores distintivos de los partidos originales, pues estos quedan subsumidos bajo una nueva identidad que debe ser validada nuevamente por los ciudadanos en el escenario electoral.

**En síntesis, la fusión de partidos políticos no es un simple acuerdo de cooperación, sino un acto jurídico que extingue las personerías individuales y da lugar a una nueva organización con derechos y obligaciones propias.** Ello implica la pérdida de beneficios estatales, de espacios de comunicación, de facultades de postulación y de posicionamiento político, consolidando una nueva fuerza que debe iniciar su trayectoria electoral en condiciones de igualdad frente a las demás colectividades.

De conformidad con lo expuesto, resulta evidente que la fusión de las colectividades políticas da lugar a la creación de un nuevo partido, jurídicamente distinto de las organizaciones que le dieron origen. Este nuevo sujeto político adquiere una única personería jurídica y, en consecuencia, pierde los beneficios, símbolos, denominaciones y posicionamiento previamente acumulados por las agrupaciones fusionadas.

En ese orden de ideas, y atendiendo a la finalidad teleológica del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política, el porcentaje de votación que debe computarse al nuevo partido es cero por ciento (0%), toda vez que se trata de una organización inédita que nunca ha sido sometida al escrutinio ciudadano en las urnas. Reconocerle porcentajes derivados de las colectividades extinguidas equivaldría a desconocer la naturaleza jurídica de la fusión, pues se trasladaría indebidamente un respaldo electoral histórico a un sujeto político que carece de trayectoria propia.

Así, el nuevo partido debe iniciar su participación en el escenario democrático en condiciones de igualdad frente a las demás fuerzas políticas, sin arrastrar votaciones anteriores, y únicamente podrá consolidar su posicionamiento y legitimidad a partir de los resultados que obtenga en los procesos electorales posteriores a su constitución.

En atención a lo expuesto, resulta necesario formular un llamado al Consejo Nacional Electoral para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, asuma la definición de las implicaciones que conlleva la fusión de partidos políticos respecto de la manera en que debe interpretarse el porcentaje previsto en



el artículo 262 de la Constitución Política, por tratarse de un asunto novedoso que carece de desarrollo jurisprudencial y normativo suficiente.

La ausencia de reglas claras sobre los efectos jurídicos de la fusión exige que el CNE adopte una postura institucional que brinde orientación tanto a las colectividades políticas como a la ciudadanía, garantizando certeza y coherencia en la aplicación de la norma constitucional.

En este sentido, se solicita que el Consejo Nacional Electoral emita una doctrina anunciada, con carácter vinculante y pedagógico, que establezca criterios uniformes para la interpretación y aplicación del inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política en escenarios de fusión. Tal doctrina debe salvaguardar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, garantizando que las organizaciones políticas y los electores cuenten con reglas claras, previsibles y estables que eviten la incertidumbre y la discrecionalidad en la aplicación de la norma.

De esta manera, el CNE no solo cumpliría con su función de árbitro electoral, sino que también fortalecería la institucionalidad democrática, asegurando que el porcentaje de votación de partidos fusionados se desarrollen en un marco de transparencia, equidad y respeto por los principios constitucionales que rigen la participación política.

El principio de confianza legítima, reconocido por la jurisprudencia constitucional y aplicado por el Consejo Nacional Electoral en sus decisiones administrativas, exige que las reglas de juego en materia electoral sean claras, estables y previsibles. Este principio se traduce en la obligación de las autoridades de evitar cambios abruptos o interpretaciones sorpresivas que afecten los derechos de las organizaciones políticas y de los ciudadanos que participan en el proceso democrático.

En el caso de las organizaciones políticas fusionadas y la forma de calcular su porcentaje de votación previsto en el artículo 262 de la Constitución no puede quedar al arbitrio de interpretaciones fragmentarias o contradictorias.

La ausencia de un desarrollo normativo, jurisprudencial o doctrinario específico sobre este punto genera un vacío que, de no ser atendido, podría vulnerar la confianza legítima de las colectividades y de los electores.

Por ello, el Consejo Nacional Electoral debe en el caso bajo estudio emitir una doctrina anunciada como lo hizo en su momento con la propaganda electoral en redes sociales mediante la Resolución 2126 de 2020, para fijar criterios claros que orienten cómo se entiende el porcentaje de votación de las organizaciones fusionadas.

Dichos criterios deben salvaguardar la seguridad jurídica y garantizar que las colectividades conozcan de antemano las consecuencias de una fusión en términos de límites para coaligarse.

Ahora bien, en cuanto al porcentaje de votación correspondiente del partido MAIS estimo igualmente traer a colación un precedente jurisprudencial directamente aplicable al asunto bajo examen, cuya observancia se impone en virtud de su carácter vinculante para el caso concreto. Se trata de la sentencia del Consejo de Estado del 9 de octubre de 2025 con ponencia del Magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, que resolvió la demanda de nulidad electoral interpuesta contra la elección del ciudadano Luis Alfonso Álvarez Padilla como diputado del departamento de Sucre para el periodo 2024-2027. Los demandantes alegaban que la coalición Centro Democrático – Colombia Justa Libres no podía inscribirse porque en la elección anterior de 2019 dichas colectividades habían superado el límite del quince por ciento de los votos válidos previsto en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución.

El demandado sostuvo que la coalición no superó el límite y que la distribución de votos debía hacerse conforme a las reglas fijadas por el concepto del Consejo Nacional Electoral bajo el radicado CNE-E-DG-2023-007310 del 31 de mayo de 2023, además de que los avales fueron otorgados conforme a la ley y los estatutos.

El Tribunal Administrativo de Sucre, en primera instancia, negó la nulidad al concluir que la coalición obtuvo 61.155 votos en 2019, equivalentes al 14,85% de los 411.622 votos válidos, por lo que no se excedió el tope. Los demandantes apelaron la mencionada sentencia insistiendo en que el porcentaje real obtenido por la coalición fue 15,07% y que sí se violó la disposición contenida en el artículo 262 Superior.

El Consejo de Estado analizó la forma de calcular el quince por ciento en coaliciones, distinguiendo entre listas con voto preferente y no preferente, y reiteró que la finalidad de la norma es permitir la participación de partidos minoritarios sin superar ese umbral. Si bien, a diferencia del *a quo*, concluyó que en este caso la

coalición excedió el límite del 15%, consideró procedente dar aplicación a la figura de la jurisprudencia anunciada, teniendo en cuenta que no existe un precedente judicial respecto de la interpretación y aplicación de la regla relativa a la conformación de listas en coalición para la elección de corporaciones públicas de elección popular, señalada en el artículo 262 constitucional, en su inciso quinto.

El Consejo de Estado fijó la siguiente regla para calcular el límite del quince por ciento de votos válidos cuando se trata de coaliciones. Si la lista es con voto

preferente, los votos marcados a favor de candidatos específicos se suman directamente al partido que los avaló y los votos marcados únicamente por la lista se dividen en partes iguales entre los partidos coaligados.

Si por el contrario la lista es cerrada y bloqueada o sin voto preferente, el elector no vota por candidatos individuales sino por la lista completa. En este escenario el Consejo de Estado indicó que el inciso quinto del artículo 262 debe interpretarse de manera armónica con el régimen de financiación y reposición de votos, por tratarse de un tema regulado por la ley electoral.

Los votos válidos obtenidos por la lista no se contabilizan como si fueran de un solo partido, sino que se atribuyen internamente a cada organización política según lo pactado en el acuerdo de coalición.

El acuerdo de coalición fija las reglas para repartir los recursos de reposición de gastos de campaña por concepto de voto válido obtenido entre los partidos y sostiene que esa misma fórmula sirve para distribuir los votos de la lista cerrada a efectos de calcular el quince por ciento del que trata el texto constitucional presuntamente infringido. Si el acuerdo establece porcentajes o criterios, como por número de candidatos electos, aportes o funcionamiento, esos mismos se aplican para asignar votos a cada partido. En ausencia de pacto expreso, la distribución se haría en partes iguales, pero la jurisprudencia privilegia siempre lo pactado por las colectividades. De esta manera el límite del quince por ciento se verifica partido por partido, con base en la porción de la reposición de gastos de campaña por concepto de voto válido obtenido que le corresponde según lo pactado en el acuerdo de coalición, y no con el total global de la lista, como lo pretenden el solicitante.

Lo anterior garantiza que partidos minoritarios puedan coaligarse entre sí, sin que se les compute como si fueran una sola fuerza política mayoritaria, con lo que se respeta la autonomía de las colectividades al dar fuerza vinculante a lo que ellas mismas acordaron.

Ahora bien, descendiendo al caso bajo estudio, se tiene que, en las pasadas elecciones de Congreso de la República, la coalición Pacto Histórico conformada por las colectividades Polo Democrático Alternativo, Alianza Democrática Amplia, Colombia Humana, MAIS, Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, decidieron inscribir lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del Meta bajo la modalidad de lista cerrada y bloqueada o sin voto preferente.

La mencionada coalición suscribió un acuerdo para su conformación que fijó las reglas de funcionamiento y en cuyo artículo séptimo regulaba lo relativo al tema de

la financiación estatal recibida por reposición de gastos de campaña por concepto de voto valido obtenido, dicha cláusula establecía en su literalidad lo siguiente:

*“CLÁUSULA SÉPTIMA: Los recursos que, por concepto de reposición de gastos o por votos válidos obtenidos, serán girados al 100% al PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, quien los distribuirá de la siguiente manera a los partidos firmantes del documento base suscrito por los aquí coaligados firmantes el día 5 de agosto de 2021 y la Colombia Humana como partido jurídico reconocido. 1.Pago a los acreedores de la campaña, priorizando los créditos adquiridos con entidades financieras y/o personas naturales, por el o los partidos para la coalición Pacto Histórico. 2. Los demás recursos serán distribuidos de la siguiente manera:*

CONCEPTO	% A DISTRIBUIR
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA COALICIÓN	30%
PROPORCIONAL AL # DE CANDIDATOS ELECTOS POR PARTIDO	15%
PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO	20%
SEGÚN APORTES DE LOS PARTIDOS	15%
PARA CAMPAÑA PRESIDENCIAL	20%

En este orden de ideas, de conformidad a la jurisprudencia anunciada sobre la materia, estos serían los ítems que se deben analizar a efecto de establecer los porcentajes de votación que le corresponden a cada una de las organizaciones políticas que conformaron la coalición.

Ahora bien, el examinar el formulario E-26 CAM correspondiente a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento del Meta se pudo establecer que fueron depositados un total de 327.783 votos válidos, lo que representa el 100% de la votación, de los cuales 82.309 votos fueron depositados a favor de la coalición Pacto Histórico lo que corresponde a un porcentaje del 25.1%. **El primer criterio** dispone que el treinta por ciento (30%) de los votos obtenidos por la coalición se distribuya en partes iguales entre las seis organizaciones políticas que la integraron. Dicho porcentaje corresponde a 24.692 sufragios lo que equivale al 7.54% de la votación total, que al dividirse entre seis que corresponde al total de organizaciones políticas arroja un total de votos para cada partido, equivalentes a 4098 votos lo que representa el 1,25% del total de votos válidos depositados para la cámara de representantes de la circunscripción del meta.

**El segundo criterio** aplicable al caso concreto sería quince por ciento (15%) de la votación depositada a favor del pacto Histórico, equivalente a 12.346 sufragios correspondiente al 3.77%, los cuales se deben dividir en proporción al número de candidatos electos en la mencionada circunscripción en este orden de ideas, al verificar el acuerdo de coalición y el respectivo formulario E-26 CAM (se anexa) se

pudo establecer que el único candidato electo fue inscrito y avalado por el partido Polo Democrático alternativo, motivo por el cual dicho porcentaje debe ser sumado para el partido Polo Democrático Alternativo en su integridad.

El **tercer criterio** establece que el veinte por ciento (20%) de los votos obtenidos por la coalición —equivalente a 16.462 sufragios— debe distribuirse para el funcionamiento de la coalición, por lo que se distribuirá en partes iguales entre las seis organizaciones políticas que la integraron, lo que arroja un total de 2.743.6 votos para cada colectividad, equivalentes al 0.84% de la votación.

En cuanto al **cuarto criterio**, correspondiente al quince por ciento (15%) de los votos equivalentes a 12.346 deben distribuirse en proporción a los aportes efectuados por las organizaciones políticas, se verificó en el formulario 7B y su anexo 7.9B (se anexan). que no se registraron aportes por parte de las organizaciones políticas, Por tanto, al no ser posible cuantificar dicho criterio, se procede a distribuirlo en partes iguales entre las seis colectividades, lo que equivale a 2.057.7 votos para cada una, correspondientes al 0,628% de la votación para ser computada a favor de cada organización política.

Finalmente, el **quinto criterio** dispone que el veinte por ciento (20%) de los 412.677 votos —equivalente a 16.462 sufragios— se destine a la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro. Al no ser cuantificable en términos de aportes específicos, dicho porcentaje se distribuye igualmente entre las seis organizaciones políticas de la coalición, correspondiendo a cada un 2.743.67 votos, equivalentes al 0,837%.

Así las cosas, el porcentaje obtenido por el partido MAIS de acuerdo a los criterios establecidos en el acuerdo de coalición y la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado serían los siguientes:

Partido Colectividad	/ Criterio 1 (30%)	Criterio 2 (15% electos)	Criterio 3 (20%)	Criterio 4 (15% aportes)	Criterio 5 (20% - campaña presidencial)	- % total
Partido MAIS	1,25%	0	0.84%	0,628%	0,837%	3.55%

Ahora bien, cabe señalar que el Consejo Nacional Electoral mediante concepto bajo el radicado CNE E-DG-2023-007310 del 31 de mayo de 2023, sostuvo que la cuantificación de los porcentajes de votación de las organizaciones coaligadas, tratándose de listas cerradas y bloqueadas —es decir, sin voto preferente—, la votación obtenida por la coalición debe dividirse entre el número de organizaciones políticas que la integran.

Así las cosas, en lo que respecta al Partido MAIS, su porcentaje de votación ascendería al 3,55% si se adopta la tesis del Consejo de Estado, o al 4,183% si se



acoge la tesis del Consejo Nacional Electoral. En cualquiera de los dos escenarios, ello implica que se podría coaligar con el *Pacto Histórico* sin superar el límite del 15% de los votos depositados en la respectiva circunscripción en la elección anterior, conforme lo dispone el artículo 262 de la Constitución Política.

Del análisis efectuado se concluye que la coalición entre el partido MAIS y el Pacto Histórico en la circunscripción electoral del departamento del Meta resulta jurídicamente viable, en tanto la sumatoria de sus porcentajes de votación no supera el límite del quince por ciento (15%) previsto en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política.

**En efecto, el Pacto Histórico, al surgir como resultado de un proceso de fusión de colectividades, constituye un nuevo sujeto político que parte de un porcentaje equivalente a cero por ciento (0%), toda vez que nunca ha sido sometido al escrutinio ciudadano en las urnas. Por su parte, el partido MAIS registra un porcentaje de 3,55% conforme a la tesis jurisprudencial del Consejo de Estado, o de 4,183% conforme a la tesis administrativa del Consejo Nacional Electoral.** En cualquiera de los dos escenarios, la sumatoria se mantiene muy por debajo del umbral constitucional.

En consecuencia, la solicitud de revocatoria de la inscripción, presentada bajo el argumento de una presunta infracción del artículo 262 de la Constitución Política por supuestamente superar el porcentaje de votación permitido para conformar una coalición en la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento del Meta, no está llamada a prosperar. Por lo tanto, se solicita al honorable Consejo Nacional Electoral que la desestime.

## **2.9. Falta de legitimación en la causa por activa y desnaturalización del objeto de la acción pública**

De manera preliminar, resulta jurídicamente indispensable examinar la legitimación en la causa por activa de los señores HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO y SAÚL VILLAR JIMÉNEZ, quienes han promovido la solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN actuando en nombre propio, en ejercicio de una acción de naturaleza pública, y no en calidad de apoderados, representantes legales o mandatarios de la señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTÉS.

De acuerdo con lo expuesto por los propios quejosos, estos no solo solicitan la revocatoria de una inscripción, sino que pretenden que el Consejo Nacional Electoral **ordene directamente la inscripción de la señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTÉS como candidata en un renglón específico de la lista**, bajo el argumento de que habría adquirido un supuesto “pleno derecho constitucional y

legal” derivado de los resultados de la consulta popular interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025. Sin embargo, tal pretensión resulta jurídicamente improcedente, en la medida en que quienes la formulan carecen de legitimación para reclamar, en nombre de un tercero, el reconocimiento o la materialización de un derecho subjetivo individual.

En efecto, si bien el ordenamiento electoral admite la intervención de cualquier ciudadano para poner en conocimiento de la autoridad electoral eventuales irregularidades en el proceso de inscripción de candidaturas, ello no implica que dicha acción pública habilite a los solicitantes para sustituir la voluntad del eventual titular del derecho, ni para actuar oficiosamente en su nombre sin representación, mandato o autorización expresa. Menos aun cuando, como ocurre en el presente caso, la señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTÉS no ha promovido acción alguna orientada a cuestionar su no inscripción ni ha reclamado, por vía administrativa o judicial, la titularidad de un derecho subjetivo a integrar la lista de candidatos.

Por lo tanto, la pretensión de los quejosos en ese sentido, no solo desconoce que el derecho a postular candidatos corresponde exclusivamente a los partidos y movimientos políticos, sino que además incurre en una evidente confusión entre el interés público en la legalidad del proceso electoral y la reclamación de derechos subjetivos ajenos, lo cual desborda el ámbito legítimo de la acción ejercida. El trámite de revocatoria de inscripción no está concebido como un mecanismo para adjudicar derechos individuales ni para imponer, por vía administrativa, la inscripción de una persona determinada en una lista electoral.

Adicionalmente, ordenar la inscripción directa de la señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTÉS implicaría no solo desconocer la autonomía de las organizaciones políticas, sino también atribuir al Consejo Nacional Electoral una competencia que el ordenamiento no le ha conferido, al convertir un procedimiento objetivo de control en un escenario de designación forzada de candidaturas. Esta consecuencia resulta incompatible con los principios de pluralismo político, debido proceso y separación funcional de competencias en materia electoral.

En consecuencia, al actuar en nombre propio y sin representación de la persona cuya inscripción pretenden imponer, los señores HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO y SAÚL VILLAR JIMÉNEZ carecen de legitimación en la causa por activa para formular las pretensiones adicionales planteadas, las cuales, por su naturaleza, deben ser rechazadas o desestimadas por improcedentes, sin que ello impida al Consejo Nacional Electoral pronunciarse, dentro de los estrictos límites constitucionales y legales, sobre la legalidad objetiva de la inscripción cuestionada.

**2.10. Escenario alternativo de solución con fundamento en la buena fe, la confianza legítima y el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011**

Sin perjuicio de las razones expuestas para solicitar la negativa integral de la revocatoria pretendida, y en un ejercicio de ponderación institucional orientado a preservar la participación política, la igualdad electoral y la estabilidad del proceso democrático, resulta jurídicamente viable que el Consejo Nacional Electoral, de considerar procedente algún tipo de ajuste, adopte una solución alternativa y proporcional, compatible con los principios constitucionales de buena fe, confianza legítima y presunción de legalidad.

En este escenario, el CNE podría disponer, de manera excepcional y debidamente motivada, la revocatoria parcial de la inscripción de la lista en cuanto a su conformación como coalición PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO, sin extender dicha decisión a los efectos personales sobre los candidatos ni a la exclusión automática de las organizaciones políticas involucradas del certamen electoral. Tal determinación encontraría sustento en la naturaleza objetiva del control administrativo y permitiría corregir, en caso de estimarse necesario, un eventual vicio de configuración de la coalición, sin sacrificar de manera desproporcionada los derechos de participación política, a nivel de partidos, y a nivel individual, en la persona de los candidatos.

De acuerdo con los principios de buena fe y confianza legítima, resulta particularmente relevante destacar que la inscripción de la lista fue aceptada por la propia Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad competente para verificar, en la etapa de inscripción, la observancia de las reglas legales y estatutarias aplicables. Dicha autoridad contaba con la potestad legal para rechazar la inscripción, amparada en lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, conforme al cual “(...) la solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas”. No obstante, la Registraduría optó por admitir la inscripción, consolidando así una situación jurídica amparada por la presunción de legalidad del acto administrativo.

En ese contexto, el Movimiento Político MAIS, que actuó confiando razonablemente en la validez de la inscripción aceptada por la autoridad electoral y en la regularidad del procedimiento seguido, no puede verse afectado por una consecuencia extrema como la exclusión total del proceso electoral. Por el contrario, atendiendo a la confianza legítima generada y a la ausencia de cualquier conducta dolosa o abusiva, debería ser habilitado para modificar su inscripción y concurrir de manera

independiente, con la posibilidad de reconfigurar y completar su lista de candidatos, conforme a las reglas legales vigentes.

De manera correlativa, y en armonía con el mismo principio de proporcionalidad, el Movimiento Político Pacto Histórico podría ser autorizado para ajustar su lista, incluyendo en reemplazo del candidato JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN a la precandidata que pudo haber obtenido el derecho conforme a los resultados (aisladamente observados) de la consulta popular interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025. Esta solución permitiría restablecer el equilibrio derivado de la consulta, sin desconocer el nuevo contexto político y jurídico generado por las decisiones posteriores válidamente adoptadas.

Esta alternativa encuentra respaldo normativo expreso en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011<sup>10</sup>, que prevé la posibilidad de modificar las listas de candidatos cuando se produzca una revocatoria por causas constitucionales o legales. Su aplicación resulta coherente con una interpretación sistemática del ordenamiento electoral, orientada a evitar sanciones excesivas, preservar la confianza legítima y garantizar la efectividad del derecho fundamental a la participación política.

### 3. PRUEBAS

Con el fin de acreditar los hechos expuestos, sustentar las consideraciones jurídicas desarrolladas y garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa, se solicita al Consejo Nacional Electoral tener como pruebas dentro del presente trámite administrativo las siguientes, todas ellas pertinentes, conducentes y útiles para la resolución de la solicitud de revocatoria de inscripción:

Se aporta como prueba documental el **Acuerdo de Voluntades para Participar en la Consulta Popular Interpartidista del 26 de octubre de 2025**, suscrito por el Movimiento Político Colombia Humana, el Partido Político Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista Colombiano, el Partido Político Unión Patriótica “UP” y Progresistas, y registrado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en el cual constan de manera expresa las reglas que rigieron la consulta, incluyendo la cláusula décima sexta relativa a la posibilidad de conformar coaliciones posteriores y la cláusula segunda con su párrafo sobre la definición política de la cabeza de lista al Senado de la República. Esta prueba resulta fundamental para demostrar la

---

<sup>10</sup> ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.

**Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.** (se destaca)

existencia, validez y fuerza vinculante de los acuerdos de voluntades que amparan la decisión de las organizaciones políticas y la actuación de buena fe de los partidos y movimientos políticos suscriptores.

Solicitar y valorar como prueba el E-6 del Senado, **prueba documental del acto oficial de inscripción de la doctora Carolina Corcho como cabeza de lista del Pacto Histórico, en el marco del mismo proceso de consulta del 26 de octubre de 2025**, con fundamento en el párrafo de la cláusula segunda del acuerdo de voluntades. Esta prueba permite evidenciar la aplicación consistente y previa de cláusulas de similar naturaleza a la aquí cuestionada.

Así mismo, se solicita valorar dicha **inscripción o constancia expedida por la autoridad electoral respecto de la lista al Senado de la República**, en la cual se aceptó la designación de la cabeza de lista en los términos definidos por las organizaciones políticas, demostrando que dicha práctica electoral fue previamente admitida y convalidada por la organización electoral, generando confianza legítima y seguridad jurídica.

Se aporta el **Acuerdo de Coalición Pacto Histórico – Frente Amplio, suscrito entre los partidos y movimientos políticos que participaron en la consulta interpartidista del 26 de octubre de 2025 y el Movimiento Político MAIS**, en el cual consta la decisión colectiva de conformar una nueva coalición y de postular como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta al ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN. Esta prueba acredita que la postulación cuestionada es el resultado de una decisión orgánica y colectiva de las organizaciones políticas, y no de una actuación individual del candidato.

Se solicita valorar la **manifestación escrita de aceptación de la candidatura por parte del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN**, con el fin de acreditar que su actuación se produjo de buena fe, confiando legítimamente en las decisiones adoptadas por los partidos y movimientos políticos dentro del marco de su autonomía constitucional, plasmada en el formulario de inscripción E-6 CAM Departamento del Meta.

Se aporta Resolución No. 2581 del 05 de marzo de 202- **cronograma oficial del proceso electoral correspondiente a las elecciones a celebrarse el 8 de marzo de 2026 (calendario electoral)**, con el propósito de demostrar la secuencia ordenada, pública y transparente de los hitos del proceso, desde la consulta interpartidista hasta la inscripción de candidaturas.

En relación con el hecho sobreviniente de la fusión partidista, se anexa **copia del acto de radicación del proceso de fusión presentado ante el Consejo Nacional Electoral el 13 de junio de 2025 por el Partido Polo Democrático Alternativo, el**



**Partido Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano**, con el fin de acreditar que dicho proceso se encontraba en trámite con anterioridad a la consulta del 26 de octubre de 2025 y era conocido por la autoridad electoral.

Se aporta igualmente **copia de la Resolución No. 09673 de 17 de septiembre de 2025**, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral aceptó de manera condicionada el proceso de fusión entre las mencionadas organizaciones políticas, en cumplimiento de una orden judicial de tutela, demostrando que la transformación del escenario partidario ya había sido formalmente reconocida por la autoridad electoral antes de la inscripción de candidaturas.

Así mismo, se anexa copia de la **decisión del Consejo Nacional Electoral de fecha 3 de diciembre de 2025**, mediante la cual se formalizó la aceptación definitiva de la fusión entre el Partido Unión Patriótica, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, estableciendo que el Movimiento Político Pacto Histórico asumiría la personería jurídica, así como los derechos y obligaciones de las organizaciones que entrarían en disolución y liquidación. Esta prueba resulta determinante para acreditar que, al momento de la inscripción de candidaturas ocurrida el 7 de diciembre de 2025, los partidos que habían participado en la consulta interpartidista ya no existían como sujetos políticos autónomos, configurándose un nuevo escenario jurídico y político.

Se aporta copia de la **Gaceta del Congreso que contiene el informe de ponencia para segundo debate en segunda vuelta del proyecto de reforma constitucional que culminó en el Acto Legislativo 02 de 2015**, con el fin de acreditar los antecedentes legislativos que delimitan el alcance de la facultad del Consejo Nacional Electoral para revocar inscripciones de candidaturas, restringida a supuestos de inhabilidades manifiestas y plenamente probadas.

Adicionalmente, y con el fin de cerrar de manera definitiva cualquier insinuación, explícita o implícita, sobre la eventual existencia de una inhabilidad personal en cabeza del candidato cuya inscripción se controvierte, **se aportan como prueba documental negativa las certificaciones de antecedentes disciplinarios, penales y fiscales** del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, expedidas por las autoridades competentes.

Estas certificaciones acreditan de manera objetiva y fehaciente que el candidato **no registra sanciones disciplinarias vigentes, condenas penales ni hallazgos de responsabilidad fiscal**, descartando así la existencia de causales de inhabilidad previstas en la Constitución o en la ley. La incorporación de esta prueba resulta especialmente relevante en el marco del presente trámite, habida cuenta de que la competencia atribuida al Consejo Nacional Electoral por el numeral 12 del artículo

265 de la Constitución Política se encuentra condicionada a la existencia de **plena prueba** de una inhabilidad manifiesta.

En consecuencia, al no existir antecedente alguno que permita inferir la configuración de una inhabilidad personal, queda demostrado que la solicitud de revocatoria no solo carece de sustento jurídico, sino que pretende trasladar al escenario administrativo una controversia de naturaleza interpretativa y política, ajena por completo a los supuestos excepcionales que habilitan la revocatoria de inscripciones de candidaturas. Esta prueba negativa refuerza, por tanto, la improcedencia de la solicitud formulada y confirma que el debate planteado no se enmarca en los límites constitucionales de la competencia del Consejo Nacional Electoral.

Por último, se aportan formulario E-6CT Departamento Meta, de la inscripción de la Coalición conformada por los partidos Polo Democrático Alternativo, Movimiento Político Colombia Humana, Unión Patriótica “UP” y Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, en las elecciones del 13 de marzo de 2022. Al igual que el acuerdo de coalición programática y política inscrito en ese mismo proceso electoral. Esto para efectos de ser apreciados en la valoración del cargo referente al cumplimiento de los postulados del artículo 262 de la Constitución Política.

#### **4. ANEXOS**

- Poder especial para actuar.
- Acuerdo de Voluntades para participar en la Consulta Popular Interpartidista del 26 de octubre de 2025.
- Acuerdo entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Pacto Histórico: consultas del 26 de octubre de 2025.
- Acuerdo de Coalición Pacto Histórico – Frente Amplio, suscrito entre el fusionado Movimiento Pacto Histórico y el Movimiento Político MAIS.
- Aval expedido por el Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS” a nombre del señor JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN.
- Avals expedidos por el Movimiento Pacto Histórico a nombre de los candidatos MARIA DEL CARMEN MAYUSA DE CRUZ y CÉSAR AUGUSTO DÍAZ MEDINA.
- Resolución No. 2581 del 05 de marzo de 2025- Cronograma oficial del proceso electoral correspondiente a las elecciones a celebrarse el 8 de marzo de 2026- Calendario electoral.
- Copia de la Resolución No. 09673 de 17 de septiembre de 2025 Por medio de la cual se RESUELVE la solicitud de reconocimiento de personería jurídica del MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, como consecuencia de la fusión del MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, el PARTIDO

UNIÓN PATRIÓTICA, el PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, el PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, el PARTIDO PROGRESISTAS y la “Minga Indígena Política y Social”, dentro del expediente identificado con el radicado CNE-E-DG-2025-011455.

- Formulario E - 6CT Departamento del Meta elecciones 13 de marzo de 2022- inscripción de lista de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas presentada por coaliciones de partidos y movimientos políticos con personería jurídica cámara de representantes- Polo Democrático, Colombia Humana, Unión Patriótica y MAIS.
- acuerdo de coalición programática y política entre los partidos y movimientos Polo Democrático Alternativo -PDA-, Alianza Democrática Amplia-ADA-, Movimiento Político Colombia Humana, el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, la Unión Patriótica -UP- y el Partido Comunista Colombiano - PCC- para inscribir lista de candidatos/as a la cámara de representantes por la circunscripción territorial de meta para las elecciones del 13 de marzo de 2022 período constitucional 2022-2026
- Gaceta del Congreso que contiene el informe de ponencia para segundo debate en segunda vuelta del proyecto de reforma constitucional que culminó en el Acto Legislativo 02 de 2015.
- Se aportan como prueba documental negativa las certificaciones de antecedentes disciplinarios, penales y fiscales del señor José Manuel Sandoval.

## 5. CONCLUSIÓN

Por las razones expuestas, se solicita respetuosamente al Consejo Nacional Electoral que deniegue la solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, por no configurarse causal constitucional o legal de inhabilidad plenamente probada, y por encontrarse su inscripción amparada en la autonomía partidaria, en un acuerdo de voluntades válido y en el ejercicio legítimo del derecho de postulación de las organizaciones políticas que integran la coalición Pacto Histórico – Frente Amplio, esto es, el Movimiento Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS.

Comedidamente,



**HUMBERTO RAFAEL MÉNDEZ ROJAS**

Abogado T.P. No. 146.811 del C. S de la J.

[mendezabogadosdp@gmail.com](mailto:mendezabogadosdp@gmail.com)



HUMBERTO MÉNDEZ ROJAS <mendezabogadosdpye@gmail.com>

---

## CONTESTACIÓN- Auto 656 de 22 de diciembre de 2025

---

HUMBERTO MÉNDEZ ROJAS <mendezabogadosdpye@gmail.com>  
Para: <atencionalciudadano@cne.gov.co>, <maria.guerrero@cne.gov.co>

vie, 26 de dic., 5:15 p.m.

Señores

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
M.P. ÁLVARO ECHEVERRYLONDOÑO  
[atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co)  
[maria.guerrero@cne.gov.co](mailto:maria.guerrero@cne.gov.co)

<b>ASUNTO:</b>	Procedimiento de revocatoria de inscripción de candidatura- Auto 656 de 22 de diciembre de 2025
<b>RADICADO:</b>	CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029934
<b>QUEJOSOS:</b>	HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO - SAÚL VILLAR JIMÉNEZ
<b>CANDIDATO:</b>	JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN

Respetados magistrados.

En mi calidad de apoderado especial del señor JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, de acuerdo con poder adjunto, envío contestación del asunto para los fines pertinentes.

Anexo: Memorial de contestación en 33 folios  
Pruebas 184 folios

Atentamente,

**HUMBERTO RAFAEL MÉNDEZ ROJAS**  
Abogado  
Especialista en Derecho Público  
Magíster (c) Administración Pública

CONTESTACIÓN A SOLICITUD REV DE INSCRIPCIÓN-RADICAR.pdf, PODER CON PRESENTACIÓN PERSONAL.pdf, PRUEBAS-ANEXOS.pdf

Señores,

**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
**E. S. D.**

**REF:** Impugnación de la lista inscrita por la coalición del PACTO HISTÓRICO y MAIS, denominada “PACTO HISTORICO -FRENTE AMPLIO” a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento del Meta, período 2026 – 2030.

**HUGO VELASQUEZ JARAMILLO**, mayor y vecino de Villavicencio, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.157.772, actuando en ejercicio de la acción pública electoral, en forma respetuosa me dirijo ante ustedes para presentar escrito de impugnación que deberá seguirse contra la coalición PACTO HISTORICO - FRENTE AMPLIO, formada por los siguientes partidos.

MOVIMIENTO POLITICO PACTO HISTORICO, representado legalmente por el señor GABRIEL BECERRA YAÑEZ.

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL “MAIS”, representado legalmente por el señor LUIS EVELIS ANDRADE.

Impugnación contra la inscripción de candidatos por el PACTO HISTORICO-FRENTE AMPLIO para la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, a fin de que se hagan las siguientes:

**DECLARACIONES**

**PRIMERO:** La señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTES, tiene pleno y absoluto derecho a integrar la lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción electoral del departamento del Meta período 2026 - 2030, en el 3 renglón de los candidatos inscritos por PACTO HISTÓRICO - FRENTE AMPLIO, por haber ocupado ese renglón según la votación obtenida en la consulta popular del 26 de octubre del 2025.

**SEGUNDO:** El señor JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON, no puede formar parte de la lista de candidatos inscritos para las elecciones del 2026 por el partido PACTO HISTORICO - FRENTE AMPLIO, por cuanto no participó en el proceso electoral de dicha organización y porque desde luego no obtuvo ni podía obtener votos.



**TERCERO:** Se ordene la exclusión del señor JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON de la lista de candidatos inscritos por EL PACTO HISTORICO - FRENTE AMPLIO, a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta.

**CUARTO:** Se ordene en consecuencia la inscripción de la señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTES, como candidata del PACTO HISTÓRICO- FRENTE AMPLIO, en el renglón 3 de la lista por cuanto obtuvo un total de 4.051 votos en esa elección, adquiriendo así pleno derecho constitucional y legal a participar en las elecciones para la Cámara de Representantes.

### HECHOS

**PRIMERO:** EL PACTO HISTOTICO, es una organización política reconocida por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, y la señora MARTHA CECILIA GARZÓN CORTES es militante del mismo con una trayectoria política reconocida públicamente, víctima del conflicto armado, lo que de por si dice de su calidad de pertenencia a esa agrupación política.

**SEGUNDO:** La condición de militante llevó a la señora MARTHA CECILIA GARZON CORTES, a participar en las elecciones para la Cámara de Representantes por el departamento del Meta, por su partido PACTO HISTORICO, el cual había decidido en aras de la democracia interna, realizar consultas populares en todo el territorio nacional, que fueron solicitadas y dispuestas por la Organización electoral, con miras a conformar sus listas, y para tal fin la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizó la consulta que se realizó el día 26 de Octubre del presente año.

**TERCERO:** Los resultados de la consulta en el departamento del Meta, una vez se efectuó el escrutinio, fueron los siguientes:

**PARTIDO - VOTOS POR LISTAS**

00051	ORGANIZACIÓN POLÍTICA	
003	MARIA DEL CARMEN MAYUSA CRUZ	13.885
002	CESAR AUGUSTO DIAZ MEDINA	5.328
009	MARTHA CECILIA GARZON CORTES	4.051
004	CRISTIAN ANDRES ROMERO GONZALEZ	3.449
001	CRHISTIAN ANDRES ZAMORA MACHUCA	2.917
011	CARLOS ARIEL LADINO FAJARDO	2.834
010	JAZMIN CECILIA MARTINEZ SILVA	2.644
005	JUAN MANUEL OROZCO PINEDA	2.026
006	TULIA ROSA PERILLA SANCHEZ	1.608
013	JULIO MARTINEZ TAUTIVA	1.282
	TOTAL DEL PARTIDO	40.024

TOTAL VOTOS POR PARTIDOS Y CANDIDATOS	40.024
---------------------------------------	--------

**CUARTO:** Como se observa MARHA CECILIA GARZÓN CORTES, ocupó el tercer lugar en la votación de esa consulta, lo que le da el **derecho a ser inscrita y eventualmente elegida** por la colectividad que la inscribió para la consulta.

**QUINTO:** La señora MARHA CECILIA GARZÓN CORTES. Estaba presta a inscribirse y jurar como candidata, cuando se encontró con la sorpresa de que en su lugar el partido había inscrito el nombre de JOSE MANUEL SANDOVAL GARZÓN, mediante una coalición entre su partido y el Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais” suscrito el día 5 de diciembre del 2025, es decir luego de efectuada la consulta.

**SEXTO:** JOSE MANUEL SANDOVAL GARZÓN nunca se inscribió ni participó en la consulta que el Pacto Histórico y la Registraduría Nacional llevaron a cabo el día 26 de octubre del 2025, por lo cual su inscripción **es ilegal, constituye un posible delito de fraude procesal** porque hizo incurrir en error a la organización electoral y hay un ostensible **delito de falsedad** al otorgar un aval a quien no participó en esa consulta.

**SEPTIMO:** La coalición Pacto Histórico, Mais, no podía desconocer los derechos legales de la señora MARTHA CECILIA GARZON CORTES, e incluso en el texto del acuerdo, se estableció “**la presente coalición respeta el acuerdo de consulta interpartidista del Pacto histórico y el Movimiento Político Colombia Humana desarrollado el 26 de Octubre** denotando así el conocimiento de los derechos de la candidata excluida, por una acuerdo que incurre en la absurda tesis de que dos particulares podrían derogar la ley 1475.

## **NORMAS VIOLADAS**

**Constitución Política: Artículos 58, 40 y 108**

**Legales: Ley 1475 del 2011**

**Ley 130 de 1994**

## **FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES**

La Constitución Política de Colombia en su artículo 40 consagra como derecho fundamental la participación en la conformación del poder político; es el desarrollo del antiguo principio liberal del derecho a elegir y ser elegido, como fundamentos constitutivos de la democracia participativa e inclusiva.

Para la garantía de los derechos políticos, la misma carta política dio rango constitucional a los partidos políticos reconociendo su rol en la conformación del poder político al tiempo que se desarrolló todo el sistema electoral como articulador de la participación política.

Los partidos políticos además de su nivel constitucional fueron reglamentados por la ley 130 de 1994 que impone a los partidos la consagración estatutaria de la democracia interna y el reconocimiento de los derechos de sus afiliados o militantes.

El artículo 7 de la ley 1475 del 2011, establece:

**“Obligatoriedad de los resultados, El resultado de las consultas será obligatorio, para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas.**

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos, movimientos que las convocan. Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos, movimientos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. La inobservancia de este precepto será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye diferente al elegido de la

consulta. La inscripción, en todo caso a la solicitud del candidato seleccionado, se hará a nombre de los partidos, movimientos o coaliciones que realizaron la consulta, aunque no suscriban el formulario de solicitud de inscripción”

La señora MARHA CECILIA GARZÓN CORTES debió incurrir en los gastos propios del trajín de la campaña, además del esfuerzo de una campaña que fructífera le daba derecho a formar parte de la lista y al tenor del artículo 58 de la Constitución Política **un derecho adquirido** que además está dentro de los derechos políticos dada la naturaleza de sus expectativas, por ende el acuerdo de coalición entre dos fuerzas políticas, de fecha diciembre 5 del 2025, en que el **Pacto histórico**, actor de la consulta del 26 de Octubre, y el **Movimiento Alternativo Indígena y Social “Mais”** no podía desconocer los derechos de la aspirante MARTHA CECILIA GARZÓN CORTES, máxime desconociendo el derecho al debido proceso, razón por la cual ella hubo de expedir un comunicado a la Opinión Pública, denunciando la arbitrariedad.

Es un principio lógico del derecho, según el cual **dos personas no pueden decidir por una tercera**. También es de lógica jurídica que los particulares **no pueden derogar las leyes**. No pueden dos partidos, con posterioridad a una consulta cuyos resultados son obligatorios por mandato de la ley, mediante un convenio privado (coalición) derogar la ley 1475, que además es **ley estatutaria**.

La gravedad del incumplimiento de la consulta es de tal magnitud que el artículo 7 de la ley 1475 inciso final, prevé consecuencias económicas para el partido que incumpla, los resultados de las consultas.

El artículo 108 de la Constitución Política establece que toda inscripción de candidatos inhabilitados (y acá estamos frente a una causal de inhabilidad electoral) conlleva la revocación por parte del Consejo Nacional Electoral.

## PRUEBAS

1. Resultados de la votación para la Consulta del Pacto Histórico del Meta, expedido por la Registraduría. Se anexa
2. Comunicado de la candidata MARTHA CECILIA GARZON CORTES denunciando la arbitrariedad y la violación de sus derechos legales al pretender excluirla de la lista del pacto histórico.
3. Acuerdo de coalición de fecha 5 de diciembre **“a posteriori”** entre los partidos Pacto Histórico y Mais.

HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO  
ABOGADO  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

## NOTIFICACIONES

### **Demandados:**

Movimiento Político Pacto Histórico: [notificacionesjudiciales@pactohistorico.co](mailto:notificacionesjudiciales@pactohistorico.co)  
Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS: [juridica@mais.com.co](mailto:juridica@mais.com.co)  
[movimientomais@mais.com.co](mailto:movimientomais@mais.com.co)

Para citar a los integrantes de la lista del pacto histórico solicitó se acuda al correo que ellos indicaron como dato privado al momento en que diligenciaron su inscripción.

El suscripto impugnante recibe notificaciones en el Edificio Comité de Ganaderos: Calle 40 No. 32- 50 centro, oficina 608 de Villavicencio o al correo electrónico: [hugovelasquezmeta@hotmail.com](mailto:hugovelasquezmeta@hotmail.com)

Atentamente,



**HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO**  
**C.C. 17.157.772 de Bogotá**



Bogotá, D.C., 6 de febrero de 2026

Honorables Magistrados  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
M.P. MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZABAL  
[atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co)  
[juan.rojas@cne.gov.co](mailto:juan.rojas@cne.gov.co)

REFERENCIA:	Procedimiento de revocatoria de inscripción de candidatura- Auto 656 de 22 de diciembre de 2025
RADICADO:	CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029934
ASUNTO:	Recurso de reposición contra la Resolución No. 0844 de 2026
QUEJOSOS:	HUGO VELÁSQUEZ JARAMILLO - SAÚL VILLAR JIMÉNEZ
CANDIDATO:	JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN

Respetados señores.

Yo, **Humberto Rafael Méndez Rojas**, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado judicial del ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN**, respetuosamente interpongo **recurso de reposición** contra la **Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026**, mediante la cual se revocó su inscripción como candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Meta, con fundamento en las razones de hecho y de derecho que se exponen a continuación.

I. Oportunidad y procedencia del recurso

El presente recurso se interpone dentro del término legal concedido dentro de la resolución recurrida, en tanto el acto administrativo fue notificado de manera formal con posterioridad a su adopción en Sala Plena, habilitando plenamente el ejercicio del derecho de contradicción.

II. Antecedentes

1.1. El día 5 de febrero en Audiencia pública celebrada en sala permanente del Consejo Nacional Electoral se adoptó la decisión dentro del radicado CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029934, notificando como resolutive del caso, lo siguiente<sup>1</sup>:

RESUELVE:

**“ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, en el marco de la coalición denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse**

<sup>1</sup> Lectura de la parte resolutive de la Resolución 0844 de 2026, realizada por la secretaria general en sala plena del CNE 1:37:34 a 1:41:01 visible en el siguiente enlace:  
<https://www.youtube.com/watch?v=6mHl7Pcq0Fk>

la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

**PARÁGRAFO PRIMERO: ADVERTIR** a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones producto de la presente decisión deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integran la coalición, de manera que como consecuencia de la revocatoria de listas inscritas de dicha modalidad, estas puedan proceder a la inscripción individual de sus listas en los términos y dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011”.

- 1.2. El día de hoy, 6 de febrero, se me remitió la referida resolución, vía correo electrónico, a las 7:34 a.m., con plazo limite para sustentar el recurso hasta las 05:00 p.m.
- 1.3. Extrañamente, se observa una incongruencia entre la resolución leída en audiencia pública en la que se adoptó y notificó la decisión, en el sentido transcrito en el numeral 1.1 del presente acápite; con la decisión dispuesta en la resolución remitida a través de correo, la cual dispone:

**“(…) PARÁGRAFO PRIMERO:** La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el caso en que la referida agrupación política relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer la inscripción revocada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025. (...)”

- 1.4. Manifestación la anterior, igualmente ratificada por los magistrados Benjamín Ortiz<sup>2</sup> y Alba Lucía Velasquez<sup>3</sup>, quienes confirmaron a la audiencia presente el sentido y/o alcance de las decisiones que se estaban adoptando en sala plena en ese momento<sup>4</sup>.
- 1.5. Que con la modificación del contenido del párrafo entre lo leído en la audiencia pública y lo notificado por medio de correo electrónico no solo se afecta el derecho al debido proceso de mi defendido, sino sustancialmente su derecho a la participación política, o lo que es lo mismo, el derecho a ser elegido.

<sup>2</sup> Pronunciamento del magistrado Ortiz, visible a partir del minuto 47:37 al 49:18 en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/live/pkqyGdsDTzA?si=vDw00fyHz7w3luY>

<sup>3</sup> Pronunciamento de la magistrada Alba Lucía Velasquez, visible a partir de 1:47:30 a 1:48:15 en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=6mHI7Pcq0Fk>

### III. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

#### 3.2. Cargo principal: vulneración del debido proceso por modificación sustancial entre lo decidido en audiencia pública y lo consignado en el acto administrativo notificado

De acuerdo con los principios de publicidad, transparencia y debido proceso que rigen la función administrativa, las decisiones adoptadas por las autoridades deben guardar estricta coherencia entre lo resuelto en audiencia pública y lo finalmente consignado

en el acto administrativo que se notifica a los sujetos procesales. Sin embargo, en el presente caso, dicha exigencia fue abiertamente desconocida.

En efecto, durante la audiencia pública de Sala Plena celebrada el **5 de febrero de 2026**, al momento de darse lectura a la parte resolutive de la decisión adoptada dentro de los expedientes de la referencia, la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral leyó de manera expresa el párrafo primero del artículo primero de la Resolución No. 0844 de 2026 en los siguientes términos:

**“PARÁGRAFO:** Advertir a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones producto de la presente decisión deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integran la coalición, de manera que como consecuencia de la revocatoria de listas inscritas de dicha modalidad, estas puedan proceder a la inscripción individual de sus listas en los términos y dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011”. (se destaca en lo pertinente)

Esta manifestación pública, realizada en el escenario institucional de máxima publicidad y solemnidad de la Corporación, generó una expectativa legítima y jurídicamente protegida en los sujetos procesales, particularmente en el candidato afectado, en el sentido de que la consecuencia jurídica de la decisión permitiría a las organizaciones políticas que integran la coalición ejercer, de manera autónoma, la facultad de inscripción individual de listas, conforme al marco legal vigente.

No obstante, al momento de la **notificación formal y física** de la Resolución No. 0844 de 2026, se constató una **modificación sustancial e injustificada del contenido decisorio**, en la medida en que el párrafo leído en audiencia pública fue reemplazado por dos párrafos de contenido materialmente distinto, que restringen de manera significativa el alcance de la decisión originalmente anunciada.

En particular, el párrafo primero del acto notificado se limitó a señalar que la “agrupación inscriptora” podría modificar su lista dentro del término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, mientras que el párrafo segundo condicionó dicha modificación a que se realizara estrictamente conforme a los resultados de la consulta celebrada el 26 de octubre de 2025. Este

condicionamiento adicional no fue anunciado, debatido ni decidido en los términos expuestos durante la audiencia pública, lo cual configura una clara ruptura entre la decisión públicamente adoptada y el acto administrativo finalmente expedido.

### **3.3. Improcedencia jurídica de la pretendida retroacción de la actuación administrativa y de la “subsanción” mediante nueva lectura o notificación en audiencia pública**

De manera posterior a la advertencia del yerro sustancial que afecta la Resolución No. 0844 de 2026, consistente en la contradicción entre lo manifestado públicamente en audiencia y el contenido finalmente consignado en los párrafos primero y segundo del acto administrativo notificado en físico, la autoridad electoral ha considerado como eventual alternativa la posibilidad de retrotraer la actuación administrativa y proceder a una nueva lectura o notificación en audiencia pública del texto de la resolución finalmente expedida.

Sin embargo, dicha tesis resulta jurídicamente improcedente y contraria al régimen constitucional y legal que gobierna la función administrativa. En efecto, una vez un acto administrativo ha sido válidamente expedido y notificado, este se perfecciona, produce efectos jurídicos y queda amparado por la presunción de legalidad, vinculando tanto a la administración como a los administrados. En ese contexto, la autoridad carece de competencia para modificar, corregir o “subsancionar” su contenido material mediante actuaciones informales o atípicas, como lo sería una nueva lectura en audiencia pública, por fuera de los mecanismos expresamente previstos en la ley.

De acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la única vía jurídicamente admisible para dejar sin efectos, modificar o corregir un acto administrativo que adolece de vicios sustanciales es la revocatoria directa, en los estrictos términos establecidos en los artículos 93 y siguientes. Este mecanismo no constituye una facultad discrecional de simple corrección, sino una actuación administrativa autónoma, sujeta a exigencias materiales y procedimentales específicas, entre ellas la motivación reforzada y, cuando el acto ha creado o reconocido una situación jurídica particular y concreta, el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho.

Por lo tanto, pretender “retrotraer” la actuación y subsanar el yerro identificado mediante una nueva lectura o notificación en audiencia pública equivale, en la práctica, a modificar ex post el contenido decisorio del acto administrativo, eludiendo deliberadamente el procedimiento legal de la revocatoria directa. Una actuación de esta naturaleza no solo carecería de sustento normativo, sino que vulneraría abiertamente los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, buena fe y confianza legítima que deben regir toda actuación administrativa, con especial intensidad en materia electoral.

Debe resaltarse que la confianza legítima del candidato y de las organizaciones políticas involucradas se estructuró tanto a partir de lo expresamente manifestado por la autoridad en audiencia pública como del contenido formalmente notificado del acto administrativo. La administración no puede alterar unilateralmente las reglas de juego ni los efectos jurídicos de su propia decisión, so pretexto de una supuesta corrección, sin desconocer de manera grave los derechos fundamentales a la participación política y a ser elegido.

Adicionalmente, una actuación orientada a modificar o redefinir los efectos de un acto administrativo ya perfeccionado, sin acudir al procedimiento de revocatoria directa, podría configurar una extralimitación de funciones, en tanto la autoridad estaría ejerciendo competencias no atribuidas por la Constitución ni por la ley. Ello comprometería seriamente la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos intervinientes, conforme a los deberes funcionales de sujeción estricta al ordenamiento jurídico y respeto por el debido proceso administrativo.

Más aún, en un escenario de especial gravedad, la adopción consciente de decisiones manifiestamente contrarias a la ley, encaminadas a alterar los efectos jurídicos de un acto administrativo plenamente vigente, podría dar lugar a responsabilidades de carácter penal, particularmente por la posible configuración del delito de prevaricato por acción, al proferirse o ejecutarse una determinación ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico. Este riesgo se intensifica cuando la actuación tiene incidencia directa en el ejercicio de derechos políticos fundamentales y en el desarrollo regular del proceso electoral.

Por consiguiente, lejos de subsanar la irregularidad advertida, la tesis de la retroacción o de la nueva lectura en audiencia pública profundizaría las vulneraciones ya configuradas, agravando la afectación al debido proceso y a la participación política del recurrente. En consecuencia, la única respuesta jurídicamente compatible con el orden constitucional es reconocer el yerro advertido y resolver el presente recurso conforme a derecho, dejando sin efectos las disposiciones viciadas de la Resolución No. 0844 de 2026, o acudiendo, si así se estimara necesario, a los mecanismos legales expresamente previstos para la revocatoria directa del acto administrativo, con pleno respeto de las garantías constitucionales involucradas.

#### **IV. SOLICITUD PROCESAL ESPECIAL**

Por las razones expuestas, respetuosamente solicito al **Consejo Nacional Electoral** que, al resolver el presente recurso de reposición, **revoque o, en su defecto, modifique la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026 remitida vía correo electrónico del seis (6) de febrero de 2026**, en el sentido de restablecer la coherencia entre lo decidido en audiencia pública del 5 de febrero de 2026, (la cual



reconozco como únicamente válida) y lo consignado en el acto administrativo, garantizando plenamente los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política y a la confianza legítima del candidato afectado.

Subsidiariamente, solicito que se declare la nulidad parcial de los párrafos primero y segundo del artículo primero del acto recurrido, en cuanto no reflejan fielmente la decisión anunciada en audiencia pública y fueron introducidos sin observancia de las garantías mínimas del procedimiento administrativo.

**V. PRUEBAS:**

Ténganse en cuenta las obrantes en el expediente, de manera especial, las grabaciones de la audiencia pública de decisión del 5 de febrero de 2026.

Atentamente,



**HUMBERTO RAFAEL MÉNDEZ ROJAS**

Abogado apoderado

C.C. No.72.267.514

T.P. No. 146.811 del C. S de la J.

Correo electrónico: [mendezabogadosdppe@gmail.com](mailto:mendezabogadosdppe@gmail.com)

**PROCURADURIA SEXTA JUDICIAL II**

Bogotá, 07 de febrero de 2026

Honorable Magistrada  
**MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
La Ciudad

**REF: Sustentación Recurso de reposición Rad. No. CNE-E-DG-CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935** – Solicitud de revocatoria JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN, candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción del Meta, por la Coalición “Pacto Histórico – Frente Amplio”

De manera atenta y en virtud de la función de intervención que me fue asignada mediante Resolución No. 379 del 18 de diciembre de 2025<sup>1</sup>, en el marco de las actuaciones de revocatoria de inscripción de candidatos al Congreso de la República 2026-2030, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN dentro del trámite de la referencia.

**I.- Antecedentes:**

**1.1.-** Mediante correo electrónico remitido a las 4:51 p.m. del día 05 de febrero de 2025, se nos remite citación a la reanudación de la audiencia pública en la cual se incluye en el orden del día el trámite de la referencia.

**1.2.-** El día 05 de febrero de 2026 fue notificada en audiencia pública la Resolución 844 del 05 de febrero de 2026 *“Por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN** como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**.”*

**1.3.-** Sin perjuicio de que se notificó la referida Resolución 844 de 2026, sin que previamente se nos hubiere compartido el expediente o notificado traslado alguno, bajo el entendido que el trámite venía de otro despacho, no se manifestó reparo alguno.

**1.4.-** El contenido de la referida Resolución 844 de 2026 fue puesta en conocimiento mediante correo electrónico del día 06 de febrero de 2026, en horas de la mañana.

**1.5.-** El día 06 de febrero de 2026, al inicio de la audiencia pública citada para las 11:00 a.m., se puso de presente por intervinientes en el trámite y el Ministerio Público que el contenido de la resolución remitida por correo electrónico no correspondía con lo leído y notificado en la audiencia pública del 05 de febrero de 2026.

**1.7.-** El día de ayer, 06 de febrero de 2026, ante este hecho sobreviniente, que no podía advertirse en la audiencia del 05 de febrero de 2026, se interpuso por parte del Ministerio Público Recurso de Reposición contra la citada Resolución 844 del 05 de febrero de 2026 y en subsidio nulidad de lo actuado, que a la fecha no han sido resueltos.

<sup>1</sup>Resolución 379 del 18 de diciembre de 2025 *“Por medio de la cual se asigna una función especial de intervención en las actuaciones administrativas relacionadas con la revocatoria de inscripción de candidaturas que adelante el Consejo Nacional Electoral, con ocasión de las elecciones a Congreso de la República, 2026- 2030.*

**PROCURADURIA SEXTA JUDICIAL II**

**1.8.-** Mediante correo electrónico del día de ayer, 06 de febrero de 2026, en horas de la tarde, se nos remite citación para audiencia pública agendada para las 5:00 p.m. de este mismo día, en la cual se incluye en el orden del día el trámite de la referencia.

**1.9.-** En la audiencia pública del día de ayer, 06 de febrero de 2026, en horas de la tarde, se notifica la Resolución 893 del 06 de febrero de 2026 “Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**”, en la cual se resolvió:

“(…)

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** CORREGIR la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026 “por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935”.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** NOTIFICAR en estrados la Resolución 0844 de 2026 “por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935”, cuya parte resolutive señala:

“**ARTÍCULO PRIMERO:** **REVOCAR** la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, en el marco de la coalición denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el caso en que la referida agrupación política relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer la inscripción revocada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** **ADOPCIÓN Y NOTIFICACIÓN.** La presente decisión es **ADOPTADA Y NOTIFICADA EN ESTRADOS** en Audiencia Pública.

**ARTÍCULO TERCERO:** **RECURSO.** Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, y deberá sustentarse a través del correo electrónico [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) y [juan.rojas@cne.gov.co](mailto:juan.rojas@cne.gov.co) hasta antes de las 5:00 pm del primer día hábil siguiente a la notificación.

**ARTÍCULO CUARTO:** **COPIAS.** Remitir copia íntegra de la decisión a los intervinientes en la actuación, al Ministerio Público y a la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Corporación, a los siguientes correos electrónicos:

“(…)

**ARTÍCULO TERCERO:** **ADOPCIÓN Y NOTIFICACIÓN.** La presente decisión es **ADOPTADA Y NOTIFICADA EN ESTRADOS** en Audiencia Pública.

**PROCURADURIA SEXTA JUDICIAL II**

**ARTÍCULO CUARTO: RECURSO.** *Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, y deberá sustentarse a través del correo electrónico [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) y [juan.rojas@cne.gov.co](mailto:juan.rojas@cne.gov.co) hasta antes de las 5:00 pm del primer día calendario siguiente a la notificación. (...).*

**1.10.-** El día de hoy, 07 de febrero de 2026, se nos corre traslado de los recursos de reposición y nulidades de los demás intervinientes, frente a la Resolución 893 del 06 de febrero de 2026.

**II.- Consideraciones del Ministerio Público:**

**2.1.- Oportunidad del Recurso de Reposición:**

El artículo cuarto de la parte resolutive de la Resolución 893 de 2026, dispone lo siguiente:

**“ARTÍCULO CUARTO: RECURSO.** *Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, y deberá sustentarse a través del correo electrónico [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) y [juan.rojas@cne.gov.co](mailto:juan.rojas@cne.gov.co) hasta antes de las 5:00 pm del primer día calendario siguiente a la notificación. (...).*

El día de ayer, 06 de febrero de 2026, en la respectiva audiencia pública, la suscrita, en calidad de Agente del Ministerio Público, interpuso oportunamente el recurso de reposición que hoy se sustenta dentro del plazo otorgado hasta las 5:00 p.m. del día de hoy, 07 de febrero de 2026.

**2.2. Fundamentos del Recurso:**

En primer término cabe recordar que la irregularidad en la notificación que el CNE corrige a través de la Resolución 893 que hoy se impugna, se predica de la Resolución 844 del 05 de febrero de 2026, cuya parte resolutive fue leída en audiencia del mismo 05 de febrero, incluyendo un **parágrafo** en el que se le advierte a la Registraduría Nacional del Estado Civil que debe garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades que integran la coalición, permitiéndoles que puedan proceder a la inscripción individual de sus listas, como consecuencia de la revocatoria de listas inscritas. Esto dentro del término del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011<sup>2</sup>.

Dicho parágrafo leído en audiencia daba la posibilidad al partido o agrupación política MAIS a la que pertenece el candidato cuya inscripción fue revocada de inscribir candidatos de manera individual y al candidato *per se* presentarse de manera directa por medio de la agrupación mencionada. Esto, hasta un mes antes de las elecciones, lo que resulta diferente a los párrafos que fueron incluidos en el contenido escrito de la Resolución 844 del 05 de febrero cuyo texto fue remitido por un funcionario del CNE, vía correo electrónico, el 06 de febrero de 2026 en horas de la mañana y que rezan:

---

<sup>2</sup> **ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES.** La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones. Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor del inscrito en su reemplazo.

La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente.

**PROCURADURIA SEXTA JUDICIAL II**

**“ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR** la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, en el marco de la coalición denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el caso en que la referida agrupación política relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer la inscripción revocada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025.”

Como puede verse, se trató de un cambio material en la decisión adoptada por el CNE, que en principio, no sería de carácter procedimental atribuible a la notificación, sino que se trata de un aspecto de fondo que no podría corregirse con fundamento en el artículo 41 del CPACA cuyo texto es el siguiente:

**“ARTÍCULO 41. CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.** La autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla

Como puede verse en el presente caso no se cumplen los presupuestos para que proceda la corrección con fundamento en el citado artículo, y lo procedente era rehacer la actuación desde el momento en que se cometió el yerro, esto es desde el momento de la adopción de la decisión, para garantizar el debido proceso.

### **2.3.- Solicitud**

Con fundamento en lo expuesto se le solicita al Consejo Nacional Electoral, revocar la decisión adoptada mediante Resolución 893 de 2026 “Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**”, por encontrarse fundamentada en una disposición normativa que no resulta aplicable y en su lugar adoptar las decisiones de fondo que en derecho correspondan y que garanticen los derechos fundamentales y el ejercicio de los derechos políticos y participación ciudadana, frente a los recursos y/o nulidades interpuestas que se encuentra pendientes.

De manera subsidiaria, se coadyuva la solicitud de nulidad impetrada el día de ayer en audiencia pública, en garantía del debido proceso -Artículo 29 Superior y 3º CPACA-.

Con todo respeto, me suscribo



**PAOLA GARCÍA ARISTIZÁBAL**

Procuradora Sexta Judicial II – Conciliación Asuntos Administrativos



**RESOLUCIÓN SALA PLENA No. 0789 DE 2026**  
**(04 de febrero)**

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

**EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 265 de la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011, y con base en los siguientes:

**1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS**

**1.1.** El día trece (13) de enero de dos mil veintiséis (2026), el ciudadano NICOLÁS FARFÁN NAMÉN, a través de escrito, entre otras, presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la candidaturas de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), en atención al incumplimiento de los resultados de las consultas realizadas el día veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

**1.2.** Por reparto interno de negocios realizado el dieciséis (16) de enero de dos mil veintiséis (2026), le correspondió al Despacho del Suscrito, conocer del asunto bajo el radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

**1.3.** El día veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026), a través del Auto No. 042, se avocó conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidaturas de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), en atención al incumplimiento de los resultados de las consultas realizadas el día veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

**1.4.** El día veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026), el Director de Gestión Electoral, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dio respuesta a lo requerido a través del Auto No. 042 del veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026).

**1.5.** El día veintiocho (28) de enero de dos mil veintiséis (2026), en atención al artículo noveno del Auto No. 042 del veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026), se corrió traslado a las partes procesales para que allegaran consideraciones adicionales si lo consideraban pertinente

*Geel*  
*V*

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

**1.6.** El día veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026), a través del abono No. CNE-E-DG-2026-003440, el señor AUGUSTO HERNÁNDEZ VIDAL, en calidad de Procurador 120 Judicial II Administrativo de Bogotá, remitió concepto acerca de los hechos objeto de controversia.

**1.7.** El día dos (02) de febrero de dos mil veintiséis (2026), a través del abono con Radicado No. CNE-E-DG-2026-004008, el señor NICOLÁS FARFÁN NAMÉN, en calidad de solicitante, remitió escrito solicitando información acerca del expediente de Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220, informando que no había recibido comunicación alguna, acerca del presente procedimiento administrativo.

**1.8.** El día dos (02) de febrero de dos mil veintiséis (2026), el Despacho sustanciador expidió el Auto No. 68, por medio del cual corrigió la irregularidad procesal advertida por el señor NICOLÁS FARFÁN NAMÉN y ordenó correr traslado para que el precitado solicitante presentara las consideraciones que considere pertinentes.

**1.9.** El día tres (03) de enero de dos mil veintiséis (2026), el señor NICOLÁS FARFÁN NAMÉN, remitió escrito de consideraciones, en atención al traslado realizado el día dos (02) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

## 2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### 2.1. DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

#### 2.1.1. Constitución Política:

*"(...) **ARTÍCULO 265.** Modificado por el Acto Legislativo 1 de 2009. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:*

*(...)*

*6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.*

*(...)*

*12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incurso en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos.*

*(...)*

*14. Las demás que le confiera la ley."*

*(...)*

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

## 2.2. NORMAS APLICABLES

### 2.2.1. Ley 1475 de 2011<sup>1</sup>

"(...)

**ARTÍCULO 7o. OBLIGATORIEDAD DE LOS RESULTADOS.** El resultado de las consultas será obligatorio para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas.

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan. Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado. La inobservancia de este precepto será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al elegido en la consulta. La inscripción, en todo caso, a solicitud del candidato seleccionado, se hará a nombre de los partidos, movimientos o coaliciones que realizaron la consulta, aunque no suscriban el formulario de solicitud de inscripción.

En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos. (...)

"(...) **ARTÍCULO 28. Inscripción de candidatos.** Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta - exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas.

(...)"

**"ARTÍCULO 31. Modificación de las inscripciones.** La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta

<sup>1</sup> Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones.

006



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.

(...)"

**"Artículo 32. Aceptación o rechazo de inscripciones.** La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.

La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley."

### 3. ACERVO PROBATORIO

Obra y se tiene como material probatorio dentro del expediente lo siguiente:

#### 3.1. ALLEGADAS POR EL SOLICITANTE NICOLÁS FARFÁN NAMÉN.

**3.1.1.** Copia de las certificaciones de entrega de los resultados de la consulta realizada el día veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

**3.1.2.** Copia de los formularios de inscripción de los candidatos inscritos por las coaliciones del Pacto Histórico en las elecciones del Congreso de la República del año dos mil veintidós (2022).

**3.1.3.** Copia de los formularios de inscripción de los candidatos inscritos por el Movimiento Político Pacto Histórico en las elecciones del Congreso de la República del año dos mil veintiséis (2026).

**3.1.4.** Copia de la Resolución No. 2581 del cinco de marzo de dos mil veinticinco (2025), por medio de la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República, que se realizarán el ocho (08) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

**3.1.5.** Copia del acuerdo entra la Registraduría Nacional del Estado Civil u el Pacto Histórico para las consultas realizadas el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

**3.1.6.** Acuerdo realizado por el Pacto Histórico para las consultas realizadas el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

**3.1.7.** Captura de pantalla de remisión de solicitud a los partidos UNIÓN PATRIOTICA, PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO, MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, por parte del señor NICOLÁS FARFÁN NAMÉN, respecto de los resultados de las consultas realizadas el día veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

**3.1.8.** Copia de la Resolución No. 7958 del ocho (08) de julio de dos mil veinticinco (2025), por medio del cual se establece el calendario electoral para la realización de las consultas populares internas o interpartidistas para la toma de decisiones o escogencia de candidatos de los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos, realizada el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

### **3.2. CONSULTADAS POR EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.**

**3.2.1.** Formularios de inscripción y sus respectivos anexos de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

### **3.3. ALLEGADAS POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.**

**3.3.1.** Copia del acta No. 02 de la comisión escrutadora nacional del PACTO HISTÓRICO de la consulta interpartidista de Senado y Cámara de la República, de las consultas realizadas el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

## **4. CONSIDERACIONES**

### **4.1. DE LA REVOCATORIA DE INSCRIPCIONES POR PARTE DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.**

El Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad de la Organización Electoral y en virtud de las facultades constitucionales que le han sido otorgadas, es competente para velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y por el buen desarrollo de todos los procesos electorales en condiciones de plenas garantías, conforme a la Constitución y a la Ley.

Como parte de las múltiples funciones que ejerce el Consejo Nacional Electoral en garantía de la transparencia de los procesos electorales, el artículo 108 y, de manera específica, el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política, le atribuyen la competencia para decidir las solicitudes de revocatoria de la inscripción de candidatos a corporaciones públicas o a cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que estos se encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, y en concordancia con el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política, habrá lugar a la revocatoria de la inscripción de candidaturas por causas constitucionales o legales, o cuando se configure una inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, caso en el cual podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.

No obstante, dicha atribución no puede ejercerse de manera arbitraria ni extemporánea, sino que debe estar sujeta a los postulados constitucionales y al calendario electoral que fije la

0.8  
A



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

Registraduría Nacional del Estado Civil para la respectiva elección. En consecuencia, la Corporación deberá adelantar procesos breves y sumarios que garanticen, en todo momento, el debido proceso y la protección de los derechos políticos de quienes aspiren a desempeñar cargos de elección popular.

#### 4.2. DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN.

Si bien existe un reconocimiento de orden constitucional y legal de revocar inscripciones por distintas causales, en nuestro ordenamiento jurídico no se consagró un procedimiento especial para tal efecto. En consecuencia, las actuaciones que se adelanten con miras a revocar inscripciones por parte de esta Autoridad administrativa y electoral deberán atender los principios del debido proceso establecido en el artículo 29 Superior y, además, ceñirse al procedimiento administrativo general de que trata el título III del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

***"Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código."***

Así mismo, al tenor de lo establecido en el artículo 35 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este procedimiento puede ser escrito, verbal o adelantarse por medios electrónicos, lo cual permite a la autoridad administrativa implementar cualquiera de las modalidades en referencia para surtir la actuación, salvo cuando se trate de procedimientos de oficio los cuales siempre deberán iniciarse por escrito.

Ahora bien, en lo referente a los recursos contra las decisiones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral en los procedimientos de revocatoria de inscripción de candidatos, en especial frente a la oportunidad para interponerlos, cobra especial relevancia la dualidad de procedimientos administrativos establecidos en el del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, el procedimiento escrito y el verbal. Al respecto el artículo 76 prevé:

***"Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez."***

*Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.*

*El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción.*

*Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." (Negrilla fuera del texto)*

De la lectura de la norma aludida, vale destacar el reconocimiento por parte del legislador, de la existencia de diferentes formas de notificación. En este sentido, cuando se señala de manera

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

expresa que "según el caso", está sugiriendo sin dubitación alguna que existen distintos momentos para interponer los recursos y ello dependerá del acto administrativo o del procedimiento implementado por la administración para su notificación. Así pues, la norma dispone diversas formas de notificación, a saber:

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal *-en estrados cuando se apela a la audiencia para notificar-*, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella *-cuando se entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita al ciudadano del acto administrativo, cuando se cita para notificarle-*, o a la notificación por aviso, *-cuando el ciudadano no acude a la administración para que se le entregue la copia del acto administrativo-*, o al vencimiento del término de publicación *-cuando se trata de actos administrativos particulares y concretos, pero que por ser masivos se acude a la notificación por publicación, como por ejemplo, la designación de jurados o resultados en un concurso de carrera-*

En este sentido, cuando el artículo 76 ibidem establece dos oportunidades para interponer los recursos, uno en el acto de la notificación personal y otro dentro de los diez días siguientes a la notificación, aviso o publicación, bajo una interpretación lógica y consecuente con la existencia modalidades del procedimiento administrativo y de las notificaciones, lo que está señalando es que deberá interponerse el recurso en el momento de la notificación personal cuando se trate de decisiones adoptadas en audiencia que se notifiquen personalmente en estrados; y que respecto de las otras formas de notificación personal, el termino para interponer el recurso será dentro de los 10 días siguientes.

En este orden de ideas, se concluye que cuando se trata de decisiones adoptadas y/o notificadas en audiencias, precisamente con la finalidad de concentración, economía y celeridad en las decisiones, los recursos se interponen y sustentan en el momento de la notificación personal, esto es, en estrados.

#### **4.3. DE LA TAXATIVIDAD Y DE LA INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DE LAS INHABILIDADES**

Las inhabilidades constituyen limitaciones excepcionales al ejercicio de derechos fundamentales, en especial al derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos y a los derechos políticos, por lo que su regulación y aplicación deben sujetarse de manera estricta al principio de legalidad, en su dimensión de taxatividad, conforme al cual dichas causales solo pueden derivarse de disposiciones expresas de la Constitución Política o de la ley.

Al respecto, se ha pronunciado la Corte Constitucional:

*"(...) No obstante, por razón del interés general, la Constitución establece en forma expresa y excepcional causales de inhabilidad e incompatibilidad en relación con los servidores públicos (Arts. 126-128) y específicamente respecto de algunos de ellos, como los miembros del Congreso de la República (Arts. 179-181), el Presidente de la República (Art. 197), los diputados y los concejales (Arts. 292).*

*Conforme al criterio expresado por la Corte Constitucional con base en los respectivos textos normativos, las causales constitucionales de inhabilidad e incompatibilidad tienen en unos casos carácter taxativo. En los demás casos pueden ser establecidas o ampliadas por el legislador, por disposición expresa del constituyente o en virtud de la cláusula general de regulación de la función pública (Arts. 123 y 150, Num. 23, C. Pol.), en ejercicio de la potestad de configuración normativa, en el cual está sometido a dos*

Gr. 2  
K

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

tipos de límites: i) los derechos, principios y valores constitucionales, particularmente los derechos a la igualdad, el trabajo, el libre ejercicio de profesiones y oficios y el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, y ii) los principios de razonabilidad y de proporcionalidad, por tratarse de limitaciones a derechos fundamentales, principios que en esta materia tienen como referencia los principios de la función administrativa previstos en el Art. 209 superior, en particular la igualdad, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad.

(...)

También, ha señalado esta corporación que, **por la índole excepcional de las inhabilidades e incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con exclusión de un criterio extensivo**<sup>2</sup> (Negritas adicionales).

De la misma forma, se ha pronunciado el Consejo de Estado:

*"Ha expresado el Consejo de Estado (...) Que tratándose de las inhabilidades para ser elegido a los cargos de representación popular, éstas constituyen una restricción al derecho constitucional fundamental y político que tiene todo ciudadano de ser elegido, razón por la cual, 'dado su carácter prohibitivo, su consagración debe ser expresa, al tiempo que su interpretación estricta, esto es que su deducción y aplicación siempre debe estar ajustada a los presupuestos que para cada causal haya señalado el constituyente o el legislador, dado que no es posible su aplicación extensiva o analógica'"*<sup>3</sup>.

Conforme a la jurisprudencia expuesta, las inhabilidades son de interpretación restrictiva, razón por la cual no admiten aplicación analógica ni extensiva, ni pueden ser creadas, modificadas o ampliadas por la autoridad administrativa mediante interpretaciones subjetivas o valoraciones que desborden el tenor literal y el alcance normativo de la causal expresamente prevista por el legislador.

En ese sentido, la verificación de una inhabilidad exige la constatación objetiva y plena de todos los elementos que estructuran la causal invocada, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, de modo que únicamente procede su aplicación cuando los hechos acreditados encajan de manera clara, expresa e inequívoca dentro del supuesto normativo definido por el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, cualquier decisión administrativa que implique la declaratoria o aplicación de una inhabilidad debe fundamentarse exclusivamente en causales legalmente establecidas y debidamente demostradas, garantizando el respeto por el debido proceso, la seguridad jurídica y la protección efectiva de los derechos fundamentales involucrados, en estricto acatamiento del principio de taxatividad.

#### 4.4. DE LA PLENA PRUEBA

El ejercicio de la potestad de revocar las inscripciones de candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral está supeditado constitucionalmente por el artículo 108 y el numeral 12 del

ESPACIO EN BLANCO

<sup>2</sup> Corte Constitucional, sentencia C-903 de 2008, Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentaría.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de julio de 2006, Rad. 23001-23-31-000-2004-00720-01(PI).



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

artículo 265, al respeto del debido proceso y además a la existencia de plena prueba de la causal que conduce a la revocatoria.

Vale recordar que los derechos fundamentales tienen el carácter de inherentes al ser humano, lo que implica que los mismos deben ser respetados en todos los ámbitos y actuaciones de la administración pública. En este sentido, la presunción de inocencia y la duda resuelta a favor de la persona, como su complemento, deben ser aplicadas no solamente en el ejercicio del *ius Puniendi*, sino también en todas y cada una de las actuaciones que se adelanten por la administración, aunque sean de distinta índole o naturaleza; verbigracia preventiva o policiva.

Frente a este derecho fundamental, ha señalado la Corte Constitucional, lo siguiente:

*"(...) El principio de presunción de inocencia está consagrado en el constitucionalismo colombiano como un derecho fundamental con arraigo expreso en la Constitución y el derecho internacional, del que se derivan importantes garantías para la persona sometida a proceso penal, como son: (i) Nadie puede considerarse culpable, a menos que se haya demostrado la responsabilidad mediante proceso legal, fuera de toda duda razonable; (ii) La carga de la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la acusación; (iii) El trato a las personas bajo investigación por un delito, debe ser acorde con este principio. La formulación del artículo 248 de la Constitución, según la cual únicamente constituyen antecedentes penales las condenas impuestas en sentencias judiciales, en forma definitiva, configura un desarrollo de la garantía constitucional de presunción de inocencia. (...)"<sup>4</sup>*

En este sentido, si bien es cierto la presunción de inocencia y la duda resuelta a favor de la persona, son garantías que se han desarrollado de manera clara en los ámbitos sancionatorios, eso no excluye su aplicación en otros escenarios, por la potísima razón que son derechos fundamentales, lo que impone su respeto en todas las actuaciones sin exclusión o preferencia de unas sobre otras.

En este orden de ideas, la plena prueba será aquella que acredita la veracidad, más allá de toda duda, del supuesto de hecho descrito en la norma, lo que significa, que la procedencia de la revocatoria está condicionada a la existencia de certeza sobre la configuración de la causal que se alega.

## 5. DEL CASO CONCRETO

El caso objeto de análisis tiene su origen en el escrito presentado el día trece (13) de enero de dos mil veintiséis (2026), por el ciudadano NICOLÁS FARFÁN NAMÉN, donde solicitó la revocatoria de inscripción de la candidaturas de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), en atención al incumplimiento de los resultados de las consultas realizadas el día veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), en los siguientes términos:

3. El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante Resolución No. 09673 del 17 de septiembre de 2025, resolvió aceptar la fusión del Partido Unión Patriótica (UP), el

<sup>4</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-121/12, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

*Handwritten signature/initials.*

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

Partido Polo Democrático Alternativo (PDA) y el Partido Comunista Colombiano (PCC) para conformar el nuevo MPH, sujeta a la condición de terminación de los procesos sancionatorios administrativos en curso de las organizaciones políticas solicitantes. En el mismo acto se decidió que, a partir del cumplimiento de la condición resolutoria, los partidos UP, PDA y PCC se disolverían, por lo que el MPH obtendría personería jurídica y asumiría todos los derechos y obligaciones de las organizaciones disueltas.

4. El 26 de octubre de 2025 se celebró consulta popular interpartidista de la coalición denominada Pacto Histórico (PH) conformada por los partidos UP, PDA, PCC, MCH y el Partido Progresistas (PG) (sin personería jurídica a la fecha de la consulta) para la selección de sus candidatos al congreso de la República.

5. Dentro del acuerdo de coalición de la consulta popular interpartidista se incorporaron, entre otras, las siguientes cláusulas:

"DÉCIMA CUARTA: EFECTOS DE LA FUSIÓN. Una vez reconocida la fusión, solicitada por los partidos COLOMBIA HUMANA, UNIÓN PATRIÓTICA, POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO y PROGRESISTAS esta consulta será vinculante para el MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO. (...)

DÉCIMO SEXTA: POSIBILIDAD DE CONFORMACIÓN DE COALICIONES. El presente acuerdo habilita la conformación de coaliciones con otros partidos o movimientos, siempre que se respete el umbral previsto en el artículo 262 de la Constitución. La decisión de coaligarse corresponderá a los Representantes Legales de los Partidos, a la Coordinación Nacional Provisional del Movimiento Político Pacto Histórico en caso de concretarse la fusión, quienes definirán la modalidad de lista. En todo caso, deberá respetarse el orden resultante de la presente consulta para la conformación de la lista a efectos de los reglones donde se introduzcan candidaturas de los presentes partidos."

6. El 3 de diciembre de 2025 se cumplió la condición resolutoria prevista, por lo cual la Resolución No. 09673 de 2025 del CNE, previamente referida, empezó a surtir plenos efectos jurídicos. En consecuencia, a partir de esa fecha el MPH adquirió personería jurídica y quedó inscrito en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas del CNE.

7. Vencido el periodo de inscripción y modificación de candidaturas al congreso de la República, de acuerdo con el calendario electoral previamente referido, quedaron en firme las inscripciones de las listas presentadas por parte del MPH (en diferentes modalidades y conformación de coaliciones). En catorce (14) circunscripciones electorales (Bogotá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada y en la internacional), incumpliendo con las reglas constitucionales y legales para su materialización.

(...)

Por otra parte, aun cuando en las cláusulas del acuerdo de voluntades radicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) por los partidos que convocaron la consulta popular interpartidista se haya previsto una supuesta habilitación para actuaciones posteriores, resulta evidente que ningún acuerdo entre organizaciones políticas puede prevalecer sobre lo dispuesto en la Constitución Política y la ley, en particular frente al carácter obligatorio de los resultados de la consulta y a las consecuencias jurídicas derivadas de su inobservancia por parte de los partidos, movimientos, coaliciones o precandidatos que participaron en dicho mecanismo.

En efecto, el inciso quinto del artículo 107 de la Constitución Política, los artículos 7 y 32 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, consagran de manera expresa que los resultados de las consultas son obligatorios y que su desconocimiento constituye causal de nulidad o revocatoria de la inscripción. También se debe tener en cuenta el reciente antecedente



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

administrativo contenido en la Resolución No. 14328 del 14 de noviembre de 2025, proferida por la Secretaría General de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así las cosas, la inscripción de candidaturas resulta jurídicamente inadmisibles cuando se configura cualquiera de las siguientes hipótesis, plenamente verificables en el presente caso: i) que se pretendan inscribir candidatos distintos a aquellos seleccionados mediante la consulta popular interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025; o ii) que los candidatos seleccionados en dicha consulta sean inscritos por partidos, movimientos políticos o coaliciones distintas de aquellas que convocaron y realizaron el mecanismo de participación, pese a haber participado en él en calidad de precandidatos. En ambos eventos, se configura un desconocimiento directo del carácter vinculante de la consulta popular interpartidista, lo cual impone, conforme al ordenamiento constitucional y legal vigente, la revocatoria de las inscripciones efectuadas en contravención de dichas normas.

En este punto, resulta pertinente reiterar que ninguna cláusula contenida en acuerdos internos, estatutos partidarios o acuerdos de coalición puede habilitar el desconocimiento de mandatos constitucionales o legales. Así lo ha sostenido de manera reiterada la Corte Constitucional al examinar la Ley Estatutaria 1475 de 2011, y lo retoma expresamente la Sección Quinta del Consejo de Estado al precisar que ni siquiera los estatutos de los partidos políticos pueden servir de fundamento para incumplir la Constitución o la ley. En esa misma línea, las cláusulas décimo quintas y décimo sexta del acuerdo de coalición invocadas para justificar la inscripción de listas con fuerzas políticas distintas a las que participaron en la consulta popular interpartidista carecen de eficacia jurídica frente al carácter obligatorio de los resultados de dicho mecanismo. En consecuencia, tales estipulaciones no pueden prevalecer sobre lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política ni sobre los artículos 7 y 32 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, cuya infracción activa la causal de revocatoria de la inscripción.

Lo otro, es decir aceptar que las organizaciones políticas están legitimadas para desconocer los resultados de las consultas es condenar al Estado para que se dilapiden los recursos públicos en mecanismos de democracia interna para la selección de candidaturas costosos e inoportunos dentro de un proceso electoral.

A continuación se presenta el cuadro (de elaboración propia), efectuado con información oficial obtenida de los formularios de inscripción de candidaturas (E6, E7 y E8 y anexos) al congreso de la República y formularios E-26 actas de declaratoria de elección del congreso de la República en el año 2022, así como de la certificación de resultados de las consultas realizadas en octubre de 2025 expedidas por los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil y los formularios de inscripción de candidaturas (E6, E7 y E8 y anexos) al congreso de la República para las elecciones a celebrarse el 8 de marzo de 2026 y en el 2022:

(...)

	N/A	La coalición debía ser inscrita por los partidos que ahora conforman el MPH y la Colombia Humana. Además, en el renglón 102 debía ser inscrito el candidato Angel Moises Barreto Charrasquel y en el renglón 103 Lina Marsela Florez Trado.	Renglón 102: se incluye al candidato Nicolas Daniel Guerrero Montano avalado por el MAIS (no participó en la consulta). Renglón 103: se incluye a la candidata Lina Cardes Calderón Sánchez avalada por el MAIS (no participó en la consulta). Adicionalmente, se inscribe la coalición incluyendo no solo al MAIS, sino al Partido del Trabajo de Colombia, quienes no participaron en la consulta.
Sucre			

ESPACIO EN BLANCO

108

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

Así mismo, en el desarrollo del procedimiento administrativo, el señor AUGUSTO HERNÁNDEZ VIDAL, en calidad del Procurador 120 Judicial II Administrativo de Bogotá, en representación del Ministerio Público, remitió concepto acerca de los hechos objeto de controversia en los siguientes términos:

*"La evidencia documental contenida en el Acta No. 002 de la Comisión Escrutadora Nacional del Pacto Histórico demuestra que Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar fue efectivamente seleccionado mediante la consulta interpartidista vinculante del 26 de octubre de 2025 para la circunscripción electoral de Sucre, obteniendo 36.118 votos y ocupando la posición número 1 en la lista de candidatos para esa circunscripción. Esta realidad de los hechos electorales desactiva el argumento central de la solicitud de revocatoria en lo que respecta a este candidato específico, pues su inscripción posterior realizada el 7 de diciembre de 2025 por la Coalición Pacto Histórico Sucre Unitarios se ajusta fielmente a los resultados obligatorios de la consulta interpartidista.*

*Hubo un error administrativo cometido al expedir el aval del 5 de diciembre de 2025, documento que incorrectamente lo designaba como seleccionado para la circunscripción de Putumayo, que constituyó un vicio puramente formal que no afectó la legitimidad democrática de su inscripción final ni violó el carácter vinculante del artículo 107 de la Constitución Política. Por consiguiente, desde la perspectiva del cumplimiento sustancial de la norma constitucional relativa a la obligatoriedad de los resultados de las consultas interpartidistas, la candidatura de Ramírez Salazar para la circunscripción de Sucre se encuentra respaldada por la voluntad expresada por los electores que participaron en la consulta del 26 de octubre de 2025, y su revocatoria no se justificaría en el incumplimiento de dicho mandato constitucional.*

*En la página 127 del Acta No. 002 de la Comisión Escrutadora Nacional del Pacto Histórico se registran los resultados de los votos para el departamento de Sucre de la siguiente manera:*



24. **SUCRE:** En virtud de que no se presentaron reclamaciones durante el periodo habilitado (27 al 29 de octubre de 2025), la Comisión declara en firme los resultados de votación reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el preconteo para la elección de Cámara de Representantes, correspondientes al departamento de Sucre.

POSICIÓN EN LISTA	CANDIDATO	VOTACIÓN
1	RODRIGO ALFONSO RAMÍREZ SALAZAR	36118
2	LINA MARCELA FLOREZ TIERRA	4772
3	ÁNGEL MOISÉS BARRETO CHARRASQUEL	6194
4	CILIANA MARIA GALVAN PEREZ	4399
5	ANDRÉS ARMANDO CAMPO MERCADO	4433
6	ANDREA CAROLINA PEREZ ARRIETA	2825
7	MANUEL ESTEBAN CHIMA ALBA	3523
8	ANA SOFIA CUELLO ZURIOJE	1896
9	VALMIRO RANGEL RANGEL	3678
10	DANIEL ALFONSO GAVIRIA PINEDA	3662
11	RUSSEL SEGUNDO SIERRA VERGARA	2085
12	BERNARDO JOSE PINEDA TERAN	3516

*Guerrero Montañó fue avalado el 6 de diciembre de 2025 por el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS para ocupar la posición 102 de la lista de voto preferente de la coalición "Pacto Histórico Sucre Unitarios" para la circunscripción territorial de Sucre. El elemento decisivo que configura la violación del carácter vinculante de la consulta del 26 de octubre de 2025 es que el MAIS no participó en dicha consulta interpartidista, según consta expresamente en el Auto 042 del 21 de enero de 2026 y en el acuerdo de coalición del 6 de diciembre de 2025.*

*La consulta vinculante del 26 de octubre de 2025 fue celebrada exclusivamente por los partidos Unión Patriótica, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista*

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

Colombiano, Movimiento Político Colombia Humana y el Movimiento Político Progresistas, quedando el MAIS expresamente excluido de este mecanismo de democracia interna. Por consiguiente, al inscribir a Guerrero Montaña dentro de una lista que incluye candidatos seleccionados mediante la consulta vinculante del Pacto Histórico, se produce una alteración y reemplazo del orden resultante de dicha consulta, en violación directa de la cláusula décimo sexta del acuerdo de consulta, del artículo 107 de la Constitución Política y del artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.

El caso de la ciudadana Lina Cardee Calderón Sánchez replica exactamente la misma situación jurídica que presenta el candidato Nicolás Daniel Guerrero Montaña, configurando de manera igualmente clara la segunda hipótesis de inadmisibilidad jurídica por violación del carácter vinculante de la consulta interpartidista.

Calderón Sánchez fue avalada el 6 de diciembre de 2025 por el Partido del Trabajo de Colombia PTC para ocupar la posición 103 de la lista de voto preferente de la coalición "Pacto Histórico Sucre Unitarios" para la circunscripción territorial de Sucre. Al igual que el MAIS, el Partido del Trabajo de Colombia no participó en la consulta popular interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025, conforme lo reconoce expresamente el acuerdo de coalición del 6 de diciembre de 2025 al establecer que los partidos coaligados que no participaron en la consulta avalaron a sus candidatos según sus procedimientos estatutarios internos, al margen del mecanismo democrático vinculante.

La consulta del 26 de octubre de 2025 fue un ejercicio de democracia interna exclusivo de los partidos Unión Patriótica, Partido Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano, Movimiento Político Colombia Humana y Movimiento Político Progresistas, quedando el PTC expresamente excluido de este proceso de selección popular. La inscripción de Calderón Sánchez en la posición 103 de la lista produce, por tanto, una alteración indebida del orden resultante de la consulta vinculante.

No se trata de una adición a las candidaturas avaladas por lo votantes, sino un directo reemplazo de las candidaturas de las personas en renglón 2 y 3, esto es, LINA MARCELA FLOREZ TIRADO Y ANGEL MOISES BARRETO CHARRASQUIEL. Esta situación configura un incumplimiento del artículo 107 de la Constitución Política que establece el carácter obligatorio de los resultados de las consultas interpartidistas, así como del artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 que consagra como causal de rechazo o revocatoria la inscripción de candidatos distintos a los seleccionados mediante consulta popular vinculante, pues la inclusión de candidatos no sometidos al escrutinio democrático de la consulta desvirtúa la voluntad expresada por los electores que participaron en dicho mecanismo el 26 de octubre de 2025.

### CONCEPTO

La inscripción de Rodrigo Alfonso Ramírez Salazar es jurídicamente válida, pues consta en el Acta No. 002 de la Comisión Escrutadora Nacional que fue seleccionado mediante la consulta vinculante del 26 de octubre de 2025 para la circunscripción de Sucre con 36.118 votos en posición 1.

Por el contrario, las inscripciones de Nicolás Daniel Guerrero Montaña y Lina Cardee Calderón Sánchez deben ser revocadas conforme al artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, pues ambos candidatos fueron avalados por partidos políticos (MAIS y PTC) que no participaron en la consulta interpartidista vinculante del 26 de octubre de 2025, violando directamente el artículo 107 de la Constitución Política que establece el carácter obligatorio de los resultados de tales consultas y la prohibición expresa de que candidatos seleccionados en la consulta sean inscritos por organizaciones políticas distintas a las que convocaron y realizaron el mecanismo de participación democrática."

Por último, el día tres (03) de enero de dos mil veintiséis (2026), el señor NICOLÁS FARFÁN NAMÉN, remitió escrito de consideraciones adicionales, a través del cual, reitero los argumentos expuestos en la solicitud inicial.

Go.  
A



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

De lo expuesto se advierte que tanto los solicitantes de la revocatoria de la inscripción como el Ministerio Público estructuran su reproche en una presunta vulneración del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, al considerar que se inscribieron como candidatos a los ciudadanos **NICOLAS DANIEL GUERRERO MONTAÑO** y **LINA CARDEE CALDERON SANCHEZ**, quienes no participaron en la consulta realizada el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), circunstancia que, a su juicio, desconocería el carácter obligatorio de los resultados de dicho mecanismo de democracia interna.

## 5.1. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

### 5.1.1. De la fuerza vinculante de los acuerdos suscritos por las agrupaciones políticas

El artículo 107 de la Constitución Política reconoce a los partidos y movimientos políticos la facultad de acudir a consultas populares, internas o interpartidistas como mecanismos democráticos para la toma de decisiones y la selección de sus candidatos, siempre conforme a sus estatutos y a la ley. Además, la norma constitucional dispone que el resultado de las consultas será obligatorio, lo que eleva sus efectos a un plano vinculante para las organizaciones políticas que las convocan.

En desarrollo de dicho mandato Superior, el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 concreta el alcance de esa obligatoriedad al señalar que los resultados de las consultas son vinculantes tanto para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición convocante como para los precandidatos que participaron, prohibiéndoles inscribir o apoyar candidatos distintos a los seleccionados mediante este mecanismo, salvo en los casos excepcionales de muerte o incapacidad absoluta. Así, la norma consagra como causal de revocatoria de inscripción el hecho de inscribir o apoyar a un candidato diferente de aquel que resultó elegido mediante el mecanismo de consulta.

Frente al particular, es necesario tener en cuenta el siguiente contexto:

El día trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025), fue radicado ante esta Corporación un escrito por medio del cual se solicitó el reconocimiento de la Personería Jurídica al Movimiento Político Pacto Histórico, con fundamento en el acuerdo de fusión suscrito por los Partidos: Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Progresistas, colectividades que, en ejercicio de su autonomía política y conforme a las disposiciones constitucionales y legales que regulan la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, decidieron integrarse en una nueva organización política de manera unificada.

Como consecuencia de dicha fusión, el Movimiento Político Pacto Histórico se encontraba, para ese momento, en una situación jurídica transitoria, caracterizada por el reconocimiento formal de su personería jurídica por parte de la Autoridad Electoral competente. En efecto, si bien la fusión comportaba la voluntad expresa de las organizaciones políticas involucradas de extinguir sus personerías jurídicas individuales para dar lugar a un nuevo sujeto político, lo cierto es que la plena eficacia jurídica de dicho proceso quedaba supeditada al correspondiente acto administrativo de reconocimiento, razón por la cual el Movimiento Político Pacto histórico no podía ejercer de manera integral y autónoma los derechos ni asumir plenamente las obligaciones propias de las organizaciones políticas con personería jurídica reconocida.

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

Esta circunstancia ubicaba al evocado Movimiento Político en un escenario de incertidumbre jurídica temporal, particularmente en aspectos sustanciales como la inscripción de candidatos, la conformación de coaliciones, la administración y acceso a los recursos de financiación estatal, la adopción y aplicación de estatutos definitivos, así como la determinación de responsabilidades frente al régimen de financiación y control. No obstante, dicha situación no obedecía a una omisión o irregularidad atribuible al Movimiento, sino que se derivaba de las consecuencias naturales del trámite administrativo en curso para el reconocimiento de su personería jurídica, iniciado oportunamente ante esta Corporación.

Por lo anterior, los Partidos en transición hacia el Movimiento Pacto Histórico: Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista Colombiano y Progresistas, decidieron suscribir un acuerdo de voluntades para participar en la consulta popular realizada el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), a fin de mantener íntegramente el alcance de la posibilidad estatutaria de conformar coaliciones.

Sobre este punto, es imperativo precisar que el día tres (03) de octubre de dos mil veinticinco (2025), se suscribió formalmente un acuerdo entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Pacto Histórico para las consultas del veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), mediante el cual se presentó y protocolizó el acuerdo de voluntades para participar en dicho mecanismo. Esta actuación administrativa blindó de publicidad y legalidad el proceso, garantizando que todos los precandidatos conocieran, con la debida antelación, las reglas que condicionaban la consolidación del resultado final.

Ahora bien, en estricto cumplimiento de la finalidad de preservar la facultad constitucional de asociación política, el citado acuerdo garantizó la armonía entre el mecanismo democrático de consulta y la posibilidad de conformar coaliciones posteriores. Esta compatibilidad técnica y jurídica quedó expresamente desarrollada en las cláusulas décima quinta y décima sexta del referido instrumento, las cuales definieron el marco de acción para la configuración de las listas definitivas, disponiendo lo siguiente:

**DÉCIMA QUINTA. EFECTOS DE LA CONSULTA EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA FUSIÓN.** En el evento en que no se materialice la fusión del Movimiento Político Pacto Histórico respecto de alguno de los partidos suscriptores del presente acuerdo y, no obstante, se supere el umbral previsto en el artículo 262 de la Constitución Política para la inscripción de listas en coalición, los resultados de la consulta conservarán fuerza vinculante para aquellas organizaciones políticas participantes. En consecuencia, estas deberán proceder a la inscripción de sus precandidaturas mediante lista cerrada, con carácter paritario y garantizando la alternancia de género, respetando el orden de los resultados de esta consulta.

**DÉCIMA SEXTA. POSIBILIDAD DE CONFORMACIÓN DE COALICIONES.** El presente acuerdo habilita la conformación de coaliciones con otros partidos o movimientos, siempre que se respete el umbral previsto en el artículo 262 de la Constitución. La decisión de coaligarse corresponderá a los Representantes Legales de los Partidos, o a la Coordinación Nacional Provisional del Movimiento Político Pacto Histórico en caso de concretarse la fusión, quienes definirán la modalidad de lista. En todo caso, deberá respetarse el orden resultante de la presente consulta para la conformación de la lista a efectos de los renglones donde se introduzcan candidaturas de los presentes partidos.

De lo anterior, se vislumbra que la cláusula décima quinta del acuerdo de voluntades regula expresamente el escenario en el que no se llegara a materializar la fusión respecto de alguno de los partidos suscriptores del acuerdo. En ese evento, y siempre que se cumpla la regla del umbral



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

prevista en el artículo 262 de la Constitución Política, como condición habilitante para la inscripción de listas en coalición, la cláusula dispuso que los resultados de la consulta conservarán fuerza vinculante para las organizaciones políticas participantes, precisando que estas *"deberán proceder a la inscripción de sus precandidaturas"*, respetando el orden de la consulta. Esta redacción es reveladora, pues no consagra una obligación abstracta de inscripción, sino que supedita la fuerza vinculante del resultado a la existencia de una habilitación jurídica efectiva para actuar en coalición, circunscribiéndola a aquellas organizaciones que, aun sin haberse perfeccionado la fusión, se encuentran legalmente facultadas para materializar el resultado mediante lista cerrada, paritaria y con alternancia.

Por otra parte, en la cláusula décima sexta del acuerdo de voluntades, se plasmó la posibilidad de conformación de coaliciones, teniendo en cuenta tres (3) puntos: *i)* se debe respetar el umbral previsto en el artículo 262 de la Constitución Política; *ii)* la decisión de coaligarse será por parte de los Representantes Legales de cada agrupación política o por parte de la Coordinación Nacional Provisional del **MOVIMIENTO PACTO HISTÓRICO** en caso de concretarse la fusión; y *iii)* en todo caso se deberá respetar el orden resultante de la consulta para la conformación de la lista.

Ahora bien, a través de la Resolución No. 09673 de dos mil veinticinco (2025) proferida por esta Corporación, se le otorgó la Personería jurídica al **MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO** de manera condicionada, efectuándose su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos – RUPYM, el día tres (03) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Posteriormente, el día seis (06) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), el **MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**, en pleno ejercicio de sus derechos, suscribió acuerdo de coalición con el **MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL MAIS** Y **PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA PTC**, denominándose: *"PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS"*, para inscribir una lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento de Sucre.

En este punto, frente al acuerdo de voluntades para participar en la consulta popular realizada el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), y, respecto del acuerdo de la coalición denominada: **"PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS"** conformada por el **MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA**, **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA PTC** y el **MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**, dichos acuerdos tienen un carácter vinculante, tal y como lo ha expresado el parágrafo 2 del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011:

*"(...) ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que, aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. (...)*

**PARÁGRAFO 2o. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante** y, por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

*precepto será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la coalición. (...)”*

En igual sentido, es necesario traer a colación el principio de autonomía de los partidos políticos, en donde la Corte Constitucional manifestó, lo siguiente:

*"(...) El establecimiento de unos acuerdos básicos entre los partidos y movimientos políticos concurrentes, sobre aspectos fundamentales de la asociación estratégica establecida, constituye un desarrollo de la libertad organizativa interna de los partidos y movimientos políticos en el marco de la autonomía que les reconoce la Constitución (...)”<sup>6</sup>*

En el examen del caso, esta Sala debe realizar un juicio de ponderación entre dos mandatos constitucionales que, lejos de ser excluyentes, coexisten armónicamente: (i) el principio de autonomía de las organizaciones políticas y (ii) la obligatoriedad de los resultados de las consultas populares.

Conforme a la Sentencia C-490 de 2011, la Corte Constitucional ha establecido que el acuerdo de voluntades entre partidos es una manifestación de su libertad organizativa interna. En este sentido, el Acuerdo suscrito el tres (03) de octubre de dos mil veinticinco (2025) ante la Registraduría Nacional, no fue un simple trámite administrativo, sino el acto jurídico donde se fijaron los parámetros que hoy rigen la validez de la lista.

Dicho acuerdo, en su cláusula décima sexta, previó expresamente la facultad de los representantes legales para conformar coaliciones interpartidistas, estableciendo que el resultado de la consulta sería vinculante únicamente respecto de los renglones asignados a las colectividades que integran el **PACTO HISTÓRICO**. Esta previsión garantiza que la autonomía para aliarse con otras organizaciones políticas, no anule el mecanismo democrático, sino que lo complementa en una estructura de lista pluralista.

Siguiendo la línea jurisprudencial de esta Corporación y del Consejo de Estado<sup>6</sup>, las restricciones a los derechos políticos deben ser interpretadas bajo el principio de legalidad en sentido estricto y taxatividad.

Como bien se ha sostenido, las normas que contemplan inhabilidades o causales de revocatoria son de interpretación restrictiva y excluyen cualquier aplicación analógica o extensiva. En consecuencia, el Artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 no puede ser invocado para prohibir la integración de una lista de coalición con candidatos de otros partidos políticos, siempre que se haya respetado el derecho de quien ganó la consulta.

Es así como los acuerdos de voluntades suscritos entre partidos y movimientos políticos constituyen una manifestación legítima del principio de autonomía partidista, consagrado en el artículo 107 de la Constitución Política, en virtud del cual dichas organizaciones gozan de la facultad de autorregular su funcionamiento interno, definir sus mecanismos de toma de decisiones y establecer las reglas que rigen sus alianzas, consultas y procesos de selección de candidatos. En ese sentido, tales acuerdos, celebrados dentro del marco constitucional y legal, obligan a las partes que los suscriben y deben ser interpretados conforme a la voluntad

<sup>5</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011.

<sup>6</sup> Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 6 de julio de 2006, Rad. 23001-23-31-000-2004-00720-01(PI).

660  
7

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la **COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS**, conformada por los partidos **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"**, **MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA**, **PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA**, **MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

democrática que los inspira, sin que la autoridad administrativa pueda desconocerlos o sustituirlos, salvo cuando se acredite de manera expresa su contrariedad con normas superiores.

En virtud de lo expresado, y aplicando la cláusula décimo sexta del acuerdo de voluntades al caso de Sucre, se concluye que la obligatoriedad de la consulta no se agota en la simple facultad formal de las colectividades para suscribir formularios de inscripción. Si bien las peticiones allegadas cuestionan la inscripción de algunos candidatos por su pertenencia partidista, es preciso señalar que el núcleo del carácter obligatorio de la consulta no radica en la identidad formal de quienes suscriben el formulario, sino, como ya se ha expresado y se profundizará más adelante, en la vinculación material entre la voluntad popular expresada en las urnas y la lista definitiva. Por tanto, la validez del acto de inscripción depende estrictamente del respeto al orden y las reglas democráticas previamente acordadas.

En este sentido, la inscripción de la lista de la Coalición denominada **"PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS"**, no constituye, por sí misma, un incumplimiento del resultado vinculante de la consulta, ni activa automáticamente la causal de revocatoria prevista en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011.

5.1.2. De la inscripción de la lista de la Coalición denominada: **"PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS"**

La Registraduría Nacional del Estado Civil remitió el Acta No. 002 de fecha doce (12) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), mediante la cual se consolidan y deciden las reclamaciones formuladas en el marco de la consulta interpartidista para Senado y Cámara de Representantes del Movimiento Político Pacto Histórico. En lo que respecta a la consulta para la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, se dejó constancia de lo siguiente:



24. **SUCRE:** En votación que no se presentaron reclamaciones durante el periodo habilitado (27 al 29 de octubre de 2025), la Comisión declaró en firme los resultados de votación reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el preconteo para la elección de Cámara de Representantes, correspondientes al departamento de Sucre.

POSICIÓN EN LISTA	CANDIDATO	VOTACIÓN
1	RODRIGO ALFONSO RAMIREZ SALAZAR	36118
2	LINA MARSELA FLOREZ TIRADO	4722
3	ANGEL MOISES BARRETO CHARRASQUIEL	6184
4	CRISTINA BLANCA GIL YAN PEREZ	4309
5	ANDRES ARMANDO CAMPO MERCADO	4437
6	ANDREA CAROLINA PEREZ ARRIETA	2425
7	MANUEL ESTEBAN CHIMA ALBA	3623
8	ANA SOFIA CASILLO ZURIQUE	1896
9	VALMIR RANGEL RANGEL	3678
10	DANIEL ALFONSO GUERRA PINEDA	3942
11	RUBEN SEGUNDO SIERRA VERDARA	3085
12	BERNARDO JOSE PINEDA TERAN	1816

Con base en la información contenida en la imagen, para la consulta interpartidista a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, los tres primeros lugares fueron ocupados por **RODRIGO ALFONSO RAMIREZ SALAZAR**, quien obtuvo el primer puesto con 36118 votos; en segundo lugar se ubicó **LINA MARSELA FLOREZ TIRADO**, con 4722 votos; y en el tercer puesto quedó **ANGEL MOISES BARRETO CHARRASQUIEL**, quien alcanzó 6184 votos, consolidándose así como los candidatos con mayor respaldo electoral dentro de dicha consulta, información que acredita de manera objetiva el orden de los resultados de la consulta.



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

Posteriormente, en atención a cláusula décima sexta (16) del Acuerdo de la Consulta del veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), la cual habilita la conformación de coaliciones y la integración de candidaturas entre las organizaciones políticas participantes, como se mencionó en el acápite anterior del presente acto administrativo, el **MOVIMIENTO POLITICO COLOMBIA HUMANA, MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL MAIS PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA PTC y MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO**, suscribieron acuerdo de coalición denominándose: "**PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS**", para inscribir una lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento de Sucre.

La anterior coalición conllevó a la inscripción de los ciudadanos **NICOLÁS DANIEL GUERRERO MONTAÑO y LINA CARDEE CALDERÓN SÁNCHEZ** con el aval del **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"** y el **PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA PTC** respectivamente, es decir, incluyendo una persona adicional a la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento de Sucre.

Frente al particular, el artículo 262 de la Constitución Política, dispone:

*"(...) **ARTÍCULO 262.** <Artículo modificado por el artículo 20 del Acto Legislativo 2 de 2015, anteriormente era el artículo 263. El nuevo texto es el siguiente:>Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos. (...)" (subrayado fuera del texto original)*



Es así como dicha disposición establece como regla general, que el número de candidatos inscritos en una lista no puede exceder el número de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción; no obstante, consagra una excepción expresa para aquellas corporaciones en las que se eligen hasta dos (2) miembros, caso en el cual las listas pueden estar conformadas por hasta tres (3) candidatos. Esta previsión constitucional busca ampliar las opciones de representación y garantizar una mayor participación, sin desconocer los límites propios del sistema de listas y de la proporcionalidad en la asignación de curules.

Así entonces, en el Formulario E6-CT - Solicitud para la inscripción de listas y constancia de aceptación de candidatos presentada por coaliciones de partidos y movimientos políticos con personería jurídica cámara territorial, presentada por la Coalición denominada "**PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS**", a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, se observa la lista de candidatos conformada por los ciudadanos 1) **RODRIGO ALFONSO RAMIREZ SALAZAR**, 2) **NICOLAS DANIEL GUERRERO MONTAÑO** y 3) **LINA CARDEE CALDERON SANCHEZ**, como se observa en la siguiente imagen:

ESPACIO EN BLANCO

Ac-5-2

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

		<b>COALICIONES</b> <b>SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE CANDIDATOS PRESENTADA POR</b> <b>COALICIONES DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA</b> <b>CÁMARA TERRITORIAL</b>					
<b>FORMA DE ACEPTACIÓN</b> 		<b>ELECCIONES 8 DE MARZO DE 2026</b> <b>PERÍODO 2026-2030</b>				<b>E6 - CT</b>	
<b>NOMBRE DE LA COALICIÓN:</b> <b>PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS</b>						<b>CÓDIGO DIVIPOL:</b> <b>28</b>	
<b>DEPARTAMENTO:</b> <b>SUCRE</b>							
<b>INFORMACIÓN DE LA COALICIÓN</b>							
SECCIÓN 2	<b>DIRECCIÓN DE LA COALICIÓN:</b> <b>CARRERA 17A NO. 37-27 TEUSAQUILLO</b> <b>CÓDIGO POSTAL:</b> <b>phavalris2026@gmail.com</b>		<b>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE LA LISTA:</b> <b>ANDRÉS FELIPE PERALTA GÓMEZ</b>		<b>CÉDULA DE QUIEN SUSCRIBE LA LISTA:</b> <b>1010210563</b>		
	<b>DEPARTAMENTO:</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b>		<b>MUNICIPIO:</b> <b>BOGOTÁ D.C.</b>				
	<b>PARTIDO RESPONSABLE DE LA COALICIÓN:</b> <b>32 - MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO</b>						
	<b>OPCIÓN DE VOTO</b>		<b>VOTO PREFERENTE</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>VOTO NO PREFERENTE</b> <input type="checkbox"/>		
<b>PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS QUE CONFORMAN LA COALICIÓN</b>							
<b>PARTIDO</b>		<b>PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO</b>				<b>VOTACIÓN PARTIDO (ELECCIONES MARZO 2026)</b>	
12		MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"					
18		MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA					
28		PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA					
32		MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO					
<b>TOTAL VOTOS COALICIÓN</b>							
<p>El código del partido inscrito en esta cédula, deberá ser el mismo de la columna en la lista de candidatos. El voto preferente se otorga a quien agrupación política pertenece el candidato. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que sumados haya obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas (Artículo 262 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4° del Acto Legislativo 02 de 2015).</p>							
<b>INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS</b>							
<p>Para la gravedad de primerito, los firmantes declaramos NO haber participado en consultas internas de otro partido y NO estar incurso en causales de inhabilitación o incompatibilidad contempladas en la Constitución y la Ley, por lo tanto, aceptamos la candidatura para la corporación en ambas referidas.</p> <p>Para las listas de voto No preferente, se asume que el primer renglón corresponde a la primera posición de la lista y a partir de esta en orden consecutivo.</p>							
<b>LISTA DE CANDIDATOS</b>							
RENGLÓN	NOMBRES	APELLIDOS	PARTIDO	GÉNERO	CÉDULA	EDAD	FIRMA DE ACEPTACIÓN
101	RODRIGO ALFONSO	RAMÍREZ SALAZAR	00032	X	1128440310	34	OTP
102	NICOLAS DANIEL	GUERRERO MONTAÑO	00012	X	11075836	58	OTP
103	LINA CARDEI	CALDERÓN SÁNCHEZ	00012	X	64699041	44	OTP

De conformidad con lo previamente expuesto y según se evidencia de manera clara en el formulario citado, se verificó que en el renglón ciento uno (101) fue debidamente inscrito el ciudadano que participó en la consulta popular realizada el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025), inscripción que se efectuó respetando estrictamente el orden y los resultados obtenidos en dicho mecanismo de participación democrática, en observancia de la voluntad ciudadana expresada en las urnas y de las reglas previamente establecidas para la conformación de la lista.

De lo anterior, se advierte que mediante el Formulario E8-CT – Lista Definitiva de Candidatos Inscritos Cámara Territorial, a través del cual se materializó la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento de Sucre, se observa que quedaron formalmente inscritos los ciudadanos 1) **RODRIGO ALFONSO RAMIREZ SALAZAR**, 2) **NICOLAS DANIEL GUERRERO MONTAÑO** y 3) **LINA CARDEE CALDERON SANCHEZ**, conforme se evidencia a continuación:



Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

		<b>COALICIONES</b> <b>LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS INSCRITOS</b> <b>CAMARA TERRITORIAL</b>					
		<b>ELECCIONES 8 DE MARZO DE 2026</b>				<b>E8 - CT</b>	
<b>SECCIÓN 1</b>	<b>DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN:</b> SUCRE					<b>CÓDIGO</b> 28	
	<b>NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN:</b> PACTO HISTORICO SUCRE UNITARIOS						
	<b>OPCIÓN DE VOTO</b>						
	<b>VOTO PREFERENTE</b>		<b>X</b>	<b>VOTO NO PREFERENTE</b>			
<b>INFORMACIÓN DE LOS CANDIDATOS</b>							
<b>LISTA DE CANDIDATOS</b>							
<b>REGLÓN</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>APELLIDOS</b>	<b>CEDULA</b>	<b>GÉNERO</b>	<b>EDAD</b>		
101	RODRIGO ALFONSO	RAMIREZ SALAZAR	1128440310	X	34		
102	NICOLAS DANIEL	GUERRERO MONTAÑO	11075836	X	58		
103	LINA CARDEE	CALDERON SANCHEZ	64699041	X	44		
<b>ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR FUNCIONARIOS ELECTORALES</b>							
<b>DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>							
<b>SECCIÓN 3</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO:</b> ROBERTO JAVIER MORENO LEDESMA			<b>NOMBRE Y APELLIDO:</b> SAMIRA MARGARITA FARAK MENDOZA			
	<b>FIRMA:</b> 			<b>FIRMA:</b> 			

Así las cosas, no les asiste razón a los solicitantes al afirmar que la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por el departamento de Sucre, realizada por la coalición denominada **"PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS"**, desconozca el carácter obligatorio de los resultados de la consulta popular celebrada el veintiséis (26) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Por el contrario, se encuentra plenamente acreditado que el ciudadano **RODRIGO ALFONSO RAMIREZ SALAZAR**, quien resultó favorecido en dicho mecanismo democrático, fue ubicado en el **primer** de la lista conforme al orden de votación certificado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Con ello, se garantizó el respeto a la voluntad popular y al núcleo esencial del derecho de participación de quienes acudieron a las urnas.

De igual forma, la inscripción de los ciudadanos **NICOLAS DANIEL GUERRERO MONTAÑA** y **LINA CARDEE CALDERON SANCHEZ** no constituye un acto arbitrario ni una desviación de poder por parte de las directivas. Por el contrario, dicha actuación se efectuó en estricto cumplimiento del Acuerdo de Coalición y en armonía con la cláusula décima sexta del Acuerdo de Voluntades formalizado ante la autoridad electoral el tres (03) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Al respecto, es preciso aclarar que tales inscripciones corresponden a los cupos asignados de manera autónoma al **MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS"** y el **PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA PTC**, en el marco de la alianza estratégica. En consecuencia, su inclusión no altera, desplaza, ni vulnera el orden de prelación derivado de la consulta popular para los precandidatos del **PACTO HISTÓRICO**; máxime cuando se encuentra acreditado que el primer renglón de la lista fue asignado a los ciudadanos que obtuvieron la mayor votación en dicho mecanismo democrático, garantizando así la eficacia del mandato popular y la vigencia de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

AL 6 2

Por medio de la cual se **NEGAR** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

En ese sentido, el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 no resulta vulnerado, puesto que la obligación de acatar los resultados de la consulta se predica respecto de los candidatos seleccionados en ella, mas no impide que, en desarrollo de acuerdos de coalición válidamente celebrados y previamente previstos, se integre una candidatura avalada por otro partido, sin alterar ni sustituir a quienes resultaron escogidos por la ciudadanía.

En consecuencia, esta Sala, tras el análisis integral de los hechos y del material probatorio obrante en el *dossier*, concluye que la inscripción se ajusta a la Constitución y a la ley. Por lo tanto, se procederá a **NEGAR** la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento de Sucre, inscrita por la Coalición denominada **"PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS"** para las elecciones a celebrarse el ocho (08) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** **NEGAR** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La presente decisión es **ADOPTADA Y NOTIFICADA EN ESTRADOS** en audiencia pública.

**ARTÍCULO TERCERO:** contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, y se tendrá plazo hasta las 5:00 p. m. del primer día calendario siguiente a la misma, para radicar su sustentación por escrito ante el Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Corporación o a través de los correos electrónicos [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) y [jhon.trujillo@cne.gov.co](mailto:jhon.trujillo@cne.gov.co) so pena de declararse desierto el recurso.

**ARTÍCULO CUARTO:** **REMITIR** copia íntegra del expediente y de la decisión (Visible en el artículo sexto) a los intervinientes en la actuación, al Ministerio Público y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por intermedio del Grupo de atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Corporación, a los siguientes correos electrónicos:

No.	Sujeto Procesal	Correo Electrónico
1.	RODRIGO ALFONSO RAMIREZ SALAZAR (Candidato)	<a href="mailto:roalrasa2005@gmail.com">roalrasa2005@gmail.com</a>
2.	NICOLÁS DANIEL GUERRERO MONTAÑOCRUZ (Candidato)	<a href="mailto:guerreronico2009@hotmail.com">guerreronico2009@hotmail.com</a>
3.	LINA CARDEE CALDERON SANCHEZ (Candidato)	<a href="mailto:lina.calderons.sei@gmail.com">lina.calderons.sei@gmail.com</a>
4.	Coalición denominada "PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS"	<a href="mailto:phavales2026@gmail.com">phavales2026@gmail.com</a>

Por medio de la cual se **NIEGA** la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la lista presentada por la COALICIÓN PACTO HISTÓRICO SUCRE UNITARIOS, conformada por los partidos MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", MOVIMIENTO POLÍTICO COLOMBIA HUMANA, PARTIDO DEL TRABAJO DE COLOMBIA, MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO, a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento de Sucre, para las elecciones a celebrarse el día ocho (8) de marzo de dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente con Radicado No. **CNE-E-DG-2026-001220**.

No.	Sujeto Procesal	Correo Electrónico
7.	NICOLAS FARFÁN NAMÉN (Solicitante)	<a href="mailto:nfarfann@hotmail.com">nfarfann@hotmail.com</a>
8.	MINISTERIO PÚBLICO	<a href="mailto:jcvillamil@procuraduria.gov.co">jcvillamil@procuraduria.gov.co</a> ; <a href="mailto:ahernandezv@procuraduria.gov.co">ahernandezv@procuraduria.gov.co</a> <a href="mailto:notificacionescne@procuraduria.gov.co">notificacionescne@procuraduria.gov.co</a>
9.	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	<a href="mailto:idcancongreso2026@registraduria.gov.co">idcancongreso2026@registraduria.gov.co</a>

**ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR** el presente acto administrativo, la página web del Consejo Nacional Electoral, [www.cne.gov.co](http://www.cne.gov.co).

**ARTÍCULO SEXTO: INFORMAR** a los interesados que el expediente de radicado No. CNE-E-CNE-E-DG-2026-001220., estará a disposición en el siguiente link: [CNE-E-DG-2026-001220](http://CNE-E-DG-2026-001220)

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Una vez adquiera firmeza el presente acto administrativo, **ARCHÍVESE** el expediente con radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.

### NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**CRISTIAN RICARDO QUIROZ ROMERO**  
Presidente

**ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ**  
Vicepresidente

**ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO**  
Magistrado Ponente

Esta decisión fue discutida en la Sala Plena Permanente extraordinaria a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026), adoptada y notificada en audiencia pública permanente del cuatro (04) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**Salvamento de voto:** Magistrada Maritza Martínez Aristizábal – Magistrado Benjamín Ortiz Torres

**Ausente por Comisión:** Magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda

**Vo.Bo:** Adriana Milena Charari Olmos, Secretaria Técnica de Sala.

**Revisó:** Reinel David De La Rosa Saurith – Técnico Operativo – Secretaria Técnica de Sala

**Revisó:** Shannery Chaparro Cuesta – Asesora – Despacho Ponente

**Proyectó:** Jhon Fredy Trujillo Infante – Profesional Especializado – Despacho Ponente

**Radicado No. CNE-E-DG-2026-001220.**

088



## RESOLUCIÓN SALA PLENA No. 0918 DE 2026 (07 de febrero)

Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**.

### EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el inciso quinto del artículo 108 y en los numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, y con fundamento en lo previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y las disposiciones aplicables del CPACA, y con base en los siguientes:

#### 1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

**1.1.** Mediante Resolución N° 0844 del 05 de febrero de 2026, esta Corporación decidió revocar la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026

Esta decisión se notificó en audiencia pública del 05 de febrero de 2026 y contra la misma se interpuso recurso de reposición por parte de los señores Humberto Rafael Méndez Rojas en calidad de apoderado del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón y Hernán Oveimer Cruz Mayusa en calidad de apoderado de María del Carmen Mayusa, a quienes la Sala Plena les otorgó el término para su presentación hasta antes de las cinco de la tarde (5:00 p. m.) del primer día hábil siguiente a la notificación.

**1.2.** Sin embargo, el día 06 de febrero de 2026, en la continuidad de la audiencia pública de adopción y notificación de decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, se puso de presente un requerimiento de los interesados y el Ministerio Público, en el que advierten inconsistencias entre la lectura realizada por la secretaria técnica de la Corporación al momento de notificar la decisión y el contenido del acto administrativo recibido vía correo electrónico.

**1.3.** En atención a las manifestaciones de los interesados y el Ministerio Público, la Sala Plena de esta Corporación profirió la Resolución 0893 del 06 de febrero de 2026 por medio de la cual se corrigió la irregularidad presentada en la notificación de la Resolución No. 0844 de 2026. En esa oportunidad, las siguientes personas presentaron recurso de reposición: • Humberto Rafael Méndez Rojas en calidad de apoderado del señor José Manuel Sandoval Garzón. • Camilo Andrés Araujo en calidad de apoderado del Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS. • Saúl Villar Jiménez y Nicolás Farfán Namén en calidad de solicitante.

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

## 2. CONSIDERACIONES

### 2.1. COMPETENCIA

Como se advirtió en el acto administrativo objeto de recurso, de conformidad con lo consagrado en el artículo 108 y el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral, es la autoridad facultada para conocer y decidir respecto de la revocatoria de los actos de inscripción de candidaturas cuando se acredite la configuración de causales de inhabilidades o la incursión en prohibiciones señaladas en la Ley y particularmente respecto del asunto de la controversia, como lo consagra el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

## 3. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

### 3.1. SOBRE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN

Los recursos administrativos constituyen instrumentos jurídicos de naturaleza procesal mediante los cuales los sujetos pasivos de una decisión administrativa pueden controvertir su contenido, ya sea ante la misma autoridad que la profirió o, cuando a ello hubiere lugar, ante su superior jerárquico, con el propósito de que el acto sea aclarado, modificado, adicionado o revocado. Tales mecanismos responden al principio de autotutela administrativa y garantizan el ejercicio efectivo del derecho de defensa y contradicción dentro de las actuaciones administrativas.

Atendiendo a la naturaleza jurídica del acto administrativo —llamado a producir efectos jurídicos y a incorporarse válidamente al ordenamiento legal—, los argumentos que sustentan los recursos deben ser de estricta índole jurídica, en tanto la eventual exclusión, modificación o expulsión del acto del sistema normativo solo puede obedecer a razones de legalidad y no a consideraciones subjetivas o de mera conveniencia.

En relación con los recursos procedentes contra las decisiones proferidas por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, normativa que regula el ejercicio de los recursos en sede administrativa, en armonía con los principios que rigen la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

No obstante, resulta importante señalar que el procedimiento de revocatoria de inscripción de candidatos no se encuentra reglado en el ordenamiento jurídico, pues en este tipo de asuntos prima la celeridad en las actuaciones administrativas de cara al cumplimiento de los términos previstos en el calendario electoral, sin dejar de observar las garantías procesales de cada ciudadano postulado al certamen, así como el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción.

Conforme a dicho marco normativo, contra las decisiones adoptadas por la Sala Plena procede el recurso de reposición, el cual es de conocimiento del mismo órgano colegiado que profirió el acto administrativo y tiene como finalidad que este sea aclarado, modificado, adicionado o

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

revocado, siempre que el recurrente cumpla con las cargas procesales exigidas por el ordenamiento jurídico.

**3.2. FALTA DE SUSTENTACIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS**

El ejercicio del derecho a interponer recursos administrativos se encuentra condicionado al cumplimiento de las cargas procesales establecidas por el ordenamiento jurídico, entre las cuales se destaca la obligación de sustentar oportunamente los motivos de inconformidad frente a la decisión recurrida. La sustentación constituye un presupuesto indispensable para que la autoridad administrativa pueda ejercer válidamente su función de control y revisión del acto impugnado.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo—, la interposición del recurso de reposición debe acompañarse de una exposición concreta y razonada de los fundamentos de hecho y de derecho que lo sustentan, carga procesal que no se satisface con la mera manifestación de inconformidad o con el anuncio del recurso durante la audiencia pública de notificación.

Cuando el recurso es interpuesto de manera verbal en audiencia pública, corresponde al recurrente cumplir con la carga de presentar su sustentación dentro del término legal otorgado para tal efecto, so pena de que el recurso sea declarado desierto. Esta exigencia responde a los principios de seguridad jurídica, economía procesal y eficacia de la función administrativa, en tanto evita la prolongación injustificada de la actuación sin un debate jurídico debidamente planteado.

**3.3. DESISTIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN**

El ordenamiento jurídico reconoce al recurrente la facultad de desistir de los recursos administrativos interpuestos, en tanto estos constituyen una manifestación del ejercicio del derecho de defensa y, por ende, se encuentran sometidos al principio dispositivo. En ese sentido, la voluntad del recurrente resulta determinante para la continuación o terminación del trámite del recurso, siempre que dicha manifestación se produzca de manera expresa, libre e inequívoca.

El artículo 81 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 dispone de forma expresa que los recursos administrativos podrán desistirse en cualquier tiempo, antes de que se profiera la decisión que los resuelva, previsión normativa que habilita a la autoridad administrativa para aceptar el desistimiento cuando este cumpla con las condiciones formales y materiales exigidas por la ley.

En este sentido, una vez presentado el desistimiento, se extingue el interés jurídico que justificaba la actuación administrativa en sede de recurso, lo que impide a la autoridad pronunciarse de fondo sobre las pretensiones inicialmente planteadas por el recurrente. En otras palabras, el desistimiento produce la terminación del trámite recursivo, en la medida en que desaparece el presupuesto esencial que habilita su estudio: la voluntad del administrado de controvertir el acto impugnado.



*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

En consecuencia, el desistimiento del recurso conlleva la imposibilidad de que la autoridad administrativa emita un pronunciamiento de fondo respecto de este, al desaparecer el interés jurídico que habilita su trámite, sin perjuicio de las competencias que, por mandato constitucional o legal, correspondan a la autoridad para pronunciarse de oficio cuando así lo exija el interés general o el orden público electoral.

- **Del desistimiento presentado por el ciudadano Saúl Villar Jiménez**

El 06 de febrero de 2026, dentro del plazo y tiempo otorgado, a través de correo electrónico, el señor Saúl Villar Jiménez, presentó desistimiento del recurso de reposición, así:

Ref: **Resolución 0844 de 2026**  
Expediente No **CNE-E-DG-2025.029934** y **CNE-E-DG-2025-029935** **SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA LISTA PACTO HISTÓRICO – FRENTE AMPLIO – CAMARA DE REPRESENTANTES POR EL DEPARTAMENTO DEL META**

**SAUL VILLAR JIMENEZ**, en mi calidad de solicitante dentro del expediente de la referencia, estando dentro de los términos que su Despacho me concede, por medio del presente escrito me permito **DESISTIR DEL RECURSO DE REPOSICION** impetrado durante la Audiencia del día inmediatamente anterior, en el entendido que estaba confundido con lo decidido en la Resolución 0844 de 2026.

En su escrito de desistimiento, el señor Saúl Villar Jiménez manifestó de manera expresa su deseo de desistir del recurso de reposición anunciado contra la Resolución 0844 de 2026, en audiencia pública del 05 de febrero de 2026. Dicha manifestación se produjo antes de que la autoridad administrativa adoptara decisión alguna de fondo respecto del recurso, lo que satisface el presupuesto temporal exigido por la normativa aplicable

Por lo tanto, se constata que la solicitud se ajusta a lo previsto en los artículos 81 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en tanto se trata de una decisión voluntaria del recurrente, formulada de manera expresa y sin que se evidencien circunstancias que permitan inferir la existencia de vicios en el consentimiento o ambigüedad en el alcance de su declaración. Por lo anterior, se procederá a aceptar el desistimiento del recurso de reposición presentado contra la Resolución N° 0844 del 05 de febrero de 2026 por parte del señor Saúl Villar Jiménez.

**4. CONTROL DE LEGALIDAD**

**4.1. ARGUMENTOS DE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD**

**4.1.1. Ministerio Público – Primer escrito (06 de febrero de 2026)**

En su escrito del 06 de febrero de 2026, el Ministerio Público interpuso recurso de reposición —y subsidiariamente solicitó la nulidad de lo actuado— contra la Resolución 0844 de 2026,

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

con fundamento, en esencia, en que: (i) la decisión fue notificada en audiencia pública el 05 de febrero de 2026, sin que previamente se le hubiera corrido traslado del expediente, lo cual no generó reparos en ese momento; (ii) el contenido de la Resolución 0844 fue remitido por correo electrónico el 06 de febrero de 2026 en horas de la mañana, y al contrastarlo con lo leído en audiencia advirtió diferencias sustanciales; (iii) tales diferencias constituirían un “hecho sobreviniente” que habilitaría la interposición del recurso por fuera de la oportunidad inicialmente prevista, con fundamento en el artículo 74 del CPACA y en el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 228 C.P.).

El Ministerio Público sostuvo que en la audiencia del 05 de febrero de 2026 se habría leído un párrafo que advertía a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la obligación de garantizar el derecho de participación de los candidatos y de las colectividades que integran la coalición, permitiéndoles proceder a la inscripción individual de sus listas dentro del término del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011. Sin embargo, el texto escrito de la Resolución 0844 remitido por correo solo contempló que “la agrupación inscriptora” podría modificar su lista dentro del término legal, condicionando cualquier recomposición al respeto de los resultados de la consulta del 26 de octubre de 2025.

A juicio del Ministerio Público, dicha diferencia afectó los derechos del candidato, de las colectividades y del propio Ministerio Público, pues la defensa se habría ejercido con base en lo leído en audiencia. Con apoyo en una providencia del Consejo de Estado, sostuvo que, en principio, prima la decisión proferida en audiencia.

En consecuencia, solicitó que se tramitara y resolviera el recurso de reposición “con miras a que se adopten las decisiones que en derecho correspondan y que garanticen los derechos fundamentales de las partes”, y, de manera subsidiaria, pidió la nulidad de lo actuado por vulneración del debido proceso (art. 29 C.P. y art. 3 CPACA) y del principio de congruencia de las decisiones.

**4.1.2. Ministerio Público – Segundo escrito (07 de febrero de 2026)**

En su escrito del 07 de febrero de 2026, el Ministerio Público sustentó un nuevo recurso de reposición, esta vez dirigido contra la Resolución 0893 de 2026, al considerar que la “corrección de la irregularidad en la notificación” allí adoptada era improcedente.

En cuanto a la oportunidad, señaló que interpuso el recurso en audiencia el 06 de febrero de 2026 y lo sustentó dentro del plazo fijado en el artículo cuarto de la Resolución 0893, esto es, hasta las 5:00 p.m. del 07 de febrero de 2026.

Sostuvo que la irregularidad que el CNE pretendió corregir mediante la Resolución 0893 se predicaba de la Resolución 0844, pues en la audiencia del 05 de febrero de 2026 se habría leído un párrafo que permitía a la agrupación política MAIS —y al propio candidato— inscribir listas o candidaturas de manera individual dentro del término del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011. A su juicio, los párrafos incluidos posteriormente en el texto escrito de la Resolución 0844 remitido por correo electrónico el 06 de febrero de 2026 eran distintos, en la medida en que solo habilitaban a la “agrupación inscriptora” a modificar su lista y exigían que cualquier recomposición respetara los resultados de la consulta.

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

Para el Ministerio Público, esa diferencia constituía un cambio material en la decisión y no un simple aspecto procedimental atribuible a la notificación. En tal sentido, consideró que la corrección efectuada con fundamento en el artículo 41 del CPACA era improcedente, pues —según su interpretación— dicho artículo solo permite corregir irregularidades antes de la expedición del acto, y en este caso la Resolución 0844 ya había sido adoptada y notificada. En consecuencia, sostuvo que lo procedente habría sido “rehacer la actuación desde el momento en que se cometió el yerro”, esto es, desde la adopción de la decisión.

Con base en lo anterior, solicitó al CNE revocar la Resolución 0893 de 2026 por estar —a su juicio— fundada en una norma inaplicable, y adoptar en su lugar las decisiones de fondo que garantizaran los derechos fundamentales y políticos frente a los recursos y nulidades pendientes.

#### **4.1.3. Solicitud de nulidad incorporada en el recurso del MAIS (07 de febrero de 2026)**

En su escrito del 07 de febrero de 2026, el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, actuando por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, solicitó la revocatoria directa y la declaratoria de nulidad por vía administrativa de las Resoluciones Sala Plena No. 0844 y 0893 de 2026, al considerar que se produjo una alteración sustancial del contenido decisorio notificado en estrados, con afectación grave de sus derechos políticos, garantías procedimentales y principios constitucionales.

Sostuvo que en la audiencia pública del 05 de febrero de 2026 la Secretaría Técnica dio lectura a un párrafo decisorio que habilitaba a las colectividades integrantes de la coalición a proceder a la inscripción individual de sus listas como consecuencia de la revocatoria, dentro del plazo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, mientras que el texto de la Resolución 0844 remitido por correo electrónico el 06 de febrero de 2026 no contenía dicha habilitación, sino que la reemplazó por dos párrafos que restringían y condicionaban la modificación o recomposición de la lista revocada al respeto de los resultados de la consulta del 26 de octubre de 2025 y fijaban como fecha límite el 08 de febrero de 2026.

A juicio del MAIS, esta divergencia no constituía un simple error formal o de estilo, sino una sustitución del sentido material de la decisión, pues el texto leído en audiencia reconocía expresamente la posibilidad de inscripción individual de listas, mientras que el texto remitido eliminó esa garantía e introdujo condiciones restrictivas que modificaban el marco de ejercicio del derecho a la participación política de la colectividad y de sus candidatos.

Agregó que la Resolución 0893 de 2026, al calificar lo leído en audiencia como un “error involuntario de lectura” y declarar como auténtico el texto remitido por correo, consolidó la alteración sustancial del resuelve notificado en estrados, sin cumplir el procedimiento de corrección de errores formales previsto en el artículo 45 del CPACA y sin garantizar contradicción, transparencia y congruencia.

Señaló que la Resolución 0893 sería nula de pleno derecho porque el CNE se habría extralimitado en la facultad de corrección formal, al modificar el sentido material de la Resolución 0844 ya notificada en estrados, vulnerando el debido proceso, la certeza jurídica y el derecho de defensa del MAIS. Además, alegó que la notificación en audiencia de la

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

Resolución 0844 generó una expectativa legítima que fue defraudada con la posterior modificación del contenido material de la decisión, desconociéndose los principios de buena fe, confianza legítima y acto propio.

Indicó también que se vulneró el derecho a la igualdad al otorgarse, según su criterio, un trato diferenciado injustificado frente al denominado “caso Guaviare” (Resolución 0788 de 2026), en el cual el CNE habría sido más flexible frente a la recomposición de listas. Finalmente, sostuvo que la incertidumbre jurídica derivada de la modificación posterior afectó directamente sus derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución, al impedirle planificar y ejecutar adecuadamente su estrategia electoral.

Con fundamento en lo anterior, solicitó principalmente la revocatoria integral de la Resolución 0893 de 2026, que se declarara como contenido decisorio válido y oponible el leído en audiencia el 05 de febrero de 2026 —incluyendo el párrafo que habilitaba la inscripción individual de listas—, que se ordenara a la Registraduría garantizar la participación política del MAIS permitiendo la recomposición e inscripción individual de listas, y, subsidiariamente, que se declarara la nulidad por vía administrativa del resuelve de la Resolución 0844 en lo relativo a la modificación de inscripciones, ordenándose una nueva decisión con audiencia y contradicción efectiva.

**4.1.4. Solicitud de nulidad presentada por el apoderado de José Manuel Sandoval Garzón (07 de febrero de 2026)**

En su escrito del 7 de febrero de 2026, el abogado Humberto Rafael Méndez Rojas, actuando como apoderado del candidato revocado José Manuel Sandoval Garzón (y en representación de los ciudadanos Hugo Velásquez Jaramillo y Saúl Villar Jiménez, quienes fungen como quejosos), solicitó la nulidad de la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026, al considerar que dicho acto habría incurrido en graves vicios procedimentales y sustanciales que afectan el debido proceso y la seguridad jurídica.

Sostuvo que la Resolución 0844 de 2026 “nació válidamente a la vida jurídica” en la audiencia pública del 5 de febrero de 2026, de modo que lo leído en estrados constituía el contenido auténtico, completo y vinculante de la decisión, siendo la notificación por correo electrónico del 6 de febrero un acto meramente complementario que no podía modificar su alcance. En ese sentido, afirmó que el Consejo Nacional Electoral no podía posteriormente calificar como “error de notificación” lo leído en audiencia, pues —a su juicio— el acto ya estaba perfeccionado y surtía plenos efectos jurídicos.

Adujo que la Resolución 0893 de 2026 no fue una simple corrección procedimental, sino una modificación material encubierta del resuelve de la Resolución 0844, al eliminar el párrafo leído en audiencia que, según su interpretación, habilitaba la inscripción individual de listas por parte de las colectividades integrantes de la coalición. A su juicio, dicha actuación vulneró el artículo 45 del CPACA, pues esta norma solo permite corregir errores aritméticos, mecanográficos o de transcripción, pero prohíbe cambios en el sentido material de la decisión. Sostuvo, además, que el artículo 41 del CPACA no era aplicable al caso, por cuanto —según su interpretación— dicha disposición solo autoriza el saneamiento de irregularidades antes de la expedición del acto, y no con posterioridad a su adopción y notificación en audiencia.



*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

En consecuencia, consideró que la Resolución 0893 carecía de fundamento jurídico y constituía una actuación arbitraria que alteró de manera indebida el alcance de la decisión ya notificada. El solicitante afirmó que esta actuación vulneró el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de congruencia, al existir una discrepancia sustancial entre lo leído en audiencia y lo posteriormente declarado como texto auténtico, generando incertidumbre y afectando la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho de defensa.

También alegó vulneración de la buena fe y la confianza legítima, al sostener que el candidato y las colectividades habrían ajustado su conducta y expectativas con base en lo leído en audiencia, y que la posterior corrección mediante la Resolución 0893 defraudó dichas expectativas. Finalmente, sostuvo que la actuación del CNE habría tenido efectos desproporcionados y regresivos sobre la participación política, en la medida en que restringió injustificadamente la posibilidad de recomposición de listas y afectó el pluralismo y la representación de minorías políticas.

Con fundamento en lo anterior, solicitó la nulidad de la Resolución 0893 de 2026, que se tuviera como válido y oponible únicamente el contenido de la decisión leído en audiencia el 5 de febrero de 2026, y que se adoptaran las medidas necesarias para restablecer los derechos presuntamente vulnerados.

**4.1.5. Argumentos de nulidad contenidos en el escrito del Movimiento Político Pacto Histórico (07 de febrero de 2026)**

En su escrito del 7 de febrero de 2026, el Movimiento Político Pacto Histórico formuló, de manera subsidiaria, una solicitud especial de revocatoria parcial y saneamiento de nulidades, al sostener que la Resolución 0844 de 2026 y la Resolución 0893 de 2026 habrían vulnerado garantías procedimentales y derechos políticos, configurándose vicios que afectarían la validez de lo actuado.

Afirmó que la resolución impugnada habría negado sin motivación suficiente el derecho del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS a postular y presentar candidatos, pese a que el calendario electoral aún permitía la recomposición de la lista como consecuencia de la revocatoria, lo que —a su juicio— configuraría un vicio de nulidad por desconocimiento del debido proceso y del derecho de participación política.

Sostuvo que, por razones de igualdad y coherencia decisonal, el CNE debía adicionar a las Resoluciones 0844 y 0893 de 2026 un párrafo similar al incluido en la Resolución de Sala Plena No. 0883 del 6 de febrero de 2026 (caso Pacto Verde – Guaviare), advirtiendo a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones derivada de la decisión debía garantizar el derecho a la participación de los candidatos debidamente inscritos y de las colectividades políticas que los postularon, previa modificación o escisión de la coalición dentro del término del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011; la ausencia de dicho párrafo sería, según el recurrente, una irregularidad sustancial que afectaría la validez de la actuación.

Adicionalmente, alegó que el artículo séptimo de las resoluciones impugnadas —que ordenó someter a reparto la investigación de la agrupación inscriptora por presunto incumplimiento del

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

artículo 107 de la Constitución y de los artículos 7º, 8º y 10º de la Ley 1475 de 2011— debía ser revocado por vulnerar la presunción de buena fe, pues, a su juicio, no existía motivación que desvirtuara dicha presunción, configurándose así un vicio que afectaría el debido proceso administrativo.

**4.2. RESOLUCIÓN SOBRE LAS SOLICITUDES DE NULIDAD**

Del análisis integral de las solicitudes de nulidad presentadas por el Ministerio Público, el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, el apoderado del candidato revocado y el Movimiento Político Pacto Histórico, la Sala advierte que sus reproches pueden agruparse en varios argumentos principales, los cuales se desarrollan y resuelven a continuación.

**(i) Presunta incongruencia entre lo leído en audiencia y el texto de la Resolución 0844 remitido por correo**

Los solicitantes sostienen, en términos coincidentes, que existiría una incongruencia sustancial entre el párrafo leído en audiencia el 05 de febrero de 2026 y el texto de la Resolución 0844 remitido por correo electrónico el 06 de febrero de 2026, lo cual, a su juicio, viciaría de nulidad la actuación por vulneración del debido proceso y del principio de congruencia.

Sobre este punto, la Sala precisa que el acto administrativo jurídicamente vinculante es el que fue formalmente aprobado por la Sala Plena, con base en la ponencia radicada, debatida y votada en sesión, y no el texto leído por la Secretaría Técnica en audiencia. La lectura por estrados constituye un acto de notificación y publicidad, pero no define ni sustituye la voluntad decisoria de la Corporación.

En el presente caso, el contenido aprobado por la Sala Plena fue el mismo que posteriormente se remitió por correo electrónico a las partes. La divergencia presentada en audiencia obedeció a un yerro material en la lectura, no a un cambio de decisión ni a una alteración del acto aprobado. En consecuencia, no existe incongruencia entre la decisión adoptada y la decisión notificada, pues ambas corresponden al mismo texto aprobado por la Corporación.

Adicionalmente, debe resaltarse que dicha irregularidad fue expresamente reconocida y corregida mediante la Resolución 0893 de 2026, con fundamento en el artículo 41 del CPACA, lo que descarta la configuración de un vicio sustancial que afecte la validez de lo actuado.

**(ii) Supuesta improcedencia de la corrección con fundamento en los artículos 41 y 45 del CPACA**

Varios solicitantes sostienen que la Resolución 0893 de 2026 habría sido expedida indebidamente, bien porque el artículo 45 del CPACA no permitiría modificar el sentido material de una decisión ya notificada, o porque —según su interpretación— el artículo 41 del CPACA solo autorizaría correcciones antes de la expedición del acto.

La Sala reitera que la Resolución 0893 no se fundamentó en el artículo 45 del CPACA (corrección de errores formales), sino en el artículo 41 del CPACA, el cual habilita expresamente a la administración para subsanar irregularidades en la actuación administrativa

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

antes de la firmeza del acto, cuando ello resulte necesario para garantizar el debido proceso, la publicidad y la certeza jurídica.

En este caso, lo corregido no fue el contenido material de la Resolución 0844, sino un vicio en su notificación por lectura, al haberse leído un párrafo que no hacía parte del texto aprobado. La Resolución 0893 se limitó a restablecer la fidelidad entre la decisión adoptada por la Sala Plena y su comunicación a las partes, sin alterar el sentido ni los efectos del acto.

Lejos de ser improcedente, la actuación del Consejo Nacional Electoral fue jurídicamente correcta, oportuna y garantista, pues se adoptó antes de la firmeza del acto y con fundamento en una norma habilitante expresa del CPACA.

**(iii) Alegada vulneración de la buena fe y la confianza legítima**

Los solicitantes afirman que la lectura en audiencia generó una expectativa legítima que fue posteriormente defraudada con la Resolución 0893. No obstante, la Sala precisa que la confianza legítima se predica de actos administrativos válidamente adoptados y notificados, no de errores materiales en la lectura de una decisión que no reflejan la voluntad real de la autoridad. En este caso, la voluntad decisoria de la Sala Plena siempre fue la contenida de manera clara y expresa en el texto aprobado de la Resolución 0844, el cual fue el mismo que se remitió por correo y luego se reiteró con la Resolución 0893, cuyo objeto fue aclarar que lo leído erradamente en audiencia no correspondía al contenido auténtico del acto.

Por tanto, no hubo defraudación de expectativas, sino una actuación orientada a corregir una irregularidad de notificación que, por el contrario, reforzó la seguridad jurídica y la transparencia, al garantizar que todas las partes conocieran con certeza el contenido auténtico del acto.

**(iv) Supuesta vulneración del derecho a la igualdad por comparación con el caso Guaviare**

Tanto el MAIS como el Movimiento Pacto Histórico alegan un trato desigual frente al denominado “caso Guaviare”. Este argumento no es de recibo en este expediente, por cuanto no existe identidad de objeto ni de supuesto fáctico entre los trámites. El presente asunto versa sobre la aplicación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 por desconocimiento del carácter obligatorio de una consulta en la circunscripción del Meta, mientras que el caso Guaviare corresponde a otro radicado, con hechos, lista y circunstancias distintas.

Cada circunscripción se decide en expediente separado y con análisis propio de los hechos y la prueba. En consecuencia, no se configura vulneración del derecho a la igualdad, ni se advierte trato arbitrario por parte de la Corporación.

El Movimiento Pacto Histórico sostiene que la Resolución 0844 habría debido incluir un párrafo similar al de la Resolución 0883 de 2026 (caso Guaviare), y que su ausencia constituiría un vicio de nulidad.

**ESPACIO EN BLANCO**

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

La Sala precisa que la motivación de la Resolución 0844 es suficiente, clara y congruente con el objeto del expediente. Además, es necesario precisar que el documento radicado, discutido en Sala y aprobado, conforme consta en la carpeta de radicación no contiene el párrafo relacionado en el escrito objeto de estudio.

**(v) Alegada afectación de derechos políticos fundamentales**

Los solicitantes sostienen que la actuación del Consejo Nacional Electoral habría afectado los derechos políticos de los candidatos y de las colectividades intervinientes. Sobre el particular, la Sala Plena estima necesario reiterar, con mayor precisión y profundidad, que la revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón no es consecuencia de la corrección de la notificación efectuada mediante la Resolución 0893 de 2026, sino que deriva directamente de la configuración objetiva de la causal prevista en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, esto es, el desconocimiento de los resultados obligatorios de la consulta interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2025.

Dicha causal no constituye una creación discrecional de esta Corporación, sino el desarrollo normativo de un mandato constitucional expreso contenido en el artículo 107 Superior, que impone a las organizaciones políticas el deber de respetar los mecanismos democráticos de selección interna cuando deciden acudir a ellos. En esa medida, la consecuencia jurídica de revocatoria de la inscripción opera como una garantía de la integridad del proceso electoral y de la voluntad popular expresada en la consulta, y no como una restricción arbitraria de derechos políticos.

En este contexto, resulta pertinente recordar —como se expuso en la Resolución 0843 de 2026— que el derecho a ser elegido no tiene carácter absoluto, sino que se encuentra necesariamente condicionado al cumplimiento de las reglas constitucionales y legales que estructuran la competencia democrática, aseguran la igualdad entre los contendientes y preservan la transparencia del sistema representativo. Tales reglas no constituyen meros formalismos, sino garantías sustanciales del principio democrático, dirigidas a evitar ventajas indebidas, impedir la manipulación de los mecanismos de selección y proteger la confianza pública en las instituciones electorales.

Así, cuando una candidatura se inscribe al margen del procedimiento democrático previamente adoptado por las propias colectividades —como ocurre cuando se incorpora a una persona que no participó en la consulta que se invoca como fuente de legitimidad de la lista—, la revocatoria de dicha inscripción no solo resulta jurídicamente procedente, sino constitucionalmente necesaria para salvaguardar la voluntad de los electores y el carácter vinculante de los resultados consultivos.

Adicionalmente, la actuación adelantada por el Consejo Nacional Electoral no menoscabó las garantías políticas ni procesales de los intervinientes. Por el contrario, se garantizó la publicidad efectiva del acto administrativo, primero con la notificación en audiencia y posteriormente con la remisión del texto auténtico de la Resolución 0844 de 2026, y luego con la reiteración de la notificación mediante la Resolución 0893 de 2026, lo cual permitió a todas las partes conocer con certeza el alcance de la decisión y ejercer plenamente su derecho de defensa a través de los recursos previstos en la ley.



*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

En consecuencia, lejos de evidenciar una afectación ilegítima de derechos políticos, lo que se constata es el ejercicio legítimo de las competencias constitucionales y legales del Consejo Nacional Electoral para preservar el orden electoral, la obligatoriedad de las consultas y la expresión auténtica de la voluntad popular, dentro de un procedimiento que respetó las garantías del debido proceso administrativo.

**(vi) Crítica al artículo séptimo de las resoluciones impugnadas**

El Pacto Histórico cuestiona que se hubiera ordenado someter a reparto la investigación de la agrupación inscriptora. Esta actuación no afecta la validez de la Resolución 0844 ni configura nulidad del trámite, pues corresponde al ejercicio de competencias de control propias del CNE. Además, la apertura de un trámite de investigación no constituye sanción ni prejuizgamiento, sino un mecanismo de verificación dentro del marco legal.

**4.3. IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD EN SEDE ADMINISTRATIVA**

Del examen integral, sistemático, cronológico y contextual del expediente CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935 se advierte que la actuación administrativa tuvo origen en las solicitudes de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, las cuales fueron conocidas y tramitadas por esta Corporación en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de vigilancia, control y suprema inspección de la organización electoral, particularmente las previstas en los artículos 108, 109 y 265 de la Constitución Política.

Estas disposiciones atribuyen al Consejo Nacional Electoral la función de velar por la legalidad de los procesos electorales, la observancia del régimen de partidos y movimientos políticos, y el cumplimiento de las reglas que gobiernan la inscripción de candidaturas y la conformación de listas, competencias desarrolladas normativamente en la Ley 1475 de 2011.

Las solicitudes formuladas dieron lugar a una actuación administrativa objetiva de control de legalidad electoral, orientada exclusivamente a verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales que condicionan la validez de las inscripciones, en particular aquellos derivados del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, relativo al carácter obligatorio de los resultados de las consultas como mecanismo de selección de candidaturas. Este tipo de actuación se caracteriza por su finalidad preventiva y verificatoria, en la medida en que no persigue la imposición de sanciones, la formulación de cargos ni la atribución de responsabilidad subjetiva —propios de los procedimientos administrativos sancionatorios—, sino la preservación de la integridad del orden constitucional electoral y la voluntad popular expresada en la consulta.

El Ministerio Público, en ejercicio de su función de intervención, presentó recurso de reposición y, de manera subsidiaria, solicitó la nulidad de lo actuado, con fundamento en una supuesta irregularidad derivada de la diferencia entre lo leído en audiencia el 05 de febrero de 2026 y el texto de la Resolución 0844 de 2026 remitido por correo electrónico el 06 de febrero de 2026,

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

al considerar vulnerados el debido proceso y el principio de congruencia de las decisiones administrativas.

El Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, mediante su apoderado, también formuló recurso de reposición y, subsidiariamente, solicitud de revocatoria directa y nulidad por vía administrativa de las Resoluciones 0844 y 0893 de 2026, alegando que la corrección efectuada habría alterado el sentido material de la decisión notificada en audiencia, vulnerando el debido proceso, la buena fe, la confianza legítima y el derecho a la igualdad frente a otros casos.

El apoderado del candidato revocado José Manuel Sandoval Garzón, actuando en representación de sus representados, solicitó la nulidad de la Resolución 0893 de 2026, al sostener que la decisión adoptada en audiencia habría nacido a la vida jurídica con la lectura por estrados y que, por ende, la corrección realizada con fundamento en el artículo 41 del CPACA sería improcedente y vulneraría el debido proceso y la seguridad jurídica.

El Movimiento Político Pacto Histórico, de manera subsidiaria, solicitó el saneamiento de nulidades y la revocatoria parcial de las Resoluciones 0844 y 0893 de 2026, al considerar que la decisión habría debido incluir un párrafo similar al de otro expediente y cuestionando la orden de someter a reparto una investigación administrativa.

Al respecto, resulta jurídicamente necesario precisar que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA (Ley 1437 de 2011) no consagra un incidente autónomo de nulidad del trámite en sede administrativa, ni atribuye a las autoridades administrativas la potestad de declarar la nulidad de las actuaciones o de los actos administrativos que profieren, una vez estos han sido adoptados. El diseño normativo del CPACA distingue de manera clara entre los mecanismos de autocontrol administrativo —como la corrección, aclaración o revocatoria directa en los estrictos términos del artículo 93— y los medios de control judicial, reservando estos últimos de forma exclusiva a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en desarrollo del principio de separación funcional entre administración activa y control jurisdiccional de legalidad.

En efecto, conforme a los artículos 137 y 138 del CPACA, la nulidad de los actos administrativos, tanto de carácter general como particular, constituye un medio de control de naturaleza judicial, cuyo conocimiento corresponde de manera exclusiva y excluyente al juez contencioso administrativo. Esta regla responde a la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos, presunción que solo puede ser desvirtuada mediante pronunciamiento judicial.

La Corte Constitucional ha reiterado que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho constituye el mecanismo idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de los actos administrativos de contenido particular, descartando la posibilidad de que dicha valoración se realice de manera definitiva en sede administrativa. De igual forma, el Consejo de Estado ha precisado que las autoridades administrativas no pueden declarar la nulidad de sus propios actos, salvo en los eventos taxativos de revocatoria directa.

En consecuencia, esta Corporación carece de competencia material y funcional para declarar la nulidad del trámite o de los actos administrativos proferidos dentro de la presente actuación, razón por la cual las solicitudes subsidiarias de nulidad presentadas por el Ministerio Público,

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

el MAIS, el apoderado del candidato revocado y el Movimiento Pacto Histórico resultan jurídicamente improcedentes y serán rechazadas por esa causa.

No obstante lo anterior, y en observancia de los principios que rigen la función administrativa —en especial los de legalidad, debido proceso, imparcialidad, publicidad, eficacia y responsabilidad, consagrados en el artículo 3 del CPACA—, esta Sala procedió a ejercer un control de legalidad integral de la actuación administrativa, entendido como un deber funcional inherente al ejercicio de la competencia, orientado a verificar que el trámite se hubiera adelantado conforme al ordenamiento constitucional y legal, y a constatar que no se hubiere configurado irregularidad sustancial alguna que comprometiera la validez del procedimiento o afectara de manera material el ejercicio de los derechos fundamentales invocados.

En desarrollo de dicho control, consta en el expediente que la actuación se adelantó conforme al procedimiento aplicable a las solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas: se recibieron las solicitudes, se surtió el trámite interno de análisis jurídico, se proyectó la decisión para consideración de Sala Plena y se adoptó la Resolución 0844 de 2026 en sesión debidamente convocada, con deliberación y votación de los magistrados, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales del CNE.

Frente a los reproches comunes de los solicitantes —basados en la diferencia entre lo leído en audiencia y el texto remitido por correo— el control de legalidad permite concluir que dicha situación no constituye un vicio sustancial del procedimiento ni puede viciar lo actuado, por las siguientes razones:

i.) La decisión administrativa se perfecciona con su adopción por la Sala Plena, con base en el texto formalmente aprobado, y no con la lectura por estrados realizada por la Secretaría Técnica.

ii.) La discrepancia advertida en audiencia correspondió a un yerro en la notificación, el cual fue corregido oportunamente mediante la Resolución 0893 de 2026, con fundamento en el artículo 41 del CPACA, antes de la firmeza del acto, sin alterar el contenido material de la decisión aprobada por la Sala Plena, que fue precisamente la que se remitió a las partes.

iii.) La corrección de la notificación no afectó el derecho de defensa ni el debido proceso, por cuanto permitió que los interesados conocieran con certeza el texto auténtico del acto y ejercieran plenamente los recursos procedentes, como efectivamente ocurrió con la interposición de los recursos de reposición por parte del Ministerio Público, el MAIS, el apoderado del candidato y el Pacto Histórico.

iv.) No se advierte indefensión material de ninguno de los intervinientes, pues tuvieron acceso al contenido de la decisión, pudieron controvertirla y sus argumentos fueron analizados en esta sede administrativa.

v.) El derecho de audiencia y defensa se garantizó adecuadamente a través de la notificación del acto que decidió de fondo la solicitud, la posibilidad de interponer recursos en sede administrativa y, además, con la reiteración de la notificación expresa

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

de la Resolución 0844 mediante la Resolución 0893 de 2026, reforzando la publicidad y las garantías procesales.

Por lo anterior, una vez realizado el control de legalidad de la actuación administrativa, se concluye que el trámite se adelantó dentro del marco de las competencias constitucionales y legales del Consejo Nacional Electoral, con observancia de los principios de legalidad, publicidad, contradicción, razonabilidad y eficacia, sin que se advierta la existencia de vicios sustanciales que comprometan la validez de lo actuado.

En mérito de lo expuesto, esta Sala rechazará por improcedentes las solicitudes subsidiarias de nulidad presentadas por el Ministerio Público, el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, el apoderado del candidato revocado y el Movimiento Pacto Histórico, y mantendrá en firme las actuaciones administrativas surtidas dentro del expediente CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.

**5. PROCEDENCIA Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN SUSTENTADOS**

**5.1. Del recurso de reposición interpuesto y sustentado por el señor Nicolás Farfán Námén**

El recurrente fundamenta buena parte de su inconformidad en la existencia de un supuesto “*parágrafo primero del artículo primero*” de la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, al cual atribuye efectos jurídicos que, a su juicio, habilitarían la apertura de un nuevo período de inscripción o la recomposición de listas por fuera de los supuestos previstos en la Ley 1475 de 2011.

Al respecto, la Sala Plena considera necesario precisar, como cuestión preliminar y determinante, que el parágrafo al que hace referencia el señor Nicolás Farfán Namén no forma parte del texto auténtico, aprobado y notificado de la Resolución 0844 de 2026.

En efecto, tal como quedó establecido en la Resolución de Sala Plena No. 0893 de 2026, la mención de dicho parágrafo obedeció a un error material en la lectura por estrados al momento de la notificación en audiencia del 05 de febrero de 2026, yerro que fue debidamente explicado, corregido y subsanado por esta Corporación al amparo del artículo 41 del CPACA, ordenándose la correcta notificación del acto con su parte resolutive auténtica.

De conformidad con lo anterior, el texto vinculante de la Resolución 0844 de 2026 no contiene la advertencia ni el parágrafo invocado por el recurrente, sino únicamente los párrafos que obran en el acto formalmente radicado, debatido y aprobado por la Sala Plena, los cuales se limitan a señalar: (i) el término para modificar la lista conforme al inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, y (ii) el deber de respetar los resultados de la consulta del 26 de octubre de 2025 en caso de que la agrupación decida modificar o recomponer la inscripción.

En consecuencia, el reproche del recurrente parte de una premisa fáctica incorrecta, pues no es jurídicamente posible controvertir efectos de un parágrafo inexistente en el acto



*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

administrativo recurrido. Al no existir el supuesto normativo sobre el cual se edifica el cargo, este carece de objeto y, por tanto, debe ser desestimado.

Así las cosas, la Sala Plena no encuentra mérito para reponer la decisión con fundamento en un párrafo que no integra la Resolución 0844 de 2026 y cuya lectura equívoca fue oportunamente corregida mediante la Resolución 0893 de 2026.

## **5.2. Del recurso de reposición interpuesto y sustentado por el apoderado de José Manuel Sandoval Garzón**

El apoderado del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón fundamenta su recurso de reposición, esencialmente, en dos ejes: **(i)** la presunta vulneración del debido proceso derivada de una supuesta modificación sustancial entre lo leído en audiencia pública el 05 de febrero de 2026 y el texto de la Resolución No. 0844 de 2026 remitido por correo electrónico, y **(ii)** la alegada improcedencia jurídica de la corrección efectuada mediante la Resolución No. 0893 de 2026, al sostener que cualquier ajuste al acto administrativo debió tramitarse exclusivamente por la vía de la revocatoria directa.

En relación con el primer planteamiento, la Sala Plena considera necesario hacer varias precisiones de carácter sustancial y procedimental. En primer lugar, en el marco del procedimiento administrativo y, particularmente, de la dinámica deliberativa propia de este Consejo Nacional Electoral, el acto administrativo se entiende jurídicamente adoptado cuando ha sido debatido y aprobado por la Sala Plena, con base en la ponencia radicada por el despacho competente y sometida a votación. La lectura por estrados en audiencia pública constituye un acto de comunicación y notificación, mas no el momento constitutivo de la decisión. En esa medida, el contenido vinculante de la Resolución No. 0844 de 2026 es aquel que fue formalmente radicado, discutido y aprobado por la Corporación, y no el que, por error involuntario, eventualmente se leyó en audiencia por parte de la Secretaría Técnica.

En segundo término, como quedó ampliamente desarrollado en la Resolución No. 0893 de 2026, la lectura realizada en audiencia incurrió en un yerro material de notificación, al incorporar un párrafo que no hacía parte del texto aprobado por la Sala Plena. Este tipo de irregularidades, lejos de ser excepcionales en la práctica administrativa, encuentran una vía expresa de corrección en el artículo 41 del CPACA, norma que habilita a la autoridad para subsanar errores en la actuación administrativa antes de que el acto adquiriera firmeza, con el fin de garantizar la legalidad, la transparencia y el debido proceso.

En este caso, la corrección no implicó alteración alguna del contenido decisorio ni del sentido material de la Resolución 0844, sino que se limitó a restablecer la fidelidad entre el texto aprobado y su notificación, asegurando que los sujetos procesales conocieran con certeza el alcance real de la decisión.

Desde esta perspectiva, no se configura la alegada vulneración del debido proceso. Por el contrario, la actuación desplegada por esta Corporación fortaleció las garantías procesales, al corregir oportunamente una irregularidad en la comunicación del acto y permitir que los interesados ejercieran de manera plena su derecho de defensa, como efectivamente ocurrió con la interposición del presente recurso de reposición. La coherencia exigida por el

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

ordenamiento no se predica entre lo leído por error y lo finalmente notificado, sino entre la decisión adoptada por la autoridad competente y el acto administrativo formalmente expedido, lo cual se mantuvo incólume en este caso.

En cuanto al segundo reproche, relativo a la supuesta improcedencia de la Resolución No. 0893 de 2026 por no haberse acudido a la revocatoria directa, la Sala Plena estima necesario precisar la diferencia conceptual y funcional entre ambas figuras. La revocatoria directa, prevista en los artículos 93 y siguientes del CPACA, es un mecanismo excepcional para retirar del ordenamiento actos administrativos que han creado situaciones jurídicas particulares o que adolecen de vicios sustanciales, y exige el cumplimiento de requisitos estrictos, incluida —en ciertos casos— la anuencia del titular del derecho afectado.

Sin embargo, lo ocurrido en este asunto no se encuadra en ese supuesto. La Resolución 0893 de 2026 no modificó, revocó ni sustituyó la Resolución 0844 de 2026; simplemente corrigió una irregularidad en su notificación por estrados, con fundamento en el artículo 41 del CPACA. Esta disposición otorga a la administración una potestad de saneamiento procesal destinada a evitar que errores formales o procedimentales comprometan la validez o la eficacia de sus actuaciones. Pretender que toda corrección de notificación deba tramitarse mediante revocatoria directa vaciaría de contenido el artículo 41 del CPACA y haría inoperante la facultad de corrección de irregularidades, generando un formalismo excesivo e innecesario contrario a los principios de eficacia y economía administrativa.

Adicionalmente, debe resaltarse que al momento de expedirse la Resolución 0893 de 2026, la Resolución 0844 aún no se encontraba en firme, de manera que la administración conservaba plena competencia para corregir vicios procedimentales en su notificación. En consecuencia, la actuación adelantada fue jurídicamente procedente, proporcional y respetuosa del marco legal vigente, sin que pueda calificarse como una extralimitación de funciones ni como una actuación arbitraria.

Finalmente, respecto de la alegada afectación al derecho fundamental a ser elegido y a la confianza legítima, esta Corporación estima necesario precisar con mayor detalle que la revocatoria de la inscripción del candidato no es consecuencia de la corrección de la notificación, sino del acaecimiento objetivo de la causal prevista en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, esto es, el desconocimiento de los resultados obligatorios de la consulta popular celebrada el 26 de octubre de 2025. Dicha causal tiene un carácter imperativo y vinculante para la autoridad electoral, en tanto materializa el mandato constitucional contenido en el artículo 107 Superior y desarrolla el principio democrático que exige el respeto por la voluntad de los electores expresada a través de mecanismos de selección interna.

En materia electoral, si bien el derecho a ser elegido constituye una garantía fundamental estrechamente ligada al pluralismo político y a la participación ciudadana, no tiene un carácter absoluto ni irrestricto. Su ejercicio se encuentra necesariamente condicionado al cumplimiento de las reglas constitucionales y legales que estructuran la competencia democrática, aseguran la igualdad entre los contendientes y protegen la integridad del proceso electoral.

Tales reglas no son meras formalidades, sino garantías sustanciales que buscan evitar ventajas indebidas, preservar la transparencia del sistema representativo y salvaguardar la

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

confianza pública en las instituciones electorales. En ese sentido, cuando un candidato o una organización política incumple las condiciones normativas para participar en la contienda — como ocurre con el desconocimiento de los resultados de una consulta obligatoria—, la restricción del derecho a ser elegido no solo resulta legítima, sino necesaria para la preservación del orden constitucional y democrático.

De igual manera, la invocación de la confianza legítima no puede ser utilizada para consolidar situaciones contrarias al ordenamiento jurídico ni para impedir la aplicación de normas de orden público que tutelan bienes jurídicos superiores. La confianza legítima opera como un límite a actuaciones arbitrarias o sorpresivas de la administración, pero no puede erigirse en obstáculo para el cumplimiento de mandatos constitucionales y legales imperativos, particularmente en materia electoral, donde están en juego principios como la transparencia, la igualdad en la contienda, la obligatoriedad de los resultados de las consultas y, en última instancia, la expresión auténtica de la voluntad popular. Admitir lo contrario supondría subordinar el interés general y el principio democrático a expectativas individuales, lo cual sería incompatible con la naturaleza misma del derecho electoral.

En el presente caso, no se afectaron las garantías fundamentales, la actuación adelantada por el Consejo Nacional Electoral se orientó a garantizar la publicidad efectiva del acto administrativo, la certeza sobre su contenido y el pleno ejercicio del derecho de defensa del recurrente. La corrección de la notificación, lejos de menoscabar sus derechos, permitió que el interesado conociera con precisión el alcance de la decisión y pudiera controvertirla mediante el recurso de reposición que ahora se resuelve. Ello evidencia que el procedimiento observado no solo fue conforme a derecho, sino que reforzó las garantías propias del debido proceso administrativo y la legitimidad constitucional de la actuación electoral.

En mérito de lo expuesto, los cargos formulados por el recurrente carecen de fundamento jurídico suficiente para desvirtuar la legalidad de la Resolución No. 0844 de 2026, razón por la cual no están llamados a prosperar y, en consecuencia, dicha decisión será confirmada en todas sus partes.

**5.3. Del recurso de reposición interpuesto y sustentado por el Movimiento Político Pacto Histórico**

Los representantes legales del Movimiento Político Pacto Histórico interponen recurso de reposición contra la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, sin embargo, su memorial incurre en una confusión relevante al entremezclar hechos, debates y consideraciones propias de otros expedientes que cursan ante esta Corporación, distintos al que aquí se decide. Así, el recurrente desarrolla argumentos relativos al inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política (límite del 15% para coaliciones) y plantea situaciones vinculadas con la lista de candidatos a la Cámara por Guaviare, asuntos que no hacen parte del presente trámite y que se adelantan en expedientes diferentes.

En consecuencia, antes de abordar el fondo del recurso, la Sala Plena estima imprescindible delimitar con precisión el tema de decisión de este proceso. El expediente CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935 se contrae exclusivamente a la revocatoria de la inscripción de una única candidatura: la del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, adoptada en la Resolución 0844 de 2026, por configurarse la causal consistente en el desconocimiento de los resultados obligatorios de la consulta del 26 de octubre de 2025, al acreditarse su inclusión en la lista sin haber participado en dicho mecanismo.

Esta precisión es determinante porque las alegaciones del recurrente sobre coaliciones en abstracto, el umbral del 15%, o la situación de otras listas y circunscripciones, resultan ajenas al objeto de este expediente y, por tanto, no pueden ser decididas en este Acto. Ello no implica desatención de sus planteamientos, sino su correcta reconducción procesal a los trámites que les corresponden, en respeto del principio de congruencia y del debido proceso administrativo.

Hecha esta delimitación, el recurso puede reconducirse, en lo pertinente para este asunto, a los siguientes planteamientos: (i) la supuesta compatibilidad entre consulta y coalición con fundamento en acuerdos internos; (ii) la invocación genérica del derecho a coaligarse y de jurisprudencia sobre coaliciones; (iii) la tesis de que no se habría desconocido la consulta porque —según el recurrente— se habría respetado el orden de votación de quienes sí participaron; y (iv) alegaciones de taxatividad, autonomía partidista y supuesta falta de motivación, acompañadas de solicitudes para “mantener íntegra la lista” y permitir postulaciones posteriores.

Frente a estos argumentos, la Sala Plena reitera, con apoyo en las consideraciones de la Resolución 0844 de 2026, que el punto jurídico central de este expediente no es la validez general de las coaliciones ni su compatibilidad con las consultas, sino el cumplimiento de un mandato constitucional y legal específico: cuando las organizaciones políticas deciden acudir a una consulta como mecanismo de selección de candidaturas, el resultado de dicho mecanismo es obligatorio y vinculante para la inscripción posterior.

Esta obligación deriva directamente del artículo 107 de la Constitución Política y del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, normas que la Resolución 0844 desarrolla de manera expresa. En ellas se consagra que las consultas populares internas o interpartidistas constituyen mecanismos democráticos de selección cuya fuerza normativa no puede ser desconocida por acuerdos políticos posteriores, avales discrecionales o recomposiciones de lista. De allí que la consecuencia jurídica prevista por el legislador —la revocatoria de la inscripción— se active cuando se acredita que un candidato fue incluido sin haber participado en la consulta que se invoca como fuente de legitimidad de la lista.

En el presente caso, la Resolución 0844 tuvo por demostrado, con base en el acervo probatorio del expediente, que el ciudadano José Manuel Sandoval Garzón no participó en la consulta del 26 de octubre de 2025, pese a haber sido inscrito como candidato dentro de la lista que se presentó como resultado de dicho mecanismo. Este hecho no es un aspecto menor ni meramente formal: compromete el núcleo del principio democrático, pues altera la voluntad de los electores que participaron en la consulta y desnaturaliza el procedimiento de selección adoptado por las propias organizaciones políticas.

En cuanto a la alegada compatibilidad entre consulta y coalición, aun si se aceptara como marco general, dicha compatibilidad no desvirtúa la obligación principal que rige este caso. La discusión no es si las colectividades podían coaligarse —cuestión que la Resolución 0844 no



*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

controvierte— sino si, habiendo optado por una consulta para definir candidaturas, era jurídicamente admisible inscribir a una persona que no participó en ese mecanismo. Frente a ello, la respuesta que se desprende del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 es negativa. Los acuerdos internos, cláusulas estatutarias o decisiones posteriores de la coalición no pueden sustituir ni flexibilizar el requisito democrático ya activado por la consulta.

Sobre el argumento de que se habría respetado el orden de votación de quienes sí participaron, esta Corporación advierte que dicho planteamiento resulta insuficiente para enervar la causal aplicada. El deber no se agota en respetar el orden de los participantes, sino en garantizar que solo quienes participaron en la consulta integren la lista resultante. Admitir lo contrario vaciaría de contenido el carácter obligatorio del mecanismo consultivo y permitiría que las organizaciones políticas instrumentalicen la consulta sin sujetarse a sus resultados, lo cual es precisamente lo que el legislador buscó evitar al consagrar la consecuencia de revocatoria.

Frente a las alegaciones de taxatividad e interpretación restrictiva, la Sala precisa que la Resolución 0844 no creó ni aplicó analógicamente una inhabilidad, sino que ejerció una competencia administrativa electoral expresamente prevista en la ley para el evento de desconocimiento de la consulta. La consecuencia jurídica aplicada —revocatoria de la inscripción— no deriva de una sanción punitiva, sino del incumplimiento de un presupuesto de validez de la candidatura dentro del procedimiento electoral escogido por las propias colectividades.

En relación con la supuesta falta de motivación, la Sala reitera que la Resolución 0844 expone de manera clara los antecedentes, identifica el problema jurídico, desarrolla la normativa aplicable (Constitución y Ley 1475 de 2011) y explica por qué la inclusión de un candidato no participante en la consulta configura la causal de revocatoria. La motivación es, por tanto, suficiente y congruente con el objeto del expediente, sin que sea exigible pronunciarse en este trámite sobre asuntos ajenos como el umbral del 15% o listas de otras circunscripciones.

En suma, reconducido el recurso al objeto real de este expediente y valorados sus argumentos a la luz de las consideraciones de la Resolución 0844 de 2026, la Sala Plena concluye que no se desvirtúa la configuración de la causal aplicada ni la validez de la decisión adoptada, razón por la cual el recurso de reposición no está llamado a prosperar.

**5.4. Del recurso de reposición interpuesto y sustentado por el Ministerio Público**

El Ministerio Público interpone recurso de reposición contra la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, sin controvertir el fundamento material de la decisión —esto es, la revocatoria de la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón por desconocimiento de los resultados obligatorios de la consulta del 26 de octubre de 2025—, sino centrando su inconformidad en un aspecto estrictamente procedimental: la presunta incongruencia entre el párrafo leído en audiencia pública el 05 de febrero de 2026 y el texto de la Resolución 0844 remitido por correo electrónico el 06 de febrero de 2026, lo cual, a su juicio, habría vulnerado el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de congruencia de las decisiones administrativas.

ESPACIO EN BLANCO

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

Sobre el particular, la Sala Plena considera necesario precisar, en primer lugar, que en el marco del procedimiento administrativo y, en especial, de la dinámica deliberativa propia de este Consejo, el acto administrativo se entiende jurídicamente adoptado cuando ha sido debatido y aprobado por la Sala Plena, con fundamento en la ponencia formalmente radicada por el despacho competente y sometida a votación. La lectura por estrados en audiencia pública constituye un acto de comunicación y notificación, mas no el momento constitutivo ni definitorio del contenido material de la decisión. En consecuencia, el texto jurídicamente vinculante de la Resolución No. 0844 de 2026 es aquel que fue formalmente radicado, discutido y aprobado por esta Corporación, y no la lectura realizada por la Secretaría Técnica al momento de su notificación en audiencia.

En segundo término, como quedó se desarrolló en la Resolución Sala Plena No. 0893 de 2026, la lectura efectuada en audiencia incurrió en un yerro material de notificación, al incluir un párrafo que no hacía parte del texto aprobado por la Sala Plena. Dicha irregularidad fue oportunamente corregida con fundamento en el artículo 41 del CPACA, norma que faculta a la autoridad administrativa para subsanar irregularidades, con el fin de garantizar la legalidad, la transparencia y el debido proceso. Esta corrección no implicó modificación alguna del contenido decisorio ni del sentido material de la Resolución 0844, sino que se limitó a restablecer la fidelidad entre el texto aprobado y su notificación, asegurando que los interesados conocieran con certeza el alcance real de la decisión.

Desde esta perspectiva, no se configura la alegada vulneración del debido proceso. Por el contrario, la actuación adelantada por el Consejo Nacional Electoral fortaleció las garantías procesales, al corregir de manera oportuna una irregularidad en la comunicación del acto y permitir que los sujetos procesales ejercieran plenamente su derecho de contradicción, como efectivamente ocurrió con la interposición del presente recurso de reposición. La coherencia exigida por el ordenamiento no se predica entre lo leído por error y lo finalmente notificado, sino entre la decisión adoptada por la autoridad competente y el acto administrativo formalmente expedido, lo cual se mantuvo incólume en este caso.

En cuanto a la invocación que hace el Ministerio Público de la jurisprudencia del Consejo de Estado para sostener que “prima lo leído en audiencia”, la Sala Plena estima necesario precisar su alcance. La providencia citada por el recurrente —Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 23 de mayo de 2016— se limita a establecer que las decisiones proferidas oralmente en audiencia se entienden notificadas en estrados (art. 202 CPACA) y que, en tal caso, no es exigible una notificación posterior por correo electrónico (art. 203 CPACA) para efectos del cómputo de términos.

Sin embargo, dicha decisión no sostiene que lo leído en audiencia adquiriera firmeza automática, ni que la autoridad pierda la posibilidad de corregir irregularidades en la actuación administrativa antes de la ejecutoria del acto, conforme al artículo 41 del CPACA. Tampoco equipara la lectura en audiencia con la firmeza del acto administrativo ni prohíbe el saneamiento de vicios procedimentales en la notificación. En consecuencia, el precedente invocado por el Ministerio Público no resulta aplicable para sostener que una lectura errónea en audiencia impida su corrección o haga inmodificable el contenido del acto administrativo formalmente aprobado por la Sala Plena.

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

Adicionalmente, debe resaltarse que al momento de expedirse la Resolución 0893 de 2026, la Resolución 0844 de 2026 no se encontraba en firme, de manera que la administración conservaba plena competencia para corregir vicios procedimentales en su notificación. Por tanto, la actuación adelantada fue jurídicamente procedente, proporcional y respetuosa del marco legal vigente, sin que pueda calificarse como una extralimitación de funciones ni como una actuación arbitraria.

Finalmente, frente a la alegada afectación al derecho de defensa, esta Corporación advierte que lejos de menoscabar las garantías de las partes, la corrección de la notificación permitió que los interesados conocieran nuevamente y con precisión el contenido auténtico del acto. En ese sentido, la actuación adelantada por el Consejo Nacional Electoral reforzó —y no debilitó— las garantías propias del debido proceso administrativo.

En consecuencia, los argumentos planteados por el Ministerio Público en su recurso de reposición no desvirtúan la legalidad ni la validez de la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, razón por la cual el recurso no está llamado a prosperar y dicha decisión será confirmada en todas sus partes.

**5.5. Del recurso de reposición interpuesto y sustentado por el apoderado del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS**

El apoderado del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS interpone recurso de reposición contra las Resoluciones Sala Plena No. 0844 y 0893 de 2026. Sin embargo, su escrito mezcla hechos, debates y precedentes propios de otros expedientes que cursan ante esta Corporación —en particular el denominado “caso Guaviare—, lo que impone, como cuestión previa, delimitar con precisión el objeto del presente trámite.

El expediente CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935 se contrae exclusivamente a la revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del Meta, por haberse acreditado su inclusión en la lista sin haber participado en la consulta interpartidista del 26 de octubre de 2025, configurándose la causal prevista en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. En consecuencia, los planteamientos del recurrente relativos a otros expedientes y circunscripciones son ajenos al de decisión de este proceso y no pueden ser decididos en esta sede, sin perjuicio de su análisis en los trámites que les correspondan.

Reconducido el recurso al objeto real de este expediente, el recurrente centra su inconformidad en cuatro aspectos: (i) una supuesta indebida corrección formal de la Resolución 0844 mediante la Resolución 0893; (ii) la alegada vulneración de los principios de buena fe y confianza legítima; (iii) una presunta violación del derecho a la igualdad por comparación con el caso Guaviare; y (iv) la afectación de derechos políticos fundamentales.

Frente al primer cargo, la Sala Plena precisa que la actuación adelantada no se fundó en el artículo 45 del CPACA (corrección de errores formales), sino en el artículo 41 del mismo estatuto, que habilita a la administración para subsanar irregularidades en la actuación antes de la firmeza del acto cuando ello resulte necesario para garantizar el debido proceso, la publicidad y la certeza jurídica. En este caso, la discrepancia presentada en audiencia

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

correspondió a un yerro material en la notificación, pues se leyó un párrafo que no hacía parte del texto aprobado por la Sala Plena. La Resolución 0893 de 2026 no modificó el contenido decisorio de la Resolución 0844, sino que restableció la fidelidad entre el texto aprobado y el texto notificado, asegurando que los interesados conocieran el acto auténtico.

En cuanto a la alegada vulneración de la buena fe y la confianza legítima, esta Corporación advierte que tales principios se predicán de actos administrativos válidamente adoptados y notificados, no de errores materiales de notificación que no reflejan la voluntad real de la autoridad. La voluntad decisoria de la Sala Plena siempre fue la contenida en el texto formalmente aprobado de la Resolución 0844 de 2026; la lectura equivocada en audiencia no creó un acto nuevo ni consolidó situación jurídica alguna, sino que configuró una irregularidad en la comunicación del acto. La corrección oportuna mediante la Resolución 0893, antes de la ejecutoria, fortaleció la seguridad jurídica y permitió el pleno ejercicio del derecho de defensa, por lo que lejos de vulnerar la buena fe, la actuación fue coherente, transparente y garantista.

Respecto de la supuesta vulneración del derecho a la igualdad por comparación con el “caso Guaviare”, el argumento no es atendible en este expediente. No existe identidad de objeto ni de supuesto fáctico entre ambos trámites: el presente asunto versa sobre el desconocimiento del carácter obligatorio de una consulta (art. 7 Ley 1475), mientras que el caso Guaviare corresponde al radicado CNE-E-DG-2026-003816 y CNE-E-DG-2026-003950 con hechos, circunscripción y circunstancias distintas. En efecto, la Resolución 0788 del 04 de febrero de 2026, relacionada por el recurrente, decidió de fondo lo concerniente al cumplimiento de la cuota de género en la lista inscrita por Cundinamarca (el recurrente incurre en un yerro al afirmar que concierne al departamento de Guaviare), por lo que se refiere a asuntos y argumentos de revocatoria absolutamente diferentes a los estudiados en el presente expediente.

Finalmente, frente a la alegada afectación de derechos políticos fundamentales, la Sala reitera que la revocatoria de la candidatura de José Manuel Sandoval Garzón no es consecuencia de la corrección de la notificación, sino de la configuración de la causal prevista en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, esto es, el desconocimiento de los resultados obligatorios de la consulta del 26 de octubre de 2025. El derecho a ser elegido no es absoluto y se encuentra condicionado al cumplimiento de las reglas constitucionales y legales que estructuran la competencia democrática y la voluntad popular. En el presente caso, la actuación del Consejo Nacional Electoral garantizó la publicidad efectiva del acto y el ejercicio pleno del derecho de defensa del recurrente, lo que refuerza la constitucionalidad y legalidad del procedimiento adelantado.

Por las razones expuestas, y reconducido el recurso al objeto real de este expediente, los argumentos planteados por el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS no desvirtúan la configuración de la causal aplicada ni la validez de la decisión adoptada; en consecuencia, el recurso de reposición no está llamado a prosperar.

**5.6. Del recurso de reposición interpuesto y sustentado por el Movimiento Político Pacto Histórico**

ESPACIO EN BLANCO



*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

El Movimiento Político Pacto Histórico interpone recurso de reposición contra la Resolución Sala Plena No. 0844 de 2026, sosteniendo, en síntesis, que: (i) la consulta del 26 de octubre de 2025 sería compatible con la conformación posterior de coaliciones electorales; (ii) la Cláusula Décima Sexta del acuerdo de consulta habilitaría la inscripción de listas en coalición siempre que se respetara el orden de los resultados consultivos; (iii) la Resolución 0844 habría interpretado de manera restrictiva el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011; (iv) se habría vulnerado el derecho constitucional a coaligarse conforme al artículo 262 de la Constitución Política; (v) la revocatoria implicaría una indebida extensión de inhabilidades; y (vi) existiría un trato desigual frente a otros casos decididos por esta Corporación.

El núcleo del asunto no radica en la validez abstracta de las coaliciones, sino en el cumplimiento del carácter obligatorio de los resultados de la consulta cuando esta ha sido escogida como mecanismo de selección de candidaturas. El artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 no es una norma dispositiva ni meramente programática, sino una regla imperativa que condiciona la actuación de los partidos y movimientos políticos que deciden acudir a este mecanismo.

En el presente caso, el Pacto Histórico optó voluntariamente por realizar una consulta el 26 de octubre de 2025 para seleccionar sus candidaturas a cuerpos colegiados. Al hacerlo, se sometió a las consecuencias jurídicas previstas en la ley, entre ellas, que los resultados serían vinculantes y obligatorios para la conformación de las listas. La obligatoriedad de la consulta no puede ser relativizada ex post mediante acuerdos internos ni cláusulas contractuales que flexibilicen su alcance.

En consecuencia, la Sala no interpreta restrictivamente el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, sino que lo aplica en su sentido natural y sistemático: quien convoca y participa en una consulta queda jurídicamente vinculado por sus resultados, sin que sea admisible desconocerlos mediante posteriores estrategias de coalición.

El recurrente invoca la Cláusula Décima Sexta del acuerdo de consulta para sostener que era posible conformar coaliciones posteriores respetando el orden de los resultados consultivos. Al respecto, la Sala precisa que los acuerdos internos de las organizaciones políticas no pueden prevalecer sobre la Constitución y la ley. Ninguna cláusula contractual entre partidos puede flexibilizar o reinterpretar el mandato legal del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. En todo caso, la misma disposición referida por el movimiento político hace referencia a que, si bien se pueden conformar coaliciones, se debe respetar el orden de votación obtenido en la consulta, en ese sentido, las candidaturas de ciudadanos que no participaron debían ubicarse en renglón posterior a quienes si fueron apoyados en el proceso consultivo.

Además, la aplicación de la Cláusula Décima Sexta no puede conducir a un resultado contrario a la finalidad de la consulta: si la consulta se realizó para seleccionar candidaturas del Pacto Histórico, sus resultados no podían ser alterados mediante la inclusión de candidatos que no participaron en dicho mecanismo. La coalición posterior no puede convertirse en un instrumento para eludir la obligatoriedad de la consulta.

El derecho a coaligarse no autoriza a desconocer los resultados de una consulta previamente realizada. En otras palabras, la coalición es constitucionalmente admisible, pero debe ser

*“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.*

compatible con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la consulta cuando esta ha sido utilizada como mecanismo de selección de candidaturas.

En el caso concreto, la coalición Pacto Histórico – Frente Amplio Meta no es cuestionada por su sola existencia, sino porque permitió la inclusión de un candidato (José Manuel Sandoval Garzón) que no participó en la consulta, contrariando el mandato legal y los propios compromisos asumidos por el movimiento al convocarla.

El recurrente sostiene que la revocatoria de la inscripción implicaría crear o extender una inhabilidad no prevista en la ley. No obstante, esta interpretación es incorrecta, pues la decisión de la Sala no se basa en la aplicación de una inhabilidad, sino en el incumplimiento de un requisito legal de validez de la inscripción, derivado del carácter obligatorio de la consulta. No se está sancionando al candidato; se está verificando el cumplimiento de las reglas que condicionan la inscripción válida de candidaturas.

La revocatoria no constituye una sanción personal ni una restricción indebida de derechos políticos, sino la consecuencia jurídica prevista por el ordenamiento cuando se desconocen las reglas del proceso democrático interno.

Por otra parte, se reitera que la Sala no desconoce que, en abstracto, consulta y coalición pueden coexistir. Sin embargo, dicha compatibilidad está condicionada a que la coalición respete íntegramente los resultados de la consulta en los renglones asignados al partido que acudió a este mecanismo. En ese sentido, la inclusión de un candidato que no participó en la consulta vulneró esa premisa básica, pues alteró el alcance de los resultados consultivos, afectando la voluntad de los electores que participaron en dicho mecanismo.

La revocatoria de la candidatura de José Manuel Sandoval Garzón no deriva de una decisión discrecional ni de un formalismo excesivo, sino de la configuración objetiva de la causal prevista en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. Teniendo en cuenta que el derecho a ser elegido no es absoluto y se encuentra condicionado al cumplimiento de las reglas constitucionales y legales que estructuran la competencia democrática y la voluntad popular.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER** y, en consecuencia, **CONFIRMAR** en todas sus partes la decisión contenida en las Resoluciones No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y la No. 0893 del 06 de febrero de 2026, proferidas por esta Corporación, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente proveído. Expediente identificado con los radicados **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**.

**ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE** las solicitudes de nulidad presentadas, de conformidad con lo expuesto en el acápite de “Control de legalidad”.

**ARTÍCULO TERCERO: ACEPTAR EL DESISTIMIENTO EXPRESO** del recurso de reposición anunciado por el ciudadano Saúl Villar Jiménez.

“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente decisión **SE ADOPTA Y SE NOTIFICA EN ESTRADOS** en Audiencia Pública del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO QUINTO: COPIAS.** Remitir copia integra de la decisión a los intervinientes en la actuación, al Ministerio Público y a la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Corporación, a los siguientes correos electrónicos:

No.	Sujeto Procesal	Correo Electrónico
1.	José Manuel Sandoval Garzón (Candidato)	<a href="mailto:jmanuelsandoval@hotmail.es">jmanuelsandoval@hotmail.es</a>
2.	María Del Carmen Mayusa Cruz (Candidata)	<a href="mailto:camaypra@gmail.com">camaypra@gmail.com</a>
3.	César Augusto Díaz Medina (Candidato)	<a href="mailto:cesaraugustodiaz31@gmail.com">cesaraugustodiaz31@gmail.com</a>
4.	Coalición Denominada “PACTO HISTÓRICO - FRENTE AMPLIO”	<a href="mailto:phavales2026@gmail.com">phavales2026@gmail.com</a>
5.	Hugo Velásquez Jaramillo (Solicitante)	<a href="mailto:hugovelasquezmeta@hotmail.com">hugovelasquezmeta@hotmail.com</a>
6.	Saúl Villar Jiménez (Solicitante)	<a href="mailto:vilmarasesores@hotmail.com">vilmarasesores@hotmail.com</a>
7.	Nicolas Farfán Namén (Solicitante)	<a href="mailto:nfarfann@hotmail.com">nfarfann@hotmail.com</a>
8.	Jorge Bula González	<a href="mailto:jbula.elec@gmail.com">jbula.elec@gmail.com</a>

- Al Ministerio Público, a los correos electrónicos: [artobo@procuraduria.gov.co](mailto:artobo@procuraduria.gov.co); [pgarciaa@procuraduria.gov.co](mailto:pgarciaa@procuraduria.gov.co); [notificaciones.cne@procuraduria.gov.co](mailto:notificaciones.cne@procuraduria.gov.co)
- A la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los correos electrónicos: [dirgeselectoral@registraduria.gov.co](mailto:dirgeselectoral@registraduria.gov.co)

**ARTÍCULO SEXTO:** Por intermedio del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de esta Corporación **LÍBRENSE** los oficios respectivos para el cumplimiento de lo ordenado en este proveído.

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** Contra la presente resolución no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR** el presente acto administrativo, en la página web del Consejo Nacional Electoral: [www.cne.gov.co](http://www.cne.gov.co)

ESPACIO EN BLANCO

“Por medio de la cual se **RESUELVEN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN** en el sentido de **NO REPONER** las Resoluciones de Sala Plena No. 0844 del 5 de febrero de 2026 y 0893 del 06 de febrero de 2026, mediante las cuales: i.) se revocó la inscripción del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones de Congreso de la República del 8 de marzo de 2026; ii.) Se corrigió la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026; y se dictan otras disposiciones. Expediente **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**”.

**ARTÍCULO NOVENO: ARCHIVAR** el expediente con radicados No. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Dada en Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026).



**CRISTIAN RICARDO QUIROZ ROMERO**  
Presidente



**ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ**  
Vicepresidente



**MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL**  
Magistrada Ponente

Esta decisión fue discutida en sala plena permanente, del 07 de febrero de 2026, adoptada y notificada en audiencia pública permanente del 07 de febrero de 2026.

**Aprueban:** Magistrado Alfonso Campo Martínez  
Magistrada Maritza Martínez Aristizábal (Ponente)  
Magistrado Benjamín Ortiz Torres  
Magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga  
Magistrado Cristian Ricardo Quiroz Romero  
Conjuez Jesús María Carrillo Ballesteros.  
Conjuez Javier Ignacio Castro Monsalve.  
Conjuez Alberto Rojas Rios.

**Salvamento de voto:** Magistrada Fabiola Márquez Grisales.  
Magistrado Álvaro Echeverry Londoño  
Magistrada Alba Lucía Velásquez

**Ausente por comisión:** Magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda.

**Vo.Bo:** Adriana Milena Charari Olmos, Secretaria Técnica de Sala *Adriana Milena Charari Olmos*

**Revisó:** Reynel David de la Rosa Saurith – Técnico Operativo – Secretaría Técnica de Sala

**Aprobó:** María Nelly Martínez - Asesora– Despacho Ponente *MN*

**Revisó:** Juan Diego Rojas- Profesional Especializado – Despacho Ponente **JDRM**

**Radicado No.** CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935



## RESOLUCIÓN SALA PLENA No. 0893 DE 2026 (06 de febrero)

Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**.

### EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 265 de la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011 y 1437 de 2011, y con base en los siguientes:

#### 1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

**1.1.** Mediante la Resolución Sala Plena No. 0844 del cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026), esta Corporación decidió revocar la inscripción del ciudadano **José Manuel Sandoval Garzón** a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935.

**1.2.** La precitada Resolución fue adoptada y notificada en audiencia del día cinco (05) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

**1.3.** El día 06 de febrero de 2026, en la continuidad de la audiencia pública de adopción y notificación de decisión de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, se puso de presente un requerimiento de los interesados y el Ministerio Público, en la que advierten inconsistencias entre la lectura realizada por la secretaria técnica de la Corporación al momento de notificar la decisión y el contenido del acto administrativo recibido vía correo electrónico.

#### 2. CONSIDERACIONES

El artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que la autoridad, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla.

La corrección de actos administrativos constituye, entonces, un instrumento que el ordenamiento jurídico pone a disposición tanto de las partes como de la autoridad para ajustar aquellas decisiones en las que se haya incurrido en algún tipo de error, o con irregularidades.

El debido proceso administrativo, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política y desarrollado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), exige que toda actuación y decisión de la Administración garantice a los interesados conocimiento cierto, oportunidad real de contradicción y ejercicio pleno del derecho de defensa, bajo parámetros de publicidad, transparencia, seguridad jurídica y confianza legítima.

*“Las notificaciones constituyen un mecanismo procesal que habilita el ejercicio del derecho de defensa, entendidas como el acto material de comunicación, que*

“Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**”.

*permite poner en conocimiento de las partes o de terceros interesados las decisiones proferidas dentro del trámite administrativo. (...) la notificación en cualquiera de sus modalidades, no constituye un trámite accesorio, sino una garantía instrumental esencial para la vigencia efectiva del debido proceso, en tanto es el mecanismo a través del cual el administrado conoce formalmente el contenido del acto administrativo y, a partir de ello, puede ejercer los medios de impugnación, alegación o cumplimiento que el ordenamiento prevé<sup>1</sup>”.*

En el marco del CPACA, los deberes de publicidad y comunicación de las decisiones se articulan con los principios que rigen la función administrativa y el procedimiento, en particular: (i) la prevalencia del derecho sustancial con observancia de las formas propias de cada actuación; (ii) la buena fe y la confianza legítima; (iii) la imparcialidad y la igualdad de armas; y (iv) la eficacia, que no puede lograrse a costa de sacrificar garantías mínimas de contradicción y defensa. En consecuencia, la notificación debe ser fiel, íntegra y congruente con el contenido real del acto administrativo, de manera que el interesado pueda identificar con claridad qué se decidió, en qué términos, con qué efectos y desde cuándo se activan las cargas procesales correlativas.

Bajo este entendimiento, una notificación indebida, esto es, aquella que por *error material* transmite un contenido distinto al realmente adoptado, como lo es una lectura por estrados que no corresponde al texto del acto o que incorpora elementos inexistentes en el proyecto sometido a deliberación, compromete de manera directa el debido proceso, por cuanto genera incertidumbre objetiva sobre el alcance de la decisión y puede afectar: (i) la comprensión adecuada de sus efectos; (ii) la determinación del *dies a quo* para el cómputo de términos; y (iii) el ejercicio oportuno e informado de los mecanismos de defensa.

Por tanto, cuando en una audiencia se verifica un yerro material que impide afirmar que el contenido notificado corresponde al acto realmente adoptado, lo jurídicamente procedente, en clave de debido proceso, es restablecer la publicidad real del acto, dejando constancia del error, precisando el contenido auténtico y asegurando que la notificación se practique correctamente.

El Consejo Nacional Electoral como máxima autoridad de la Organización Electoral y en virtud de las facultades constitucionales que le han sido otorgadas, profirió la Resolución No. 0844 del 05 de febrero de 2026, por medio de la cual, se decidió revocar la inscripción del ciudadano **José Manuel Sandoval Garzón** a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935.

Sin embargo, el día 06 de febrero de 2026, en la continuación de la audiencia pública de adopción y notificación de decisión, los intervinientes y el Ministerio Público advirtieron inconsistencias entre la lectura realizada por la Secretaria Técnica de la Corporación al momento de notificar la decisión y el contenido del acto administrativo recibido vía correo electrónico.

En ese sentido, se puso de presente que en audiencia pública se leyó que la resolución contenía el siguiente párrafo:

*“ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, inscrito en el marco de la coalición denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de*

<sup>1</sup> Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2021 Expediente D-13732. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

“Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**”.

1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

*PARÁGRAFO: ADVERTIR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que la modificación de inscripciones producto de la presente decisión deberá garantizar el derecho a la participación de los candidatos inscritos y de las colectividades políticas que integraban la coalición, de manera que, como consecuencia de la revocatoria de las listas inscritas en dicha modalidad, estas puedan proceder a la inscripción individual de sus listas, en los términos y dentro del plazo previsto para la modificación de inscripciones por revocatoria consagrado en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011”.*

Sin embargo, el acto administrativo que le fue remitido vía correo electrónico carecía de dicha advertencia y, en su lugar, contiene lo siguiente:

*“ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, inscrito en el marco de la coalición denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.*

*PARÁGRAFO PRIMERO: La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.*

*PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso en que la referida agrupación política relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer la inscripción revocada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025”.*

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de evitar que se configure el defecto procedimental absoluto por la violación del debido proceso como consecuencia de la indebida notificación, esta Corporación procede a pronunciarse sobre los hechos manifestados por los intervinientes y, en este sentido, precisa que la ponencia radicada para la Sala Plena el día 06 de febrero de 2026, dentro del asunto CNE-E-DG-2025-030866 fue discutida dentro del orden del día 05 de febrero de 2026 y que el texto sometido a votación no tuvo ninguna variación durante el trámite de su aprobación por la Sala Plena.

Al respecto, es necesario verificar la trazabilidad que tuvo al interior de esta Corporación la Resolución No. 0844 de 2026. En primer lugar, se tiene que el expediente con radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935 primariamente le correspondía para su análisis y trámite al despacho del Magistrado Álvaro Echeverry. No obstante, el proyecto de Resolución fue derrotado en Sala Plena dentro de la primera sesión de la audiencia pública de adopción y notificación de decisión, por lo que le correspondió al despacho siguiente en la lista presentar ponencia sustitutiva que decide de fondo el asunto.

En razón a lo anterior, el despacho de la Magistrada Maritza Martínez Aristizábal radicó el proyecto definitivo de ponencia sobre el asunto discutido en el expediente con radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935, a través de correo electrónico dirigido a [radicacioncne@cne.gov.co](mailto:radicacioncne@cne.gov.co) , perteneciente a la Secretaría Técnica de Sala Plena, tal como se expone en la siguiente imagen:

ESPACIO EN BLANCO

**“Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**”.**

Word

Modo de accesibilidadImprimirBuscarLector interactivo

CNE  
Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIÓN No. XXXX de 2026  
(05 de febrero)

Por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN** como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el inciso quinto del artículo 108 y en los numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, y con fundamento en lo previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y las disposiciones aplicables del CPACA, y con base en los siguientes:

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

1.1. El día 12 de noviembre de dos mil veinticinco (2025), el ciudadano Hugo Velásquez Jaramillo allegó un escrito ante esta Corporación, recibido bajo radicado No. CNE-E-DG-2025-029934, en el cual solicitó la revocatoria de inscripción de la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento de Meta, inscrita por la Coalición denominada "PACTO HISTÓRICO - FRENTE AMPLIO" conformada por el Movimiento

Página 1 de 35

100% Proporcionar comentarios a Microsoft

Radicacion - Martínez UrgenteGeneral/All Employees (unrestricted)

DMDespacho MartinezPara: @ Radicacion CNEJue 5/02/2026 15:22

CNE-E-DG-2025-029934 y C...Descargado

Buenos tardes

Me permito radicar la ponencia en mención de carácter URGENTE

CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.

Gracias

Despacho HM. Maritza Martínez Aristizábal

ResponderReenviar

Word

Modo de accesibilidadImprimirBuscarLector interactivo

CNE  
Consejo Nacional Electoral

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, en el marco de la coalición denominada "Pacto Histórico - Frente Amplio", por configurarse la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.

PARÁGRAFO PRIMERO: La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.

Resolución XXXX de XXXXPágina 34 de 35

"Por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano **JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN** como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados **CNE-E-DG-2025-029934** y **CNE-E-DG-2025-029935**".

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso en que la referida agrupación política relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer la inscripción revocada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADOPCIÓN Y NOTIFICACIÓN. La presente decisión es **ADOPTADA Y NOTIFICADA EN ESTRADOS** en Audiencia Pública.

ARTÍCULO TERCERO: RECURSO. Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la

Página 33 de 35

100% Proporcionar comentarios a Microsoft

Radicacion - Martínez UrgenteGeneral/All Employees (unrestricted)

DMDespacho MartinezPara: @ Radicacion CNEJue 5/02/2026 15:22

CNE-E-DG-2025-029934 y C...Descargado

Buenos tardes

Me permito radicar la ponencia en mención de carácter URGENTE

CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.

Gracias

Despacho HM. Maritza Martínez Aristizábal

ResponderReenviar

Como puede observarse, el despacho de la Magistrada Maritza Martínez Aristizábal solamente radicó un único proyecto de ponencia que resuelve el asunto relacionado en el expediente CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935.

En la imagen referenciada puede evidenciarse que el proyecto de resolución radicado no contiene el párrafo que fue leído en audiencia pública por error involuntario de la secretaria técnica. En contraste, está acreditado que la ponencia que fue radicada, debatida en Sala Plena y aprobada por los miembros del Consejo Nacional Electoral fue la referenciada en las imágenes anteriores.

Es importante precisar que la corrección de una notificación indebida no exige la declaratoria de nulidad del acto administrativo ni implica alterar el sentido material de la decisión, por el contrario, se enmarca en las potestades de dirección del procedimiento y de corrección de irregularidades propias de la actuación administrativa, orientadas a garantizar la efectividad del debido proceso y la seguridad jurídica. En ese orden, cuando el error recae sobre la diligencia de notificación por estrados (por lectura incongruente con el acto), resulta jurídicamente necesario y proporcionado



*“Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935”.***

disponer su subsanación, a fin de asegurar que los interesados conozcan con certeza el contenido exacto de la decisión y, a partir de allí, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y certeza.

En consecuencia, para materializar las garantías del debido proceso frente a la indebida notificación, y teniendo en cuenta que el acto administrativo no está en firme lo que hace que proceda el artículo 41 del CPACA, corresponde: (i) reconocer el yerro material ocurrido en la lectura y notificación; (ii) precisar que el contenido auténtico y vinculante es el que obra en el texto formal del acto administrativo. Lo anterior permite preservar la validez del acto administrativo, corregir la irregularidad procedimental en la notificación y restablecer la publicidad efectiva exigida por el debido proceso, evitando incertidumbres sobre efectos, términos y alcance de la decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR** la irregularidad en la notificación de la Resolución 0844 de 2026 *“por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935”.*

**ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR** en estrados la Resolución 0844 de 2026 *“por medio de la cual se **REVOCA** la inscripción del ciudadano JOSÉ MANUEL SANDOVAL GARZÓN como candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción territorial del departamento del Meta, con ocasión de las elecciones del 8 de marzo de 2026, por el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con los radicados CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935”,* cuya parte resolutive señala:

*“ARTÍCULO PRIMERO: **REVOCAR** la inscripción de la candidatura del ciudadano José Manuel Sandoval Garzón a la Cámara de Representantes por la circunscripción del departamento del Meta, en el marco de la coalición denominada “Pacto Histórico – Frente Amplio”, por configurarse la causal prevista en el artículo 10 de la Ley 130 de 1994 y en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011, consistente en el desconocimiento de los resultados de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025.*

*PARÁGRAFO PRIMERO: La agrupación inscriptora podrá modificar su lista de candidatos en el término previsto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, esto es un (1) mes antes de las elecciones, término que para el presente certamen electoral se cumple el 08 de febrero de 2026.*

*PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso en que la referida agrupación política relacionada en el presente acto administrativo decida modificar y/o recomponer la inscripción revocada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, deberá realizarlo conforme a los resultados obtenidos en la consulta celebrada el día 26 de octubre de 2025.*

**ARTÍCULO SEGUNDO: ADOPCIÓN Y NOTIFICACIÓN.** La presente decisión es **ADOPTADA Y NOTIFICADA EN ESTRADOS** en Audiencia Pública.

“Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**”.

**ARTÍCULO TERCERO: RECURSO.** *Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, y deberá sustentarse a través del correo electrónico [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) y [juan.rojas@cne.gov.co](mailto:juan.rojas@cne.gov.co) hasta antes de las 5:00 pm del primer día hábil siguiente a la notificación.*

**ARTÍCULO CUARTO: COPIAS.** *Remitir copia integra de la decisión a los intervinientes en la actuación, al Ministerio Público y a la Registraduría Nacional del Estado Civil por intermedio del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de la Corporación, a los siguientes correos electrónicos:*

No.	Sujeto Procesal	Correo Electrónico
1.	José Manuel Sandoval Garzón (Candidato)	<a href="mailto:jmanuelsandoval@hotmail.es">jmanuelsandoval@hotmail.es</a>
2.	María Del Carmen Mayusa Cruz (Candidata)	<a href="mailto:camaypra@gmail.com">camaypra@gmail.com</a>
3.	César Augusto Díaz Medina (Candidato)	<a href="mailto:cesaraugustodiaz31@gmail.com">cesaraugustodiaz31@gmail.com</a>
4.	Coalición Denominada “PACTO HISTÓRICO - FRENTE AMPLIO”	<a href="mailto:phavales2026@gmail.com">phavales2026@gmail.com</a>
5.	Hugo Velásquez Jaramillo (Solicitante)	<a href="mailto:hugovelasquezmeta@hotmail.com">hugovelasquezmeta@hotmail.com</a>
6.	Saul Villar Jiménez (Solicitante)	<a href="mailto:vilmarasesores@hotmail.com">vilmarasesores@hotmail.com</a>
7.	Nicolas Farfán Namén (Solicitante)	<a href="mailto:nfarfann@hotmail.com">nfarfann@hotmail.com</a>
8.	Jorge Bula González	<a href="mailto:jbula.elec@gmail.com">jbula.elec@gmail.com</a>

- *Al Ministerio Público, a los correos electrónicos: [artobo@procuraduria.gov.co](mailto:artobo@procuraduria.gov.co); [pgarciaa@procuraduria.gov.co](mailto:pgarciaa@procuraduria.gov.co); [notificaciones.cne@procuraduria.gov.co](mailto:notificaciones.cne@procuraduria.gov.co)*
- *A la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los correos electrónicos: [dirgeselectoral@registraduria.gov.co](mailto:dirgeselectoral@registraduria.gov.co)*

**ARTÍCULO QUINTO:** *Por intermedio del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de esta Corporación LÍBRENSE los oficios respectivos para el cumplimiento de lo ordenado en este proveído.*

**ARTÍCULO SEXTO:** *Una vez adquiera firmeza el presente Acto Administrativo, ARCHÍVESE el expediente con radicados No. CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935.*

**ARTÍCULO SÉPTIMO:** *Una vez en firme la decisión, ordenar que por intermedio del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental de esta Corporación se someta a reparto la investigación de la agrupación inscriptora de la candidatura que se revoca en la presente actuación administrativa por el incumplimiento a lo previsto en el artículo 107 de la Constitución Política de 1991, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 7°, 8° y 10° de la Ley 1475 de 2011.*

**ARTÍCULO OCTAVO:** *PUBLICAR el presente acto administrativo, en la página web del Consejo Nacional Electoral: [www.cne.gov.co](http://www.cne.gov.co)”.*

“Por medio de la cual se **CORRIGE LA IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN** de la Resolución No. 0844 del dos mil veintiséis (2026), dentro del expediente No. **CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025- 029935**”.

**ARTÍCULO TERCERO: ADOPCIÓN Y NOTIFICACIÓN.** La presente decisión es **ADOPTADA Y NOTIFICADA EN ESTRADOS** en Audiencia Pública.

**ARTÍCULO CUARTO: RECURSO.** Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, y deberá sustentarse a través del correo electrónico [atencionalciudadano@cne.gov.co](mailto:atencionalciudadano@cne.gov.co) y [juan.rojas@cne.gov.co](mailto:juan.rojas@cne.gov.co) hasta antes de las 5:00 pm del primer día calendario siguiente a la notificación.

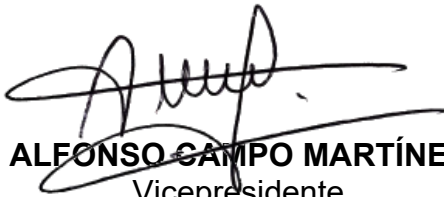
**ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR** el presente acto administrativo, en la página web del Consejo Nacional Electoral: [www.cne.gov.co](http://www.cne.gov.co), que se debe publicar porque fue en el marco de la audiencia de revocatoria.

**COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026).



**CRISTIAN RICARDO QUIROZ ROMERO**  
Presidente




**ALFONSO CAMPO MARTÍNEZ**  
Vicepresidente




**MARITZA MARTÍNEZ ARISTIZÁBAL**  
Magistrada Ponente

Esta decisión fue discutida en la Sala Plena Permanente del 06 de febrero de 2026, adoptada y notificada en la Audiencia Pública permanente del 06 de febrero de 2026.

**Ausente por comisión:** Magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda

**Vo.Bo:** Adriana Milena Charari Olmos, Secretaria Técnica de Sala. 

**Revisó:** Reynel David de la Rosa Saurith – Técnico Operativo – Secretaría Técnica de Sala

**Revisó:** María Nelly Martínez - Asesora– Despacho Ponente 

**Proyectó:** Juan Diego Rojas- Profesional Especializado – Despacho Ponente **JDRM**

**Radicado No.** CNE-E-DG-2025-029934 y CNE-E-DG-2025-029935